BOLETÍN Nº 7.966-05

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “simple” y “suma”, según el caso, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en crear una Ley sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y derogar los cuerpos legales que indica, con el objeto de adecuar la normativa vigente a la nueva institucionalidad propuesta.

2°) Que el articulado de esta iniciativa contiene las siguientes disposiciones que son normas calificadas de quórum calificado para su aprobación, por tratarse de limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de ciertos bienes conforme al inciso segundo del numeral 23° del artículo 19 de la Constitución Política.

Los artículos 6°, 11, 22 letras e), g), h), e i), 23, 42, 43, 57, 58, 59, 85, 91 del ARTÍCULO PRIMERO; letras b), c) y d) del ARTÍCULO CUARTO, y letras (i) y (ii) del inciso sexto del numeral 1 del artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, sustituido en el ARTÍCULO QUINTO.

3°) Que el proyecto fue aprobado en general por 7 votos a favor, 1 voto en contra y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó por la negativa el señor Marinovic, don Miodrag. Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo, y Robles, don Alberto.

4°) Que Diputado Informante se designó al señor SILVA, don ERNESTO.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda; Julio Dittborn, Subsecretario de Hacienda; Pablo Correa y la señora Rosario Celedón, Coordinadores de Mercado de Capitales; Hernán López, Intendente de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros; Miguel Zamora, Coordinador de Política Tributaria; Ignacio Briones, Coordinador de Política Internacional; Patricio Valenzuela, Jefe de Regulación de Valores; Joaquín Fernández, Gonzalo Carreño y Jaime Salas, Asesores de Mercado de Capitales; Francisco Moreno, Coordinador Legislativo; Jorge Tapia, Asesor, todos del Ministerio de Hacienda, y Pedro Castro, Jefe del Departamento de Impuestos Directos de la Subdirección Normativa del Servicio de Impuestos Internos.

Concurrieron también los señores Fernando Tisné, Presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI); Luis Alberto Letelier, Asesor Legal del Directorio de ACAFI; Pablo Lira, Director de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G. (AAFM), y las señoras Mónica Cavallini, Gerente General de la AAFM; Evelyn Aubele, Abogado de la AAFM; María Paz Hidalgo, Directora de la AAFM; Axel Christensen, Vicepresidente; Alberto Etchegaray, Integrante, ambos del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda, y Patricio Arrau, Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa

En el mensaje se expresa que Chile está en una posición privilegiada para hacer de su mercado de capitales una plataforma de infraestructura moderna y eficiente, que aporte al desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En efecto, después de sortear apropiadamente la crisis financiera internacional, Chile demostró que el orden de las finanzas públicas, junto a un marco jurídico ordenado y respetado por todos y una industria eficiente y responsable, hacen de nuestro país un lugar atractivo para agentes e inversionistas de todas partes del mundo.

Las condiciones imperantes en Chile le permitirán transformarse en un país exportador de servicios financieros, tal como ha ocurrido exitosamente en otros sectores como la agroindustria, viticultura, pesca y minería, en la medida que el marco jurídico vigente sea el adecuado para lograr ese objetivo. Nuestro país, siendo un mercado relativamente pequeño, pero abierto comercialmente al resto del mundo, tiene el potencial para ampliar sus exportaciones, más allá de las materias primas, hacia sectores de mayor valor agregado, aprovechando sus ventajas

comparativas, conocimiento y experiencia. Este es el caso particular de la industria de administración de activos de terceros y de asesorías financieras para inversionistas y emisores, tanto chilenos como extranjeros.

Desde el surgimiento del nuevo sistema de administración de fondos previsionales, Chile ha ido desarrollado un conocimiento cada vez más sofisticado en lo que a la administración de recursos se refiere, tanto a nivel académico como empresarial. Este vasto conocimiento nos lleva a aspirar a que los nuevos servicios y productos financieros, ligados a la administración de recursos, sea algo exportable en el corto y mediano plazo.

Se hace hincapié en el mensaje que en base a dos pilares fundamentales se estructura el proyecto: un conjunto de reformas a la industria de fondos, de índole institucional y, otro conjunto de reformas, de naturaleza tributaria.

Actualmente, coexisten diversos cuerpos legales que, a pesar de regular servicios financieros similares, establecen un marco jurídico para su prestación que, en determinadas materias, no aborda simétricamente problemáticas equivalentes, lo que genera incentivos a arbitrar entre regulaciones, optando por aquéllas menos restrictivas.

Este es el caso de las diversas leyes que rigen a la administración de fondos mutuos, la administración de fondos de inversión, la administración de fondos para la vivienda y la administración de fondos de capital extranjero.

A su vez, tal marco jurídico, al tratar de manera diferenciada esos servicios financieros, introduce costos innecesarios que se evitarían si dichos servicios pudieran ser ofrecidos por un prestador de servicios que se sometiera a una sola legislación.

Estos problemas y costos distorsionan y encarecen innecesariamente el servicio de administración de recursos, lo que, sumado a otros de naturaleza tributaria, han reducido la competitividad de los prestadores locales frente a sus pares a nivel internacional.

El principal objetivo del proyecto de ley es permitir que Chile se transforme en un país exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras y ampliar la gama de productos financieros con que cuentan los inversionistas nacionales y extranjeros que invierten en Chile. Todo ello, manteniendo la seguridad y el prestigio de nuestro mercado.

Para esto, el proyecto de ley pretende generar un único cuerpo legal aplicable a la prestación de los servicios de administración de fondos y carteras individuales, generando un tratamiento común para problemáticas equivalentes y manteniendo aquella diferenciación necesaria para mantener la adecuada protección de los inversionistas y para el eficiente funcionamiento de las actividades que por su naturaleza así lo requieran.

Esto se pretende a través de diferentes medidas contempladas en el actual proyecto de ley, consistentes en:

a) Consolidar y simplificar los cuerpos legales que regulan la administración de fondos.

b) Incorporar una regulación sobre administración de portafolios individuales, para establecer un marco mínimo de información y prestación del servicio, que aborde el tratamiento de algunos potenciales conflictos de interés y otras materias en las que pueda estar comprometido el interés público, tanto para administradoras como otro tipo de entidades que ofrezcan este servicio.

c) Incorporar, para el ejercicio de funciones de asesoría financiera, gestión y comercialización de fondos, un nivel mínimo de idoneidad técnica o conocimientos que deben tener quienes participen de esas actividades.

d) Incorporar a fondos menos rescatables aquellas mejoras contempladas en el proyecto MKIII, tanto las que fueron incluidas para fondos mutuos como las originalmente contempladas para fondos de inversión.

e) Entregar mayor flexibilidad que la actualmente contemplada, como por ejemplo, la inversión de fondos en valores emitidos o fondos gestionados por la misma administradora.

El proyecto busca la creación de un nuevo marco legal, simplificado y simétrico, que será aplicado a los fondos a que el mismo proyecto se refiere y que tendrá como fines principales:

- Estandarizar el marco regulatorio.

- Definir un tratamiento razonable y equitativo para la industria de fondos.

- Especificar restricciones y requerimientos de los fondos considerando el tipo y número de inversionistas y la liquidez subyacente de los activos y de la cuota.

- Promover la inversión extranjera en Chile.

- Subir los estándares de la industria.

- Hacer la operación y administración de fondos más simple y a un menor costo.

- Mejorar el acceso al financiamiento para la industria de capital de riesgo y las pequeñas y medianas empresas.

- Ofrecer a los inversionistas, nuevos productos financieros y mayores alternativas de inversión.

B. Estructura y contenido del proyecto

El proyecto de ley, consta de dos Títulos:

1) Gestión de Fondos: es aquel que consolida en un solo cuerpo legal, las disposiciones aplicables a la administración de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos de capital extranjero y de fondos para la vivienda, contenidas en las leyes Nº 18.045, Nº 18.815, Nº 18.657, N°19.281 y en el decreto ley N°1.328; y

2) Gestión Individual de Recursos: es aquel que establece el marco jurídico aplicable a la administración de recursos de terceros mediante portafolios individuales.

Además de estos dos Títulos, el proyecto contempla dos artículos que modifican la ley N° 19.281 y la Ley sobre Impuesto a la Renta, para compatibilizar esos cuerpos legales a las disposiciones contenidas en este proyecto; un artículo adicional que sustituye el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.190 para simplificar y perfeccionar los incentivos a la inversión en capital de riesgo a través de fondos; y un conjunto de artículos transitorios cuyo objeto es permitir la adecuada entrada en vigencia del marco jurídico introducido por el proyecto.

El primer Capítulo del proyecto contiene la definición de algunos de los términos que se emplearán en el articulado de dicho proyecto y tienen por objeto acotar el alcance de las disposiciones contenidas en éste.

El segundo Capítulo, establece el marco general aplicable a las administradoras de fondos y a los responsables de su dirección, tales como requisitos de constitución, el patrimonio y las garantías exigidas para el ejercicio de la actividad, las prohibiciones y responsabilidades, y el procedimiento de liquidación de la entidad y sus fondos, entre otras materias. Las disposiciones contenidas son similares a las actualmente vigentes, pero se adecuó la redacción para facilitar la comprensión de éstas y precisar las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros. Además, se establecen responsabilidades adicionales, lo que tiene por objeto elevar los estándares para el ejercicio de la actividad en consideración de la mayor libertad que el nuevo articulado entrega a estas entidades.

El tercer Capítulo fija las reglas que deben cumplirse en la administración de los recursos del fondo, en la definición del nombre y comercialización de los mismos, en la relación entre el fondo y los aportantes del fondo, y las normas de gobierno corporativo que deben aplicarse en el funcionamiento de cada fondo.

El articulado propuesto moderniza las disposiciones vigentes, estableciendo que la diferenciación entre fondos de inversión y fondos mutuos radica en la rescatabilidad de la cuota, siendo las restricciones a la inversión y las normas de gobierno corporativo, consecuencia de esa rescatabilidad. Es así como los fondos que no permitan el rescate total y permanente de los recursos invertidos o que, permitiéndolo, no paguen el

valor de las cuotas rescatadas en un período igual o inferior a 10 días, se denominarán fondos de inversión, siéndoles aplicables las normas de gobiernos corporativos correspondientes. Por otro lado, aquellos fondos que sí permitan el rescate total y permanente de los recursos invertidos y que paguen dichas cuotas en un plazo inferior o igual a 10 días, se denominarán fondos mutuos, siéndoles aplicables las restricciones a las inversiones respectivas.

Reconociendo los beneficios que introdujeron las reformas contenidas en la ley Nº 20.448 a la industria de administración de fondos mutuos y teniendo en consideración que gran parte de dichas reformas son aplicables a la administración de fondos de inversión, el capítulo tercero las extiende a estos últimos. Entre ellas, destacan el esquema de depósito de reglamentos internos como requisito para la creación y comercialización de ambos tipos de fondos y las modificaciones efectuadas por dicha ley para permitir la introducción de los Exchange Traded Funds (ETF) en Chile. A su vez, este Capítulo opta por mantener la regulación más eficiente de entre aquellas que abordaban de manera distinta las problemáticas comunes a ambos tipos de fondos. Por ejemplo, este es el caso de la posibilidad de que existan series de cuotas, la cual, con el proyecto, se establece para ambos fondos y no sólo para los fondos mutuos, como ocurre en la actualidad.

Estas reglas contenidas en el tercer Capítulo, conforman un marco jurídico flexible y moderno que compatibiliza la necesidad de las industrias de contar con mayores herramientas y espacios para poder ofrecer un mejor servicio financiero y una mayor gama de productos financieros, con la debida protección de los inversionistas y mantención de los principios de equidad, transparencia, orden y competencia que debe tener el mercado nacional. Esto, al dar más libertad a las administradoras en la gestión de los recursos de los fondos y otorgar las facultades de regulación y fiscalización a la Superintendencia de Valores y Seguros. Estas nuevas facultades para la Superintendencia, necesarias para actuar cuando así lo requiera la debida protección de los inversionistas, implican la asignación de recursos adicionales a dicha entidad. En esta línea, este Capítulo permite el aporte y rescate en valores en ambos tipos de fondos, la oferta de fondos más sofisticados y riesgosos, en la medida que tales fondos se ofrezcan a inversionistas calificados, y flexibiliza la inversión de los fondos, permitiéndoles, por ejemplo, invertir en otros fondos administrados por la entidad, recomprar cuotas del mismo fondo y transar fuera de bolsa; todo ello, en la medida que se cumplan las condiciones que al efecto define el mismo Capítulo.

Asimismo, el Capítulo tercero libera de ciertas normas de gobierno corporativo, a aquellos fondos de inversión que permitan a los aportantes rescatar sus cuotas en un plazo inferior a 180 días, en el entendido que esa rescatabilidad da la opción a los aportantes de retirarse del fondo en caso que no estén de acuerdo con las medidas adoptadas por la administradora o por los demás partícipes del fondo. Las normas de gobierno corporativo contenidas en este Capítulo, son similares a las actualmente exigidas a los fondos de inversión, esto es, la existencia de un Comité de Vigilancia y someter a la Asamblea de Aportantes ciertas materias.

Finalmente, el Capítulo cuarto establece la modalidad de repartos de beneficios y de tributación de los fondos y sus cuotas. Respecto de lo último, el proyecto no modifica en lo sustancial el tratamiento tributario de los fondos -no contribuyentes-, así como el de sus cuotas y su enajenación o rescate en el caso de inversionistas nacionales -mismo tratamiento tributario que las acciones de sociedades anónimas abiertas.

En el caso de inversionistas extranjeros, el proyecto, con el fin de permitir que Chile se transforme en un país exportador de productos y servicios financieros ligados a la administración de carteras, exime de impuestos tanto el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como las cantidades repartidas, que correspondan a fondos que invierten al menos el 80% de su activo en el extranjero. Dicha exención de impuestos se justifica, en el entendido que, de cumplirse esta condición, se trata de una exportación de servicios, en la cual tanto la fuente como el destino de las rentas es extranjero. Cuando el fondo no sea de aquellos que cumplan la condición anterior, el proyecto establece que el impuesto adicional será de 10%, tratamiento que resulta equivalente al que hoy se establece para los fondos de inversión de capital extranjero y los fondos de inversión de capital extranjero de riesgo, de forma que exista un tratamiento tributario similar y coherente. Independientemente de la distribución de las inversiones del fondo entre activos locales y extranjeros, el proyecto libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros, impulsando así la prestación de esta clase de servicios por parte de la industria chilena.

El Capítulo quinto define el marco de acción de los fondos de inversión privados, en términos similares al de las disposiciones actualmente vigentes, tanto en términos institucionales como tributarios, manteniendo éstos, entre otros aspectos, su condición de no contribuyentes. El proyecto, establece ciertas precisiones en materia de obligaciones de entrega de información y prohibiciones relacionadas con la oferta pública de estos fondos. Adicionalmente, el proyecto les extiende la obligación legal de distribuir como dividendos al menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio. Finalmente, establece límites a la participación de la administradora y sus personas relacionadas en fondos privados bajo su administración, así como requisitos mínimos en cuanto al número e importancia de los aportantes no relacionados.

El Título relativo a la Gestión Individual de Recursos, establece aquel marco jurídico mínimo necesario para que exista una consistencia entre las regulaciones aplicables a la administración de recursos en la forma de fondos y de carteras individuales, entendiendo que las problemáticas que surgen de la prestación de ese servicio, son similares. Es decir, los conflictos de interés inherentes al servicio de administración, los riesgos de las inversiones efectuadas por cuenta de terceros y el riesgo sistémico o impacto en la reputación del mercado que puede producir la prestación negligente o fraudulenta del servicio de gestión de recursos, ya sea por la magnitud de los recursos o por el número de afectados, son equivalentes en ambos tipos de administración.

Es por tal razón, que este Título incorpora normas generales de tratamiento de conflictos de interés, tales como prohibición y definición de obligaciones, restricciones y condiciones para el ejercicio de la actividad cuando ésta pueda comprometer la fe pública. En este último caso, se requiere de la inscripción en el registro especial que para esos efectos llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y, además, quien ofrezca ese servicio, quedará sometido a la fiscalización de este organismo.

El proyecto simplifica los actuales requisitos establecidos para la inversión extranjera a través de fondos locales, al sustituir el conjunto de disposiciones que requerían de la conformación de un fondo especial para esos efectos, por la sola modalidad de tributación de los aportantes extranjeros de un fondo mutuo o de inversión nacional. De esta manera, se reducen los costos asociados a la gestión de recursos de inversionistas extranjeros, permitiendo la oferta directa de fondos nacionales. Para ello, el proyecto deroga la ley N° 18.657 e incorpora específicamente en su articulado el tratamiento tributario de esos inversionistas extranjeros.

Con el objeto de disminuir los costos asociados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor diversificación de los recursos originados en ese ahorro, el proyecto elimina la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, permitiendo a las instituciones recaudadoras invertir directamente los recursos en fondos nacionales que cumplan las condiciones que se establecen al efecto en el proyecto. Es en esos términos en que el proyecto modifica la ley N° 19.281.

C. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto

- La ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (artículo segundo).

- El decreto ley N° 824, Ley sobre Impuesto a la Renta (artículo tercero).

- La ley N° 18.045, el decreto ley N° 1.328, de 1976, la ley N° 18.657 y la ley N° 18.815 (artículo cuarto).

- La ley N° 20.190 (artículo quinto).

D. Antecedentes presupuestarios y financieros

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 14 de septiembre de 2011, señala que en el marco de los objetivos del proyecto de ley, se deberá fortalecer a la Superintendencia de Valores y Seguros en labores adicionales de fiscalización, normalización y gestión, proyectándose un mayor costo el primer año de **$ 306.562 miles**, de los cuales $ 188.978 miles son de carácter permanente, asociados principalmente a remuneraciones, y $ 117.584 miles son gastos por una vez asociados a equipamiento y oficinas.

Respecto del personal, la situación estimada es:

Descripción	N°	Monto miles $	
		Mes	Año
Directivo G° 5	1	4.173	50.076
Profesional G° 7	3	2.912	104.832
Profesional G° 10	1	2.185	26.220
Totales	5	9.270	181.128

Respecto de lo anterior, estimaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros hacen prever un aumento importante en entidades fiscalizadas relacionadas con la administración de recursos de terceros, como se indica en cuadro siguiente:

	2010	2011	2012	2013
N° Adm. de Fondos	44	42	44	48
N° Adm. de Carteras	-	-	15	25
N° de Fondos	536	566	640	723
N° de Carteras	.	-	750	1250
Activos Administrados MMUS$	41.666	49.485	62.006	74.478

Cifras reales (hasta 2011) y estimadas al1 de enero de cada año, sobre fondos mutuos, de inversión, de capital extranjero y para la vivienda, y administración de cartera.

Por otra parte, y en el caso de los inversionistas extranjeros, el proyecto exime de impuestos tanto el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como las cantidades repartidas que correspondan a fondos que invierten al menos un 80% de su activo en el extranjero, en el entendido que, de cumplirse esta condición, se trata de una exportación de servicios. Cuando el fondo no cumpla la condición anterior, el proyecto establece que el impuesto será de un 10%, tratamiento que resulta equivalente al que hoy se establece para los fondos de inversión de capital extranjero y los fondos de inversión de capital extranjero de riesgo. Se estima que el costo fiscal de esta medida será de aproximadamente **$ 400 millones anuales**. Esta estimación fue efectuada en base a información proporcionada por el Servicios de Impuestos Internos (SII), relativa al impuesto adicional que fue retenido en los años 2009 y 2010 por las sociedades administradoras de fondos.

Finalmente, el proyecto de ley libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. Se estima que esta exención tendrá un costo fiscal de aproximadamente **$ 1.700 millones anuales**. Esta estimación se obtuvo a partir de información proporcionada por el SII, respecto del débito de IVA declarado por las sociedades administradoras de fondo durante el año 2010, y de información de la "Actualización del Estudio sobre la industria de la inversión colectiva en Iberoamérica", que permitió obtener una estimación del porcentaje del

patrimonio de los fondos de inversión que ha sido aportado por personas no residentes.

Mediante el Informe Financiero referido a las indicaciones al proyecto de ley a los artículos Primero, Tercero y articulado transitorio del proyecto de ley en trámite, se sostiene que para evaluar el impacto fiscal, lo primero es dar cuenta de los efectos esperados en el mercado como consecuencia de la nueva normativa sobre Fondos y de su tributación.

Al respecto, usando datos actualizados de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se llega a que, de darse un incremento de las tendencias actuales de crecimiento anual del número de fondos (bajo supervisión) y capital administrado de un 4.4% y 4.1%, respectivamente, hasta un 9% y 9%, se observaría un incremento en el total de activos administrados desde $ 25,67 billones (Cuadro #1) hasta $28,31 billones (Cuadro #2), en ambos casos, al año 2015.

Cuadro #1: Mercado sin variación

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° Adm. de Fondos	43	44	42	45	39	41	41
N° de Fondos	516	536	566	591	614	641	669
Activos Administrados ($ Bill.)	14,25	21,01	23,15	22,77	23,69	24,66	25,67

Cuadro #2; Mercado con tasas de crecimiento aumentadas

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N° Adm. de Fondos	43	44	42	45	39	41	41
N° Adm. de Carteras	-	-	-	-	-	30	35
N° de Fondos	516	536	566	591	614	669	729
N° de Carteras	-	-	-	-	-	1.573	1.726
Activos Administrados($ Bill.)	14,25	21,01	23,15	22,77	23,69	25,97	28,31

En relación al efecto fiscal en materia de tributación de Fondos, el impacto fiscal dependerá de dos aspectos; i) de los cambios de comportamiento que se observe en los aportantes y administradoras de fondos a partir de las modificaciones normativas propuestas, tanto por efecto de las preferencias de inversionistas que se observen al elegir entre Fondos de Inversión o Fondos Mutuos, o entre estos Fondos y otros instrumentos en el mercado, como en el aprovechamiento de los incentivos de la ley; y ii) del crecimiento en el número de fondos y recursos administrados, el que podría potencialmente generar una mayor recaudación fiscal.

Evaluados ambos aspectos, resulta necesario indicar que, con la información disponible, no es posible cuantificar el impacto fiscal, puesto que, por ejemplo, el efecto del tratamiento tributario aplicado a un mayor número de fondos y de recursos invertidos en dichos instrumentos, depende de muchos elementos, tales como rentabilidad, normativa tributaria aplicable a los contribuyentes inversionistas, momento de realización de inversiones y residencia del inversionista.

En todo caso, resulta conveniente actualizar los efectos ya anticipados en el Informe Financiero IF 110, de 14/09/2011, respecto de los inversionistas extranjeros, a quienes se exime tanto de impuestos al mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas, como de la tributación por las cantidades repartidas que correspondan a fondos que invierten al menos un 80% de su activo en el extranjero, en el entendido que en esta condición se trata de una exportación de servicios. En este caso, el costo fiscal, actualizado, es de $ 530 millones, aproximadamente, según estimación realizada con datos 2010 y 2011 del SII.

Del mismo modo, resulta procedente actualizar la información correspondiente a la liberación del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros. En este caso, aplicando la misma metodología señalada para este caso en el Informe Financiero antes citado, se obtiene un costo fiscal aproximado de $1.890 millones, sobre la base de información del SII correspondiente al año 2011.

En relación al efecto fiscal en materia de tributación de instrumentos de renta fija, es posible afirmar que éste se estima nulo.

Por una parte, las modificaciones a los artículos 20, 74 y 104 de la LIR constituyen cambios operativos que mejoran la aplicación de la regulación ya existente y no modifican el principio de que la exención de ganancias de capital recae sobre el Instrumento, independiente de la residencia o domicilio del comprador. De esta forma, si bien se espera que las mejoras operativas antes señaladas incentiven una mayor participación de extranjeros en el mercado de renta fija, estas modificaciones *per se* no generan impacto fiscal. Por otra parte, la modificación propuesta en la regulación que deroga el artículo 106 de la LIR y que establece un artículo noveno transitorio para los inversionistas institucionales que no tengan domicilio ni residencia en Chile, restringe su marco de aplicación sólo a los bonos corporativos emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Por último, cabe señalar que el impacto esperado, en valor presente, en la recaudación fiscal, de un instrumento de renta fija emitido a su valor par, o que se le haya aplicado un mecanismo para que la recaudación fiscal sea equivalente, como lo establece la modificación propuesta ("tasa fiscal"), durante la vida del mismo, es nulo, dado que las pérdidas y ganancias de capital del instrumento se compensan.

Por todo lo antes expuesto, la Dirección de Presupuestos estima que, tanto las variaciones que pudieran experimentar los ingresos fiscales, así como los eventuales mayores requerimientos de la SVS y el SII, serán

incorporados en las leyes de presupuestos que corresponda e informados cuando el Congreso Nacional así lo requiera.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO

A. Discusión general

El Ministro señor Felipe Larraín hizo presente que la industria de administración de fondos de terceros en Chile ha experimentado un fuerte desarrollo durante los últimos años, totalizando a diciembre de 2010 activos bajo administración por cerca de 46.000 millones de dólares (21% del PIB, aproximadamente). Consultado al respecto, precisó que aquí hay prestación de servicios a inversionistas extranjeros en que el activo subyacente puede encontrarse dentro o fuera del país, pero lo importante es que, si se logra mejorar la estructura del mercado, simplificar la legislación y tener una sola normativa para los distintos tipos de fondos, se van a reducir los costos de operación y las barreras de entrada, y van a mejorar los retornos de los partícipes, además de dar a los operadores de la industria mejores herramientas para competir internacionalmente.

Explicó que, habiendo distintos vehículos de inversión, cada uno de ellos está regido por una ley diferente. En efecto, los fondos mutuos se rigen por el decreto ley Nº 1.328; los fondos de inversión por la ley Nº 18.815; los fondos de capital extranjero (Fice) y fondos de capital extranjero de riesgo (Ficer) por la ley Nº 18.657, y los fondos para la vivienda por la ley Nº 19.281. Adicionalmente, la Ley de Mercado de Valores, Nº 18.045, regula a las sociedades administradoras de fondos fiscalizados por la SVS (administradores generales de fondos), que pueden gestionar varios de estos vehículos de inversión, simultáneamente.

Así entonces, si bien estos vehículos persiguen objetivos similares, la regulación actual establece diferencias en una serie de aspectos que no tienen una justificación técnica clara, generando confusión entre los inversionistas y motivando un arbitraje regulatorio orientado fundamentalmente a reducir la carga impositiva.

De ahí que el proyecto crea un cuerpo legal único, que fusiona, simplifica y perfecciona la legislación actual. En términos generales, moderniza el marco jurídico vigente, otorgándole a la industria mayores grados de flexibilidad para poder ofrecer un mejor servicio y una mayor gama de productos, compatibilizando lo anterior con una debida protección de los inversionistas y el resguardo de los principios de equidad, transparencia, orden y competencia. Por otro lado, propende hacia la existencia de un solo tipo de administradora, de manera de evitar la necesidad de utilizar distintos vehículos legales para prestar servicios equivalentes.

Además, incorpora regulaciones para la administración de portafolios individuales, a fin de establecer un marco legal mínimo que aborde a lo menos el tratamiento de algunos potenciales conflictos de interés, tanto para administradoras como para otro tipo de entidades que ofrezcan este servicio.

En consonancia con estos objetivos, el proyecto homologa la solución regulatoria de aquellos aspectos que son comunes a estos vehículos, entre ellos:

- Conceptualización del vehículo (definición del fondo, de la administradora, de los partícipes).
- Requisitos de funcionamiento para las administradoras (patrimonio mínimo, autorización de existencia, necesidad de constitución de garantías, etcétera) y para los fondos (número de partícipes, patrimonio mínimo, etcétera).
- Deberes y responsabilidades de la administradora (deberes de cuidado, custodia de títulos, segregación de activos, deberes de información, etcétera).
- Tratamiento de conflictos de interés.

No obstante, como una forma de reconocer los aspectos que son particulares para cada tipo de fondo, se establecen requisitos específicos en función de variables, tales como:

- La rescatabilidad de la cuota (límites a la inversión y normas de gobierno corporativo diferentes, según si la liquidez es a diez días o más).
- El tipo de inversionista (normas de diversificación y endeudamiento distintas, según se trate de inversionistas calificados o institucionales, o de pequeños inversionistas o *retail*).

En particular, el articulado establece como principio general que la diferenciación entre fondos mutuos y fondos de inversión radica en la rescatabilidad de la cuota (hasta diez días en el caso de los primeros y a más de diez en el caso de los segundos), y que las restricciones a la inversión y las normas de gobierno corporativo son consecuencia de dicha rescatabilidad.

Asimismo, el proyecto reconoce los beneficios de reformas establecidas en MKIII para la industria de administración de fondos mutuos, haciéndolas extensibles (aquellas que son homologables) a los fondos de inversión, como, por ejemplo:

- El depósito de reglamentos como requisito suficiente para comenzar a operar un fondo, sin perjuicio de subsanar las observaciones que pueda formular la SVS.
- La figura del aporte y rescate en valores.
- La posibilidad de que existan series de cuotas.

Con miras a una mayor flexibilidad y a la protección de los inversionistas, el proyecto relega al reglamento interno la fijación de políticas de inversión, liquidez, diversificación y endeudamiento, las cuales deberán ser consistentes y coherentes con lo que se establezca en cuanto a la rescatabilidad de la cuota y al tipo de inversionistas. En esta línea, se establece que la inversión de los recursos podrá efectuarse en todo tipo de instrumentos, contratos o bienes, siempre que éstos no estén prohibidos por la ley y que cumplan con los requisitos que establezca la SVS, pasando así de un enfoque positivo a uno negativo.

Como contrapartida a esta mayor libertad, la administradora será responsable de velar por que las inversiones del fondo le permitan cumplir a cabalidad con las normas de rescatabilidad y demás políticas establecidas en el reglamento interno. Asimismo, se establecen requisitos de idoneidad para aquellos que gestionen y comercialicen fondos, y se otorgan mayores facultades de regulación y fiscalización preventiva a la SVS, para la debida protección de los inversionistas.

Seguidamente, destacó el señor Ministro que el proyecto no modifica el tratamiento tributario de los fondos ni la tributación aplicable a los inversionistas nacionales, pero en el caso de los inversionistas extranjeros se establece que estarán exentos de impuestos por el mayor valor que corresponda a fondos que inviertan al menos 80% de su activo en el extranjero, por tratarse de una exportación "pura" de servicios. Es decir, el extranjero no residente que haga una ganancia de capital invirtiendo en fondos domiciliados en Chile, pero que a su vez tengan inversiones mayoritariamente en el exterior, no tributará por esa utilidad. Sin embargo, cuando el fondo no cumpla la condición anterior, el impuesto para el extranjero será de 10%, manteniéndose así el régimen tributario que hoy se aplica a los Fice/Ficer.

Por otro lado, el proyecto libera del pago de IVA a las remuneraciones que reciban las administradoras, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas extranjeros, como ya lo establece para otros casos el listado de servicios calificados como exportación por el Servicio de Aduanas. Esto, con el objetivo de promover a Chile como un centro financiero regional.

Con respecto al impacto fiscal de la iniciativa, explicó el señor Ministro que ésta requeriría fortalecer a la SVS para las labores adicionales de fiscalización y gestión, lo que supondría un mayor costo anual en régimen de $ 180 millones, aproximadamente. Por otra parte, se estima que el tratamiento tributario de las rentas obtenidas por extranjeros producto de su inversión en fondos locales tendría un costo fiscal aproximado de 800 mil dólares anuales. Asimismo, la exención de IVA a las comisiones cobradas a inversionistas extranjeros tendría un costo fiscal cercano a los 3,4 millones de dólares anuales. De esta manera, el costo anual total del proyecto sería del orden de 4,5 millones de dólares.

Advirtió, sin embargo, que el informe financiero no supone un aumento de los aportes desde el extranjero y que, si supusiera lo contrario y se asumiera una rentabilidad de 10% anual, y que un tercio de los nuevos aportes extranjeros se dirigen a fondos que invierten localmente, se requerirían nuevos aportes de inversionistas extranjeros por 1.350 millones de dólares para compensar la menor recaudación (3% de lo administrado actualmente). O sea, que es altamente probable que en lugar de costo se obtenga un beneficio fiscal, en la medida que se logre atraer a inversionistas extranjeros que inviertan en fondos nacionales cuyo activo subyacente se encuentre mayoritariamente en el exterior.

En conclusión, señaló que el proyecto busca la creación de un nuevo marco legal, simplificado y simétrico, que será aplicado a los fondos.

Respondiendo a las consultas e inquietudes de los miembros de la Comisión, el señor Ministro reiteró que, con el objeto de asegurar la protección de las inversiones, la iniciativa en comento establece requisitos de idoneidad para los partícipes de la industria de administración de fondos, incluida su fuerza de venta. Al mismo tiempo, crea un marco jurídico común que, si bien no innova en materia de sanciones, las cuales se encuentran establecidas en la Ley de Mercado de Valores, otorga mayores facultades normativas y fiscalizadoras a la SVS.

Añadió que ya hay gran cantidad de inversión extranjera bajo administración de operadores nacionales, por lo que Chile está ya exportando servicios financieros, lo que constituye una exportación no tradicional de alto valor agregado que capta mano de obra tanto especializada como no especializada. Hay, además, varias empresas locales que han abierto oficinas en otros países del continente y que están prestando estos servicios en la región.

En cuanto a la conveniencia de identificar los riesgos asociados a la industria de fondos para adoptar los resguardos que parezcan necesarios, estimó que el nivel de riesgo involucrado en este proyecto es bastante acotado en comparación con lo que ya existe, puesto que sólo se están entregando mejores herramientas para prestar un servicio que ya se presta en Chile, que maneja 46 mil millones de dólares de inversión y que tiene gran potencial de crecimiento. La única diferencia en este aspecto es que, en vez de establecerse una cartera de instrumentos de inversión permitidos (enfoque positivo), se va a fijar un listado de instrumentos prohibidos (enfoque negativo), pudiendo las administradoras adquirir todos los activos no incluidos en él.

Afirmó que, en definitiva, el proyecto ofrece potencialidades muy importantes para Chile, sumándose a iniciativas anteriores en el mismo sentido que apuntaban al cambio de regulaciones, la emisión de bonos en pesos por empresas extranjeras (huaso bonds), la incorporación de Chile al Mercado Integrado Latinoamericano de Bolsas de Comercio (MIL) junto con Colombia y Perú, y el ingreso a la OECD, entre otras.

El señor Ignacio Briones puntualizó que nuestro país ha desarrollado una capacidad tal en términos de infraestructura financiera y capital humano, que perfectamente puede convertirse en un polo regional o en una plataforma de mercado de capitales, antigua aspiración que, sin embargo, choca con la baja presencia de inversionistas extranjeros en Chile. Agregó que esta situación obedece al escaso desarrollo alcanzado por el mercado de renta fija en el país, al punto que menos del 1% del stock de bonos fiscales y corporativos existente en Chile está en manos de extranjeros, cifra que en Perú alcanza el 51%. Esto es relevante porque refleja la existencia de un mercado bastante desarrollado en términos de volumen, pero muy

deficiente en términos de liquidez y profundidad. A modo de ejemplo, afirmó que en Chile prácticamente no existen bonos con clasificación de riesgo inferior a triple o doble A, lo cual tiene que ver con la organización de nuestra industria, donde los inversionistas institucionales son tremendamente relevantes, pero están muy limitados en cuanto al tipo de activos que pueden adquirir, lo que para una empresa nueva, que no tiene historial pero quiere salir al mercado, significa que la demanda por sus bonos determina la oferta, es decir, que no tiene la capacidad de colocar endeudamiento en condiciones competitivas. Un ejemplo reciente de esto es la colocación hace un par de días de bonos de EFE cien puntos base por sobre el Tesoro chileno, pese a tener el mismo riesgo, lo que da una pista sobre la falta de profundidad del mercado de deuda nacional en términos de diversidad de actores, de niveles de apetito de riesgo, de plazos, etcétera. Para romper este desequilibrio, se hace necesario atraer nuevos actores que tengan perfiles de riesgo distintos a los inversionistas locales, porque mientras ese mercado no se desarrolle, la internacionalización de nuestro mercado de capitales no se va a producir.

Lo que hace el proyecto, partiendo de conversaciones con inversionistas extranjeros, es tratar de resolver algunos problemas operativos que ellos enfrentan a la hora de entrar al mercado chileno. Uno de ellos es que tenemos un marco legal que en teoría busca atraerlos, dándoles por ejemplo una serie de beneficios en materia de tributación de la ganancia de capital, pero que en su implementación práctica no operan. Sucede, por ejemplo, que para acogerse a la exención del impuesto a las ganancias de capital, el extranjero debe adquirir y vender sus bonos en bolsa en Chile, en subasta continua, siendo que en el resto del mundo el mercado de bonos opera por regla general *over the counter* (fuera de bolsa). Subrayó el expositor que, si bien estos cambios operativos tocan elementos que están regulados en los artículos 104 y 106 de la LIR, no se están creando a través de ellos nuevas franquicias tributarias ni irrogan costo fiscal. Por el contrario, en muchos aspectos mejoran la forma de hacer *enforcement* de lo que la ley contempla.

Una segunda restricción que se aborda en el proyecto es la que afecta a las empresas que quieren emitir bonos, pero el encargado de hacer la retención del impuesto por los intereses es el propio emisor. Esto significa que quienes quieran emitir bonos para atraer inversionistas extranjeros acogiéndose a la franquicia tributaria, deben crear en sus empresas una división encargada de hacer la retención del impuesto, lo que no es eficiente ni lógico.

En tercer lugar, hoy en día se establece que para acogerse al beneficio tributario, el bono debe ser colocado exactamente a su valor par, esto es, que la tasa de carátula coincida con el precio que el mercado le asigne ese día, lo cual es imposible porque el precio de colocación sólo es posible conocerlo ex post. Esta disposición quiso evitar la elusión fiscal, por ejemplo, por la vía de emitir un bono que no pague intereses durante su vida, pero que en la práctica sí tiene un retorno económico; y cuando ello ocurre, existe una ganancia de capital que queda exenta, pero que está disfrazando intereses que sí deben pagar impuestos. Por eso se dispuso que la emisión de bonos debía ser a la par y no bajo o sobre ella. No obstante, en los

mercados desarrollados esto se soluciona creando una tasa fiscal que señala cuánto es el impuesto sobre los intereses que cada bono tendrá que pagar.

Durante la discusión general del proyecto, el señor Subsecretario de Hacienda explicó que el Ejecutivo estudia la presentación de indicaciones para perfeccionar el proyecto que se refieren a tres grandes temas. En primer lugar, hay las que buscan hacer precisión sobre el tratamiento tributario de los fondos de inversión públicos. A modo de ejemplo, señaló que en virtud de estas enmiendas, habrá obligación legal de llevar contabilidad separada para el fondo mismo y su administradora, exigencia que actualmente se hace sólo por norma administrativa del SII. Asimismo, se va a imponer a las administradoras la obligación de entregar información periódica sobre el número de aportantes y otros antecedentes para que el SII pueda conocer la magnitud de los fondos. También se van a extender los beneficios tributarios que hoy tienen los inversionistas extranjeros en FICE y FICER a toda la industria de fondos del país. Por último, se va a mejorar y precisar la exención de IVA a las comisiones o remuneraciones pagadas a las administradoras por aportantes extranjeros que inviertan en fondos cuyos activos sean también mayoritariamente extranjeros, lo cual implica simplemente proyectar al sector de servicios financieros una política nacional ya existente como es la devolución del IVA a los exportadores.

En segundo lugar, hay un conjunto de indicaciones que tienen por objeto perfeccionar el marco regulatorio de los fondos de inversión privados. En este aspecto, el proyecto original contiene ya algunos avances. Por ejemplo, se establece la obligación de entregar información al SII sobre los fondos administrados, su cuantía, aportantes, dividendos distribuidos, etcétera. Asimismo, se establece un límite del 25% a la participación de las sociedades administradoras y sus personas relacionadas como aportantes en los FIP, lo cual es muy importante porque hoy en día no existe límite alguno y el objetivo es separar la administración de la propiedad del fondo.

En tercer lugar, el proyecto establece que dentro de cada FIP debe haber un mínimo de dos aportantes no relacionados, además de la sociedad administradora, transcurrido un año desde su creación, de modo que estos fondos correspondan efectivamente a vehículos de inversión colectivos. Estos aportantes pueden ser nacionales o extranjeros, pero los extranjeros que inviertan en los FIP no tienen derecho a la tasa única de 10% que tienen los inversionistas en fondos públicos que tengan a su vez más del 80% de su inversión en activos extranjeros. El proyecto primitivo establece además que los FIP no pueden desarrollar actividades económicas gravadas con el impuesto de primera categoría, ratificando su carácter de vehículos de inversión pasivos y dejando en claro que ellos no son para reemplazar formas societarias con el fin de eludir el pago del impuesto.

En torno a estas materias, las indicaciones anunciadas exigirán adicionalmente a los FIP llevar contabilidad completa y entregar información periódica al SII, deberes que hoy no están contemplados en la normativa vigente. Igualmente, se explicita que los aportantes extranjeros de FIP no

tienen acceso al impuesto único del 10% de que gozan los inversionistas en fondos públicos.

Un tercer grupo de indicaciones se dirige finalmente a facilitar el acceso al endeudamiento en renta fija a las empresas de menor tamaño, ya que hoy día sólo las grandes empresas emiten bonos y la idea es ampliar este mercado para que haya más oferta de instrumentos de esa naturaleza.

El señor Ignacio Briones precisó que uno de los propósitos del proyecto es incorporar al mercado de bonos actores distintos a los actualmente existentes, que son esencialmente los inversionistas institucionales, por estimarse que allegar –por ejemplo- inversionistas extranjeros resulta tremendamente importante para potenciar una diversificación de la demanda por instrumentos (de deuda), a fin de que las empresas que hoy no tienen acceso al mercado de bonos, básicamente porque los inversionistas institucionales están sujetos a limitaciones propias de su giro que los obligan a tomar activos de muy bajo riesgo, lo que tiende a favorecer a empresas grandes y con amplia trayectoria, puedan obtener financiamiento por esta vía y no sólo a través del crédito bancario.

El propósito de las indicaciones es, entonces, atraer actores de manera de aumentar la demanda y generar competencia en el mercado de renta fija chileno. Dichos actores serían básicamente inversionistas extranjeros, que hasta ahora no participan de este mercado debido a una serie de falencias operativas que hacen inviable su llegada. Una muestra de ello es que, pese a ser muy desarrollado este mercado en Chile en términos de su valor de stock, menos del uno por ciento de los bonos están en manos de extranjeros, lo cual constituye una clara anomalía frente a la apertura que exhibe nuestro país en muchas otras áreas.

Subrayó el señor Briones que las modificaciones propuestas no constituyen en caso alguno una ampliación de las exenciones tributarias a las ganancias de capital ya existentes y contenidas principalmente en el artículo 104, y en menor medida en el 106, ambos de la LIR, sino que se busca hacerlas operativas.

Refiriéndose al contenido específico de las indicaciones en comento, explicó el señor Briones que, según el artículo 104 de la LIR, cuando los bonos son emitidos y colocados en Chile pueden acogerse a la exención de pago del impuesto a la ganancia de capital, cumpliendo algunas condiciones. Una de ellas es que los bonos sean comprados y vendidos por el inversionista en la bolsa de comercio, en un mecanismo de subasta continua, lo cual constituye una anomalía de mercado porque en la mayor parte del mundo el mercado de bonos opera fuera de bolsa, sujeto al control de las respectivas superintendencias por tratarse de instrumentos de oferta pública. La propuesta entonces busca eliminar esta restricción, obligando en cambio, al intermediario, a informar el precio de compra y venta de los bonos al SII, el cual tiene además las herramientas para cotejar si ese precio está acorde al mercado o no, lo que no difiere mayormente de las cintas de precios que utilizan las AFP para valorizar sus activos.

Por otra parte, hoy en día, cuando un bono quiere acogerse a la exención del impuesto a la ganancia de capital, la retención del impuesto sobre los intereses que paga ese bono está a cargo del emisor. Así, si una empresa quiere emitir un bono en esas condiciones, básicamente debe crear una división para hacer la labor de retención, lo cual resulta bastante ineficiente. Se propone entonces que los inversionistas chilenos paguen el referido impuesto sobre base devengada de acuerdo al régimen general y que, en el caso de los no residentes, la retención sea efectuada por el custodio, centralizándola así en un agente de mercado que ofrece todas las garantías y que informa al SII.

En tercer lugar, la regulación actual establece que el bono debe ser colocado exactamente a su valor par, lo cual resulta absurdo porque es imposible saber ex ante cuál es el valor que el mercado le asignará a un instrumento recién emitido. La razón que subyace dice relación con que, si se coloca un bono bajo el valor par, se podrían estar disfrazando intereses sujetos a impuestos como ganancia de capital exenta. En el extremo, hay bonos denominados "cero cupones", que no pagan intereses, pero se venden a menor precio que su valor nominal. Por lo mismo, estos bonos no pagan impuesto sobre los intereses, pero no hay duda de que conllevan una ganancia económica asociada al pago de intereses. Lo que se propone al respecto es eliminar el castigo por emitir bajo la par, creándose a cambio la figura de la tasa fiscal, que consiste básicamente en una tasa de cupón que sigue la vida del bono y que equivale a su valor de colocación en el mercado, para efectos del pago del impuesto sobre los intereses. Esto no es ninguna rareza; ocurre en la mayoría de los mercados de bonos en el mundo, y un ejemplo reciente de ello son las colocaciones soberanas hechas por Chile en Estados Unidos.

Un cuarto elemento se refiere a que la ley vigente otorga a los emisores de bonos corporativos la libertad de hacerlo al amparo o fuera del artículo 104 de la LIR. La propuesta es que todas las nuevas emisiones de esta clase de bonos se hagan precisamente al alero de dicha disposición. Esto, porque en el esquema actual existe un incentivo para que el emisor coloque un bono bajo la par, que no lo compra un chileno, sino un inversionista institucional extranjero que está beneficiado por el artículo 106 de la LIR. Nuevamente aquí ocurre que los impuestos sobre los intereses que legítimamente corresponde pagar, se evitan. Adicionalmente, hay también un incentivo para que ciertas personas se disfracen eventualmente de inversionista institucional extranjero y por esa vía se eluda el tributo correspondiente. Por lo tanto, corregido el problema del pago del impuesto sobre los intereses mediante la creación de la tasa fiscal, se puede forzar a que todos los bonos se emitan conforme al artículo 104, evitándose el arbitraje tributario mencionado.

Debe tenerse presente, también, que la normativa actual no contempla como beneficiarios de la exención (a la ganancia de capital) a los bonos emitidos por no residentes, pero colocados en el mercado chileno (denominados "huaso *bonds")*. La propuesta en este caso es que se consideren elegibles dichos bonos para acogerse al beneficio.

Finalmente, el artículo 106 de la LIR otorga, como se dijo, una exención tributaria a la ganancia de capital para los inversionistas institucionales extranjeros si cumplen con ciertas características y requisitos operativos, que tienen por objeto evitar que inversionistas locales se disfracen de extranjeros para hacer arbitraje tributario. Otra vez se propone eliminar aquí la exigencia de transacción en bolsa, manteniendo sí la obligación de informar los precios de mercado al SII, y se reducen los trámites de elegibilidad para ser considerado inversionista institucional extranjero, atendida la incorporación de la figura de tasa fiscal.

El Diputado señor Marinovic consultó cuál sería el efecto del proyecto en estudio sobre el tipo de cambio real, teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es atraer inversión extranjera al mercado financiero nacional. Asimismo, preguntó si las modificaciones propuestas podrían configurar una discriminación arbitraria en contra de los pagadores de renta chilenos y a favor de los no residentes.

El Diputado señor Lorenzini preguntó cómo se piensa prevenir el eventual incremento de la elusión tributaria, utilizando los mecanismos que se pretende corregir, durante el periodo de vacancia de la ley en proyecto.

El Subsecretario de Hacienda señaló que para el Gobierno constituye una preocupación de primerísimo nivel lo que ha venido ocurriendo con el tipo de cambio real, en particular, el fortalecimiento del peso frente al dólar en lo que va corrido de este año, por lo que el Ejecutivo va a condicionar la implementación de cualquier legislación que pueda tener impacto sobre el tipo de cambio.

Con respecto a la posible discriminación en contra de los inversionistas nacionales, señaló que hoy en día existen normas, como el decreto ley Nº 600, que establecen privilegios para los extranjeros con el objeto de atraer mayor inversión. Reiteró en todo caso que, en la devolución del IVA pagado por extranjeros sobre las comisiones por administración de fondos, se está siguiendo la política general de no aplicar impuestos a las exportaciones de servicios.

El señor Briones aclaró que la posibilidad de hacer arbitraje tributario en el mercado de bonos chileno se ve bastante disminuida debido a que prácticamente no hay inversionistas extranjeros en él. Los pocos que hay tienen bonos del Tesoro y del Banco Central que por su naturaleza están exentos de impuestos, pero no bonos corporativos, que es donde podría darse ese fenómeno.

El Diputado señor Jaramillo dijo entender que las pequeñas y medianas empresas no tendrían las mismas ventajas para acceder al mercado de bonos. Pide aclarar cuáles serán los parámetros a utilizar para determinar su elegibilidad y sugiere utilizar el mecanismo regulado en el proyecto para canalizar inversiones hacia las cooperativas.

El señor Briones recordó que el núcleo de la iniciativa apunta a reducir el costo del financiamiento que requieren las empresas, facilitando que ellas puedan emitir y colocar bonos en el mercado para ser adquiridos por

inversionistas con menor aversión al riesgo que hoy no existen. Esto favorece particularmente a las empresas de menor tamaño y de alguna manera contrasta también el efecto sobre el tipo de cambio que preocupa a algunos.

El Diputado señor Marinovic dijo compartir el objetivo de facilitar el acceso de las Pymes a nuevas fuentes de financiamiento diversas, estables y más baratas, pero pareciera que el proyecto privilegia las fuentes externas. Preguntó si podría haber también fuentes internas de financiamiento con las mismas características, de modo que la apertura del mercado de bonos no implique una avalancha de dólares desde el extranjero.

El Diputado señor Jaramillo se refirió a una solicitud efectuada en la sesión anterior relacionada con el impacto que podría tener el proyecto en el total de bonos, ascendente a 15 mil millones de dólares.

El señor Briones explicó que, como el proyecto apunta a bajar la tasa de financiamiento para los emisores de bonos chilenos, ello implica reconocer que actualmente existe un diferencial de tasa entre lo que se paga en Chile y lo que esos mismos emisores chilenos pagan en el exterior. Al bajar ese diferencial, por ejemplo en un punto porcentual, se produce un efecto revalorizador sobre los flujos descontados de toda la actividad productiva de la economía. Tal es el efecto que el Ejecutivo ha cuantificado en 15 mil millones de dólares, a perpetuidad.

El Diputado señor Marinovic coincidió con la propuesta de bajar la tasa de financiamiento para hacerla equivalente con las del exterior. Insistió, sin embargo, en que esa baja no debe sustentarse únicamente en un beneficio tributario para los inversionistas extranjeros y preguntó si existirá la posibilidad de que un fondo nacional pueda prestar dinero a las Pymes gozando de los mismos beneficios que esos inversionistas.

El Diputado señor Auth manifestó su disposición a votar favorablemente el proyecto porque facilita el acceso al crédito a nuevos inversionistas y emprendedores.

El señor Miguel Zamora recordó que el proyecto en debate tiene por objeto aunar en un solo cuerpo legal distintas leyes que actualmente regulan la creación de fondos mutuos y de diversos fondos de inversión, incluidos los que sólo pueden formar inversionistas extranjeros, denominados FICE y FICER. Estos últimos gozan hoy de un tratamiento tributario especial que consiste en un impuesto de 10% (sobre las ganancias obtenidas). A partir de la ley en proyecto, dichos inversionistas conservarán el beneficio cuando inviertan en cualquiera de los fondos regulados por ella. Cosa distinta son las indicaciones anunciadas, que modifican la LIR en materia de beneficios tributarios por el mayor valor obtenido en la venta de bonos emitidos por empresas chilenas. Estas exenciones han demostrado no ser eficaces para atraer inversionistas extranjeros que quieran adquirir otros bonos que no sean los emitidos por el Estado. La propuesta en este caso consiste en mejorar dichas exenciones tributarias, a las que tendrán acceso inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, se trata de

dos materias completamente distintas: una que forma parte del proyecto original y otra que se incorpora por la vía de indicaciones.

El Diputado señor Robles preguntó, ¿cuál es la relación del arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa con las materias reguladas en el proyecto?

La señora Rosario Celedón reiteró que el objetivo del proyecto es tener una sola regulación para todo tipo de fondos, entre los cuales se encuentran hoy los fondos de ahorro para la vivienda, que están regidos por una ley especial que obliga a crear sociedades administradoras con características propias y sujetas a exigencias acordes a la naturaleza de los fondos administrados. La idea es tener en lo sucesivo una sola regulación para quienes administran y un solo tipo de vehículo donde se alleguen todos los fondos de los aportantes y donde una administración profesional sea capaz de identificar acertadamente cuáles son los proyectos en que hay que invertir, como por ejemplo, aquéllos que sean consistentes con ahorro para la vivienda.

B. Discusión particular

Con fecha 5 de marzo de 2013, el Ejecutivo presentó las indicaciones N° 528-360 que se hacen cargo de las observaciones formuladas en la Comisión y que se refieren a tres grandes temas: unas dicen relación con inversiones en instrumentos de renta fija; otras se refieren a los fondos de inversión privados (FIP) y, finalmente, están las que buscan dar mayor certeza en lo que respecta al tratamiento tributario que se dará a las administradoras, a los fondos, tanto públicos como privados, y a los aportantes tanto nacionales como extranjeros.

Recordó a este respecto la señora Rosario Celedón que el proyecto deroga cuerpos legales sobre fondos mutuos, fondos de inversión, y fondos de capital extranjero, que tenían escasas disposiciones tributarias, por lo que existe mucha jurisprudencia administrativa construida a través de los años por el SII. Lo que se persigue, entonces, es tratar de establecer por el proyecto un marco regulatorio también autosuficiente en materia tributaria.

El señor Ignacio Briones se refirió al impacto en el tipo de cambio que tendría la modificación propuesta al artículo 104 de la LIR, destinada a facilitar el acceso de inversionistas extranjeros al mercado de renta fija chileno. Expresó que las aprensiones manifestadas al respecto son particularmente válidas si se piensa en capitales de corto plazo, que entran y salen, y que arbitran tasa. Pero son menos ciertas respecto de los capitales de largo plazo. Por ello, la indicación agrega, a los elementos ya presentados con anterioridad, que los criterios de elegibilidad para los inversionistas extranjeros que el proyecto simplifica, sólo se activarán en la medida en que esos inversionistas conserven los instrumentos de renta fija que adquieran durante un año a lo menos. Este plazo máximo queda fijado por ley, pero se faculta a la autoridad para disminuirlo a futuro vía decreto. La medida es consistente con una observación bastante obvia, pero que es importante para dimensionar por qué dicho plazo sería suficiente, y es que

hoy en día, la exigencia contenida en la ley chilena de que los inversionistas transen bonos sólo a través de bolsas de comercio, que también se propone eliminar, constituye una restricción activa para el inversionista de corto plazo. Pero, para el inversionista que viene a Chile a comprar un bono y que quiere quedarse uno o más años, no hace mayor diferencia adquirir ese bono en un terminal de Bloomberg o en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de un intermediario. El plazo de permanencia de un año va a afectar entonces a aquellos inversionistas que tratan de arbitrar tasa y son los que generan los principales influjos. Requerido al efecto, añadió que este plazo emula el criterio establecido en la ley vigente en materia de adquisición de acciones sin presencia bursátil.

En resumen, planteó que con la indicación el Ejecutivo está dando cuenta razonablemente de una de las inquietudes expresadas en el seno de esta Comisión, sin afectar el fondo del proyecto, que todos han convenido en que resulta beneficioso para el país en el largo plazo.

Consultado sobre el particular, señaló que los *huaso bonds* son incluidos específicamente como instrumentos elegibles para acogerse a los beneficios del artículo 104 de la LIR, porque la idea es incentivar la entrada de emisores externos al mercado chileno que pongan sus bonos a disposición de inversionistas residentes y no residentes.

El señor Miguel Zamora recordó que hoy en día existe una ley sobre fondos de inversión (Nº 18.815) y otra sobre fondos de inversión formados por extranjeros (Nº 18.657). Pero como el proyecto permitirá que a futuro coexistan en un mismo fondo inversionistas nacionales y extranjeros, lo que hace es aplicar a éstos últimos el régimen tributario de la ley Nº 18.657, que establece un impuesto único de 10% sobre las rentas distribuidas por el fondo. Por su parte, los aportantes chilenos quedarían sujetos al régimen tributario de la ley Nº 18.815, que es básicamente el mismo tratamiento aplicable a los dividendos distribuidos por sociedades anónimas extranjeras.

Aclaró el asesor que el impuesto único del 10% no es la carga tributaria total que tendrá el inversionista extranjero, ya que el fondo de inversión deberá contribuir al pago del impuesto de primera categoría correspondiente a la sociedad en que haya invertido. Por tanto, como en este caso el inversionista no goza de crédito por el impuesto ya pagado, su carga total será de 30%. No se innova, en todo caso, en la definición de quiénes deben considerarse inversionistas extranjeros para efectos del impuesto adicional, pero sí se establece que, si el aportante es una sociedad u otra entidad domiciliada en el extranjero, en la que inversionistas nacionales tienen una participación de 5% o más, no se considerará extranjero y quedará sujeto al régimen ordinario de la LIR.

El Diputado señor Silva (Presidente) propuso el siguiente tratamiento para la votación en particular del proyecto:

En primer lugar votar las indicaciones del Ejecutivo con los artículos respectivos. Luego votar las indicaciones parlamentarias y los artículos pertinentes. Finalmente, votar el resto de los artículos, en una sola votación.

Así se acuerda.

El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones a los artículos 1°, 57, 80, 81, 82, 83, al acápite del Capítulo V, 84, 86, 87, 92 y 94 del artículo primero; al artículo tercero; al artículo segundo transitorio, y al actual artículo quinto transitorio. Además, incorpora al proyecto de ley un artículo sexto permanente y los artículos quinto, séptimo, octavo y noveno, todos transitorios.

"AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para reemplazar la letra b) de su Artículo 1°, por la siguiente:

"b) Fondo: patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes, destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, y cuya administración es de responsabilidad de una administradora.".

2) Para reemplazar su Artículo 57°, por el siguiente:

"Artículo 57°.- Inversiones y Actividades Prohibidas. Los fondos regulados en los Capítulos III y V del Título I de esta ley no podrán invertir directamente en bienes raíces corporales e incorporales, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase; ni podrán desarrollar directamente actividades industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes de cualquier tipo, de intermediación, de seguro o reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del fondo y en general de cualquier actividad desarrollada directamente por éste distinta a la de inversión.".

3) Para reemplazar, en su Artículo 80° inciso final, la expresión "En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas el régimen tributario que la Ley sobre Impuesto a la Renta contempla para las acciones de sociedades anónimas en los artículos 17, 18 y 107, según sea el caso", por la expresión "En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas, lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18 inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.".

4) Para reemplazar su Artículo 81°, por el siguiente:

"Artículo 81°.- Tratamiento tributario para Fondos.

1.- Fondos de inversión:

a) Los fondos de inversión y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo de inversión que administre, a llevar el registro del Fondo de Utilidades Tributables y del Fondo de Utilidades no Tributables, para los efectos señalados en la letra f) siguiente.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo de inversión, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y deberá. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo de inversión, los rescates y enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo; y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos de inversión que administre. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

d) Será aplicable al fondo de inversión el tratamiento tributario previsto en el inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, únicamente sobre los siguientes desembolsos, operaciones o cantidades representativas de éstos:

(i) aquellos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley permite efectuar al fondo de inversión;

(ii) los préstamos que los fondos de inversión efectúen a sus aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional;

(iii) el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que beneficie a uno o más aportantes, contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, su cónyuge o hijos no emancipados legalmente de éstos, de los bienes del activo del fondo de inversión;

(iv) la entrega de bienes del fondo de inversión en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, y

(v) las diferencias de valor que se determinen por aplicación de la facultad de tasación ejercida conforme a la letra e) literal (i) de este artículo.

Tratándose de los desembolsos referidos en los numerales i) y v) anteriores, el pago del impuesto establecido en el inciso anterior será de responsabilidad de la administradora, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo de inversión respectivo.

Por su parte, cuando los desembolsos u operaciones señaladas en los literales (ii), (iii) y (iv) anteriores, hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, se aplicará sólo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales aportantes los responsables del pago del impuesto y no la administradora. Se entenderá que han beneficiado a un aportante, cuando hayan beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o a cualquier otra persona o entidad relacionada con aquel. Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más aportantes en forma simultánea y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación indicada, en proporción al valor de las cuotas que poseen cada uno de ellos. Tratándose de las cantidades señaladas en el literal (i) y (iv), éstas se rebajarán del Fondo de Utilidades Tributables respectivo en el ejercicio en que ocurra el desembolso, o bien, la ejecución de la garantía, según corresponda.

e) El Servicio de Impuestos Internos podrá fundadamente ejercer la facultad de tasación establecida en los artículos 17, número 8, inciso 5° de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en las siguientes operaciones cuando resulten notoriamente superiores o inferiores, según corresponda, al valor corriente en plaza o de los que se cobren normalmente en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación: (i) enajenación de activos del fondo de inversión efectuada a sus aportantes o a terceros y distribución de cantidades a sus aportantes efectuada en especie, con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo de inversión, la disminución de su capital o en pago de dividendos; (ii) aportes en especie efectuados a fondos de inversión o enajenación de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso las diferencias de valor determinadas al aportante o enajenante se afectarán con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la operación respectiva.

No procederá la facultad de tasar en los casos de división o fusión de fondos de inversión y se mantendrá para efectos tributarios el valor de los activos y pasivos existentes en forma previa a dichas operaciones en los fondos de inversión fusionados o divididos. En los casos de fusión o transformación de fondos de inversión, los beneficios netos y las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables y No Tributables se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o el resultante, debiéndose mantener tal registro, aun cuando éste sea un fondo mutuo. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de inversión como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos de inversión, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo de inversión dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

f) En el Fondo de Utilidades Tributables referido en la letra b) anterior, se anotarán todas las rentas o cantidades recibidas de terceros por el fondo de inversión producto de las inversiones que este haya realizado, ya sea a título de participaciones sociales, dividendos u otras cantidades que se perciban, con indicación del Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a dichas sumas, para los efectos de asignar posteriormente el crédito que corresponda. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

Separadamente, en el Fondo de Utilidades No Tributables también referido en la letra b) anterior, se anotarán las cantidades recibidas de terceros que, conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del Impuesto Global Complementario.

2.- Fondos mutuos:

a) Los fondos mutuos y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidos por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo mutuo que administre, a mantener un registro de los dividendos recibidos por éstos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos a los Impuestos Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 de la Ley sobre

Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo mutuo, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo mutuo, los rescates las enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo; y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos mutuos que administre. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

En los casos de fusión o transformación de fondos mutuos, los beneficios netos y las cantidades registradas conforme a la letra b) anterior se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o resultante de la transformación, aun cuando éste sea un fondo de inversión, debiéndose mantener tal registro. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de mutuos como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos mutuos, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo mutuo dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

En lo no previsto en este artículo se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que se deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.”.

5) Para reemplazar su Artículo 82°, por el siguiente:

“Artículo 82°.- Tratamiento tributario para los aportantes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los aportantes de fondos regidos por esta ley se sujetarán únicamente al tratamiento tributario indicado a continuación:

1.- De un fondo de inversión:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile

i) Dividendos distribuidos por el fondo de inversión. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión, se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituida en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, observándose para efectos de su imputación, lo dispuesto en el artículo 14, A), número 3, letra d) de la Ley sobre Impuestos a la Renta; con derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría a que se refieren los artículos 56, número 3) o 63,

de la misma ley, únicamente respecto de las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión y con tal que ellas se hayan afectado con el referido tributo. No constituirá renta, la parte de los dividendos que provenga de ingresos recibidos de terceros por el fondo de inversión y que tengan dicha calidad conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión que constituyan rentas exentas del impuesto global complementario conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conservarán en su distribución dicho carácter y se aplicará lo dispuesto en el número 3, del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

En los casos del inciso anterior, será obligación de la administradora determinar si los beneficios distribuidos corresponden a cantidades tributables, no tributables o exentas según corresponda y asimismo tratándose de la devolución de capital o rescate en su caso, así como el crédito por impuesto de Primera Categoría a que se tenga derecho conforme a las reglas anteriores, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo de inversión. Las cuotas de participación de los fondos de inversión y su enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, e incluyendo el rescate en que parte de las cuotas son adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una disminución de capital, tendrán el mismo tratamiento tributario que contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta para la enajenación de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo de inversión, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Los contribuyentes que no se encuentren obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad, se encontrarán exentos del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre el mayor valor que obtengan en la enajenación o rescate de las cuotas del fondo de inversión. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) La remesa, distribución, pago, abono en cuenta o puesta disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro respectivo. No obstante lo anterior, tratándose de la distribución de dividendos, cuando éstos correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del impuesto adicional recibidos de terceros por el fondo de inversión y sujetos al orden de imputación establecido en el artículo 14 letra A) número 3 letra d) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, quedarán liberados de la referida tributación. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones

se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas del fondo de inversión o su rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único del literal i) anterior y dicho mayor valor corresponderá a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

Cuando se trate de cantidades distribuidas por el fondo de inversión o del mayor valor en el rescate de las cuotas del mismo, el impuesto único señalado precedentemente será retenido por la sociedad administradora cuando dichas cantidades sean remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, se abonen en cuenta o se pongan a disposición. Cuando se trate de la enajenación de las cuotas del fondo, el adquirente deberá retener este impuesto en la misma oportunidad señalada, retención que se practicará con una tasa provisional de 5% sobre el precio de enajenación sin deducción alguna, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo caso, dicha retención se practicará con la tasa del 10%.

Las retenciones practicadas conforme a esta letra se enterarán en arcas fiscales en el plazo establecido en la primera parte del artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 y en lo que fuere aplicable el artículo 74 N° 4 de la misma ley.

iii) Sin perjuicio de su registro en el Fondo de Utilidades Tributables según se indica en el inciso siguiente, no se gravará con el impuesto único de esta letra la distribución de los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumple con las siguientes condiciones copulativas a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile:

a) que en el año comercial respectivo, al menos durante 300 días, continuos o discontinuos, el 80% de la cartera del fondo de inversión esté conformada por la inversión en:

1.- instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero por personas sin domicilio ni residencia en Chile o en certificados que sean representativos de tales instrumentos, títulos o valores;

2.- bienes situados en el extranjero o en instrumentos, títulos, valores o certificados que sean representativos de tales bienes;

3.- contratos de derivados y otros de similar naturaleza que cumplan los requisitos que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Tratándose de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos a que se refieren los números 1 y 3 anteriores, ellos no podrán tener como activos subyacentes o referirse a bienes situados o a actividades desarrolladas en Chile, ni ser representativos de títulos o valores emitidos en el país, y;

b) que la política de inversión fijada en su reglamento interno sea coherente con la letra a) de este literal.

Los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumpla con las condiciones copulativas señaladas, se anotarán separadamente en el Fondo de Utilidades Tributables y se sujetarán al orden de imputación establecido en el literal i) anterior, pero el crédito establecido en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la parte que corresponda a la distribución de beneficios no gravados conforme a este literal a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, no dará derecho a su imputación contra impuesto alguno, ni a su devolución, debiendo rebajarse, en dicha proporción, del registro establecido en el artículo 14 del referido texto legal.

Para los efectos de este literal, se entenderá que se efectúa una distribución de beneficios netos, en los mismos casos y bajo las mismas condiciones descritas en el literal i) anterior.

Cuando el fondo no diera cumplimiento durante el año comercial respectivo a las condiciones copulativas señaladas, la distribución de los beneficios netos determinados en dicho año al fondo de inversión, sea que se distribuyan en tal período o en otros posteriores, quedará sujeto a la tributación establecida en el literal i) anterior cuando sea distribuida a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

Tampoco se gravará con el impuesto único de esta letra, el mayor valor obtenido por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, salvo que éstas se efectuaren con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, siempre y cuando éstos cumplan los requisitos copulativos señalados, en el año comercial en que ocurre la enajenación y en los 2 años comerciales inmediatamente anteriores a éste. En caso que el fondo tuviera una existencia inferior a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos copulativos durante cada año comercial en que haya existido, salvo que corresponda al mayor valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión de la división de otro fondo o que provengan de la fusión de dos o más de ellos, en cuyo caso será necesario además que el fondo dividido o el o los fondos fusionados en su caso, cumplan con los requisitos copulativos señalados, de forma tal que en el año de la enajenación y en los dos años comerciales inmediatamente anteriores se cumpla con las condiciones copulativas señaladas, siempre que los fondos divididos o fusionados hayan tenido existencia durante esos dos años. Cuando el fondo no diera cumplimiento durante los años comerciales respectivos a las condiciones copulativas señaladas, el mayor valor se sujetará a la tributación establecida en el literal i) anterior.

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni domicilio en el país que no fueren personas naturales, no podrán gozar del tratamiento tributario establecido en esta letra, en caso que dichos contribuyentes tengan, en forma directa o indirecta, como socio, accionista, titular o beneficiario de su capital o de sus utilidades, a algún residente o domiciliado en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades del mismo. En este caso, dichos contribuyentes se gravarán con el Impuesto Adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta con derecho a deducir el crédito establecido en el artículo 63 de la referida ley, conforme a las reglas contenidas en la letra A) anterior, literales i) y ii) y por las rentas allí indicadas, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago de dicho impuesto contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La administradora deberá presentar anualmente una declaración al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución, en la cual deberá individualizar a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, declarando que no cuentan con socios, accionistas, titulares o beneficiarios en Chile, con el porcentaje señalado

precedentemente, declaración sin la cual se presumirá que no cumplen con el requisito señalado, no pudiendo, por tanto, gozar de la liberación referida.

Las administradoras de fondos de inversión deberán anualmente informar al Servicio de Impuestos Internos, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, en la forma y plazo que fije dicho Servicio mediante resolución. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº1 del Código Tributario.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

2.- De un fondo mutuo:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo mutuo se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, el cual se imputará en primer término a los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas anotados en el registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley, según su antigüedad y comenzando por las más antiguas, otorgándose el crédito establecido en los artículos 56 N° 3 o 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que haya afectado a los citados dividendos. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectarán con la referida tributación, pero éste se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.

Será obligación de la administradora informar el crédito a que tengan derecho, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Conforme a lo señalado en el inciso primero de este artículo, las cuotas de participación de los fondos mutuos y su enajenación o rescate, se sujetarán al tratamiento tributario establecido en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo mutuo, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda, considerándose como una renta del N° 2, del artículo 20 de la referida ley. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. La remesa, distribución, pago, abono en cuenta, o puesta a disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones del fondo mutuo a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto

único a la renta del 10%, sin derecho a crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley. Se imputarán en primer término al registro establecido, según la antigüedad en que tales cantidades hayan sido percibidas, comenzando por las más antiguas. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectará con la referida tributación y dicho capital se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.
Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Tratándose de la enajenación de las cuotas de participación de fondos mutuos o su rescate, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único señalado en el literal i) anterior, siendo aplicable las normas de determinación de dicho mayor valor contenidas en el literal ii) de la letra B) del número 1.- de este artículo y, asimismo, las normas del inciso segundo y tercero de dicho literal, respecto de la responsabilidad de retención del impuesto único por la administradora. Se aplicará también para los efectos de este literal, lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

iii) Será también aplicable a los contribuyentes sin domicilio y residencia en Chile aportantes en fondos mutuos, la liberación a los dividendos y mayor valor del impuesto único, establecida en el literal iii), letra B) del número 1.- de este artículo, siendo aplicable los mismos requisitos y reglas allí establecidos para los fondos de inversión, esto es, incisos primero a tercero e inciso quinto de dicho literal iii). Asimismo, son aplicables las reglas de tributación contenidas en el inciso cuarto de dicho literal referidas al caso en que se dejen de cumplir por el fondo los requisitos copulativos señalados y también, los incisos sexto y séptimos, referidos a la prohibición de gozar de la liberación del impuesto único, aplicable a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, que no sean personas naturales, en los cuales participan directa o indirectamente en un 5% o más algún residente o domiciliado en Chile.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.”.

6) Para reemplazar, en su Artículo 83°, el inciso tercero por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Para aquellos períodos mensuales en que aportantes con y sin domicilio o residencia en Chile posean cuotas de una misma serie, la administradora cobrará su remuneración para esa serie afectándola con Impuesto al Valor Agregado con respecto a la totalidad de los activos administrados en ésta. Aquella parte del Impuesto al Valor Agregado enterado respecto a la remuneración exenta de dicho impuesto conforme a lo señalado en el inciso anterior, constituirá para la administradora crédito fiscal de dicho impuesto correspondiente al periodo en que hubiere efectivamente restituido dicha suma a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile. Para determinar el monto exento del Impuesto al Valor Agregado, la remuneración total cobrada por la administradora en el período

respectivo, deberá expresarse en su valor equivalente a la remuneración diaria y multiplicarse por el número de días en que los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile poseyeron las cuotas del fondo que se enajenan, en la proporción que tales cuotas tienen en el total del patrimonio administrado durante dicho periodo.

El período dentro del cual la administradora deberá restituir el Impuesto al Valor Agregado recargado a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, será hasta el mes de enero del año siguiente al cual corresponda la remuneración en que dicho impuesto fue recargado. En caso de no restituir dentro del plazo señalado, perderá la administradora el derecho al crédito fiscal establecido en el inciso anterior.

La administradora deberá presentar, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, una declaración anual informando el monto y cálculo de la remuneración exenta, individualización del beneficiario del servicio, período que comprende el cobro de la remuneración respecto de los servicios exentos de conformidad a este artículo. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº1 del Código Tributario, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del mismo Código.".

7) Para intercalar en el acápite del Capítulo V, entre las palabras "Fondos" y "Privados", la expresión "de Inversión".

8) Para intercalar en su Artículo 84°, entre las palabras "fondos" y "que", la expresión "de inversión".

9) Para reemplazar su Artículo 86° por el siguiente:

"Artículo 86°.- Tratamiento tributario.

A) Tratamiento tributario para fondos de inversión privados. Se les aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 81 de esta ley para fondos de inversión, debiendo, además, la administradora solicitar la incorporación en el Rol Único Tributario a cada fondo que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de ellos.

Los intereses percibidos o devengados por el fondo, originados en préstamos efectuados con todo o parte de sus recursos a personas relacionadas con alguno de sus aportantes, en la parte que excedan de lo pactado en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, se gravarán, sin deducción alguna, con la tasa del Impuesto de Primera Categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, impuesto que será de cargo de la administradora del fondo, sin perjuicio de su derecho a repetir contra éste. El Servicio de Impuestos Internos deberá determinar en forma fundada la parte excesiva del interés pactado, no pudiendo ejercer dicha facultad si la tasa de de interés convenida es igual o inferior a la tasa de interés corriente vigente en el período y al tipo de operación de que se trate, aumentada un 10%.

B) Tratamiento tributario para los aportantes. Sean éstos domiciliados o residentes en el país o en el extranjero, tributarán conforme a las reglas contenidas en la letra A), N° 1.- del artículo 82 de esta ley, respecto de las rentas allí señaladas. Tratándose de los aportantes sin domicilio ni residencia en el país, se gravarán con el impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose como contribuyentes del N° 2, del artículo 58 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago

del impuesto referido contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de dicha ley, aplicando al efecto el crédito por impuesto de primera categoría establecido en el artículo 63 de la misma ley, cuando corresponda.”.

10) Para reemplazar su Artículo 87°, por el siguiente:

"Artículo 87°.- Auditoría. Los fondos serán auditados anualmente por empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia.”.

11) Para agregar, en su Artículo 92°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de que el Servicio de Impuestos Internos detectare que un fondo de inversión privado infringe lo dispuesto en el artículo 91 y lo señalado en el inciso precedente, notificará del hecho a la administradora del fondo en cuestión, en cuyo caso ésta dispondrá de un plazo de 6 meses contado desde la respectiva notificación para regularizar su situación. Si ello no ocurriere, el fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes como accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del 1° de enero del año siguiente a aquel en que venza el plazo de seis meses señalado, tributando el respectivo fondo de inversión privado, en consecuencia, en la misma forma y oportunidad que establece la ley respecto de esas sociedades.”.

12) Para reemplazar su Artículo 94°, por el siguiente:

“Artículo 94°.- Información a la Superintendencia. La administradora deberá presentar a la Superintendencia, en la forma y plazos que ésta determine, la siguiente información referida a los fondos de inversión privados que administre:

a) Identificación del fondo y de los partícipes de éste;

b) Monto de los aportes; y

c) Valor de los activos.

La Superintendencia podrá requerir toda la demás información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a ésta.”.

AL ARTÍCULO TERCERO

13) Para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974, las siguientes modificaciones:

1) Elimínanse del inciso tercero del artículo 11 las expresiones: “, las cuotas de fondos de inversión, regidos por la ley Nº 18.815, y” y la palabra “ambos”.

2) Elimínase en el inciso sexto, del número 8, del artículo 17, la expresión “Se entenderá que tienen presencia bursátil aquellas acciones que cumplan con las

normas para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976.”.

3) En el artículo 20 introdúcense las siguientes modificaciones: a) En el número 2, reemplácese el inciso tercero, por el siguiente: "Los intereses a que se refiere la letra g), se considerarán devengados en cada ejercicio, a partir de la fecha que corresponda a su colocación y así sucesivamente hasta su pago. El impuesto se aplicará a los titulares de los referidos instrumentos, y gravará los intereses que hayan devengado en el año calendario o comercial respectivo, desde la fecha de su colocación o adquisición hasta el día de su enajenación o rescate, ambas inclusive. El interés devengado se determinará de la siguiente forma: (i) multiplicando la tasa de interés fiscal anual del instrumento determinada conforme al artículo 104, por el capital del mismo, a su valor nominal o par; (ii) el resultado obtenido conforme al literal anterior se divide por 365 y, (iii) finalmente, se multiplicará tal resultado por el número de días del año calendario o comercial en que el título haya estado en poder del contribuyente titular.". b) Elimínase en el número 3° del artículo 20 la palabra “mutuos”.

4) En el artículo 21 inciso segundo, elimínase las expresiones “el impuesto del número 3, del artículo 104,”.

5) Reemplázase en el artículo 59, inciso cuarto, número 1, letra b), la expresión “el artículo 18 bis de esta ley y su reglamento”, por la expresión “la letra B), del Artículo Octavo Transitorio, de la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”.

6) En el artículo 74, inciso primero, reemplázase el número 7, por el siguiente: “7.- Los representantes, custodios, intermediarios, depósitos de valores u otras personas domiciliadas o constituidas en el país que hayan sido designadas o contratadas por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104, con una tasa de 4% sobre los intereses devengados durante el ejercicio respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, número 2°, letra g). Esta retención reemplazará a la que establece el número 4º de este artículo respecto de los mismos intereses, pagados o abonados en cuenta a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Las personas señaladas precedentemente deberán informar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, sobre los antecedentes de las retenciones que hayan debido efectuar conforme a este número. La no presentación de esta declaración o su presentación extemporánea, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, la que se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165 del mismo texto legal.”.”.

7) Reemplázase el artículo 104, por el siguiente:

“Artículo 104.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, número 8, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos indicados en los siguientes números 1.- y 2.-:

1.- Instrumentos beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los instrumentos que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Que se trate de instrumentos de deuda de oferta pública previamente inscritos en el Registro de Valores conforme a la ley N° 18.045;

b) Que hayan sido emitidos en Chile;

c) Que se establezca, en la respectiva escritura de emisión, que los instrumentos se acogerán a lo dispuesto en este artículo y que, además de la tasa de cupón o de carátula, se determine, para cada colocación y después de cada una de ellas, una tasa de interés fiscal para efectos del cálculo de los intereses devengados conforme al inciso tercero, del número 2, del artículo 20.

c.1) Tasa de interés fiscal.

La tasa de interés fiscal aludida en c), corresponderá a la tasa de colocación anual del instrumento, la que se expresa en porcentaje y que en la fórmula que se describe a continuación, se identifica como “TF”. Esta tasa corresponderá al número positivo que permita cumplir la siguiente igualdad:

$$\text{Precio de transacción} = \sum_{t=fc}^{N} F_t * \frac{1}{(1+TF)^{\frac{t-fc}{365}}}$$

La fórmula precedente es una identidad que indica que el precio del instrumento colocado corresponde a la suma del valor presente de cada flujo de caja “F” que el emisor del instrumento se compromete a pagar en cada fecha “t” y hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

El valor presente de cada flujo de caja F que el instrumento se compromete a pagar en una determinada fecha t corresponde al flujo de caja F, multiplicado por un factor de descuento que corresponde al inverso de la suma de 1 más la tasa anual de colocación del instrumento “TF” elevada al número que resulte de dividir los días transcurridos entre la fecha en que ocurre el flujo respectivo y la fecha de colocación “fc” (t-fc), por 365.

De acuerdo a lo anterior, las variables intervinientes en la ecuación indicada anteriormente se definen de la siguiente manera:

TF = Tasa fiscal por determinar y corresponde a la tasa de colocación del instrumento. Esta tasa se expresa en porcentaje.

= Sumatoria $\sum_{t=fc}^{N}$ desde la fecha de colocación del instrumento, fecha que definimos como “fc”, hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

Ft = Flujo de caja (que incluye cupón y/o amortización de capital) que promete pagar el instrumento al tenedor de éste en una fecha “t”, según la tabla de desarrollo del instrumento, expresados como porcentaje del valor nominal.

t = Fecha de ocurrencia de un flujo de caja.

Precio de transacción = Relación expresada en porcentaje, entre la suma de dinero desembolsada por el o los inversionistas para adquirir el monto colocado por el emisor respecto a su valor nominal.

No obstante lo anterior, una o varias colocaciones de la misma emisión, posteriores a la primera, tendrán la misma tasa de interés fiscal que aquella, sólo si su respectiva tasa de colocación es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la

primera colocación, en cuyo caso se aplicará la tasa de interés fiscal correspondiente a la colocación inicial, siempre que, previo a la respectiva colocación, el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores y Seguros, en la forma que ésta determine mediante Norma de Carácter General, que acogerá dicha colocación a lo dispuesto en este inciso. En todo caso, dicha Norma de Carácter General deberá incluir la forma de identificar las colocaciones que tengan tasa fiscal distinta de una misma emisión.

En caso de aumentar el monto emitido de una misma serie de títulos que cumplan copulativamente los requisitos señalados en las letras a), b) y c) precedentes, a través de una reapertura, de la cual se deje constancia en la escritura de emisión, el nuevo monto emitido y sus respectivas colocaciones, tendrán la misma tasa de interés fiscal de la primera colocación, sólo si la tasa de colocación de cada una de ellas es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la primera colocación de la emisión de la serie original, y siempre que el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores o Seguros, en la forma que esta determine mediante Norma de Carácter General, que acogerá dicha emisión a lo dispuesto en este inciso. En este caso podrá aplicarse lo dispuesto en el inciso precedente, cumpliéndose los requisitos que allí se establecen, respecto de las sucesivas colocaciones de la misma reapertura.

La tasa de interés fiscal será informada después de cada colocación, dentro del mismo día, por el emisor de los títulos a la Superintendencia de Valores y Seguros, quien mantendrá un registro público de dichas tasas.

2.- Contribuyentes beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los contribuyentes que enajenen los instrumentos indicados en este artículo cumpliendo con lo señalado en las letras a) o b) siguientes:

a) Que entre la fecha de adquisición y enajenación de los instrumentos haya transcurrido a lo menos un año, o bien, el plazo inferior que se fije mediante uno o varios decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” por el Ministerio de Hacienda, requisito éste último que regirá durante el tiempo que cada uno de dichos decretos determine. En el caso de la primera dictación, de la modificación o reemplazo del señalado el decreto, el plazo de permanencia que regirá para aquellos tenedores de bonos que hayan adquirido los títulos con anterioridad a su entrada en vigencia, será el mínimo plazo entre el que falte por completar para cumplir con el que establece la ley o, en su caso, el que señala el decreto vigente al momento de la compra, y el plazo que señale el nuevo decreto que se dicte.

b) Que hayan adquirido y enajenado los instrumentos en una Bolsa local, en un procedimiento de subasta continua, que contemple un plazo de cierre de las transacciones que permita la activa participación de todos los intereses de compra y de venta, el que, para efectos de este artículo, deberá ser previamente autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución conjunta. Además, que hayan adquirido y enajenado los instrumentos por intermedio de un corredor de bolsa o agente de valores registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto en el caso de los bancos, en cuanto actúen de acuerdo a sus facultades legales.

Tratándose de contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, deberán contratar o designar un representante, custodio, intermediario, depósito de valores u otra persona domiciliada o constituida en el país, que sea responsable de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectarlos.

3.- Disposiciones especiales relativas a los pagos anticipados.

En el caso del pago anticipado o rescate por el emisor del todo o parte de los instrumentos de deuda a que se refiere este artículo, se considerarán intereses todas aquellas sumas pagadas por sobre el saldo del capital adeudado, además de los intereses referidos en el artículo 20, número 2, inciso tercero. Para los efectos de esta ley, los intereses a que se refiere este número se entenderán devengados en el ejercicio en que se produzca el pago anticipado o rescate.

4.- Los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo aunque no cumplan con uno o más de los requisitos señalados en el número 1 y 2 anteriores, siempre que los respectivos títulos se encuentren incluidos en la nómina de instrumentos elegibles que, para estos efectos, establecerá el Ministro de Hacienda mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", y que cumplan con las características y condiciones que en el mismo se definan, incluyendo la tasa de interés fiscal. Tratándose de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile, su inclusión en dicha nómina de instrumentos elegibles deberá ser previamente solicitada por dicho organismo.

Respecto de los instrumentos a que se refiere este número, el requisito dispuesto en la letra b) del número 2 se entenderán cumplidos cuando la adquisición o enajenación tenga lugar en alguno de los sistemas establecidos por el Banco Central de Chile o por el Ministerio de Hacienda, según corresponda, para operar con las instituciones o agentes que forman parte del mercado primario de dichos instrumentos de deuda. Asimismo, tales requisitos se entenderán cumplidos cuando se trate de adquisiciones o enajenaciones de instrumentos elegibles que correspondan a operaciones de compra de títulos con pacto de retroventa que efectúe el Banco Central de Chile con las empresas bancarias.

5.- Disposiciones relativas a deberes de información, sanciones y normas complementarias

El emisor de los instrumentos a que se refiere este artículo, los depósitos de valores donde tales instrumentos estén depositados, las bolsas de valores del país que los acepten a cotización, los representantes de los tenedores de tales instrumentos, los custodios, intermediarios u otras personas responsables de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectar a los contribuyentes tenedores, u otras personas que hayan participado en estas operaciones, deberán declarar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, individualizando a las partes e intermediarios que hayan intervenido, los valores de emisión y colocación de los instrumentos y las demás materias que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2, del mismo texto legal.

La emisión o utilización de declaraciones maliciosamente falsas, se sancionará en la forma prevista en el inciso primero, del número 4°, del artículo 97 del Código Tributario.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su realización, el inversionista o su administrador quedarán afectos a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser

inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo serán solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista o su administrador correspondiente o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios. La multa de este inciso se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165, número 2, del Código Tributario.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en artículo 17 N° 8 inciso quinto y en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al inciso primero del artículo 21.

6.- Tratamiento de las pérdidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo.

Las pérdidas obtenidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo, solamente serán deducibles de los ingresos no constitutivos de renta del contribuyente.”.

8) Derógase el artículo 106.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 107:

a) Elimínese en el inciso segundo del número 1.- la expresión “ y 106,”;

b) Agréguese en la parte final, del inciso primero, del número 2), antes del punto aparte, la siguiente expresión: “y dicho fondo, al menos una vez al año, distribuya a sus aportantes la totalidad de los dividendos percibidos de las sociedades cuyas acciones tienen presencia bursátil.”.

c) Reemplácese el inciso segundo de ese número 2) por el siguiente “Se tendrá por incumplido el requisito establecido en la segunda parte del inciso anterior, si las inversiones del fondo respectivo en tales instrumentos resultasen inferiores a dicho porcentaje por un período continuo o discontinuo de 30 o más días en un año calendario. Las administradoras de los fondos deberán certificar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste lo requiera mediante resolución, el cumplimiento de este requisito. La emisión de certificados maliciosamente falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario.”;

d) Elimínase el inciso primero del número 4).

10) En el inciso primero del artículo 108, reemplácese la expresión “los artículos 106 y” por “el artículo”.

11) Sustitúyese el artículo 109 por el siguiente:

“Artículo 109.- El mayor o menor valor en el aporte y rescate de valores en fondos cuyo reglamento interno contemple ese tipo de aportes y rescates, se determinará para efectos tributarios, conforme a las siguientes reglas:

1) Adquisición de cuotas mediante el aporte de valores.

a) El valor de adquisición de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que efectúen aportes en valores, se determinará conforme al valor cuota, definido por el Reglamento de la Ley que regule la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

b) El precio de enajenación de los valores que se aportan corresponderá al valor al que esos títulos o instrumentos fueron valorizados por la administradora del fondo correspondiente al convertir el aporte en cuotas de ese fondo, el cual deberá estar contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

2) Rescate de cuotas mediante la adquisición de valores.

a) El valor de rescate de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que lo efectúen mediante la adquisición de valores que formen parte de la cartera del fondo, se determinará en la misma forma señalada en la letra a) del número precedente, el cual deberá ser contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

b) El valor de adquisición de los títulos o instrumentos mediante los cuales se efectúa el rescate a que se refiere el literal anterior, será aquél empleado por la administradora del fondo respectivo para pagar el rescate en esos valores. Del mismo modo, el valor de tales títulos o instrumentos deberá constar en el certificado que al efecto emitirá la administradora.”.”.

ARTÍCULO 6º, NUEVO:

14) Para incorporar el siguiente artículo sexto, nuevo:

“ARTÍCULO SEXTO.- Increméntase la dotación máxima de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del año de entrada en vigencia de la presente ley, en 5.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

15) Para eliminar la frase “de fondos de inversión de capital extranjero” y la coma (,) que le sigue.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, NUEVO

16) Para intercalar el siguiente Artículo Quinto Transitorio, nuevo, pasando el actual a ser Artículo Sexto Transitorio:

“ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO.- Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N°18.657, derogada en el Artículo Cuarto de la presente ley, podrán continuar con sus operaciones en el país, conservando la garantía de invariabilidad establecida en el inciso tercero del artículo 15 de la ley N° 18.657 respecto de las inversiones que se hayan efectuado o que estén previamente autorizadas en este tipo de fondos de inversión, todo en conformidad a un contrato de inversión extranjera suscrito de acuerdo al decreto ley N° 600 de 1974. Conservarán, asimismo, el régimen de tributación establecido en dicha ley, incluyendo la posibilidad de distribuir rentas del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que también es derogado por la presente ley. Estos fondos de

inversión no podrán transformarse en o fusionarse con algunos de los fondos creados por la presente ley.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO

17) Para reemplazar el actual Artículo Quinto Transitorio, que ha pasado a ser Artículo Sexto Transitorio, por el siguiente:

“ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO.- Las administradoras de fondos de inversión de los referidos en los N° 1 y 3 del actual artículo 1° transitorio de la ley N° 20.190, tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para adecuar los reglamentos internos de dichos fondos a lo establecido en el N° 1 del nuevo artículo 1° transitorio de la citada ley, introducido a través del artículo quinto. En cualquier caso, las inversiones que tales fondos hayan efectuado con anterioridad a la entrada de vigencia de la presente ley mantendrán el régimen tributario establecido en el actual artículo 1° transitorio de la ley N° 20.190, en la medida que se dé cumplimiento de los demás requisitos allí establecidos.”.

ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS, NUEVOS

18) Para incorporar los siguientes Artículos Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios, nuevos:

“ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO.- Lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 86 del Artículo Primero de la presente ley y las modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta mediante el Artículo Tercero de la presente ley, regirán a contar de la fecha de vigencia general de la presente ley establecida en el Artículo Primero Transitorio, respecto de los hechos acaecidos a contar de dicha fecha.

a) Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N° 18.815, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso anterior, presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo de beneficios acumulados en el respectivo fondo, así como el saldo que registre el Fondo de Utilidades Tributables y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a las cantidades allí registradas, así como el saldo del Fondo de Utilidades No Tributables por los ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas que el fondo haya percibido de terceros. Los saldos y monto del crédito referidos deberán informarse según sus montos a la fecha de vigencia general de la presente ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario establecido en la ley N° 18.815, imputándose en el Fondo de Utilidades Tributable o no Tributables, según corresponda, con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban y comenzando por las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, luego en el Fondo de Utilidades No Tributables y, finalmente, los demás beneficios netos que se repartan. En caso de que dichos fondos hayan dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los beneficios netos referidos, podrán ser distribuidos conforme al tratamiento tributario establecido en dicha disposición a los partícipes sin residencia ni domicilio en Chile existentes en dichos fondos con anterioridad a la vigencia general de la presente ley.

ii) el valor del patrimonio del fondo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de vigencia general

de esta ley. La parte del mayor valor obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de los referidos fondos de inversión que fueron adquiridas con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, y que se determine hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el total del patrimonio del fondo, según su valor a la fecha de vigencia señalada, quedará sujeto al régimen tributario contenido en la ley N° 18.815, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

b) El remanente de crédito fiscal por Impuesto al Valor Agregado que los fondos de inversión mantengan a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, podrá ser utilizado como tal por la administradora e imputarse al débito fiscal de dicho impuesto generado en su operación propia, sin perjuicio del derecho a repetición. Los fondos referidos y sus administradoras deberán, para estos efectos, cumplir con lo establecido por el Artículo Segundo Transitorio y presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare el remanente de Impuesto al Valor Agregado existente a la referida fecha.

c) Los fondos de inversión, los fondos mutuos y las administradoras de ambos tipos de fondos, conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de esta ley adecúen los estatutos de los fondos que administran a las disposiciones de la presente ley, deberán dentro del mismo plazo establecido en dicha disposición, cumplir con las obligaciones administrativas tributarias establecidas en los artículos 81 y 86, según corresponda, ambos del Artículo Primero de la presente ley.

d) Los fondos mutuos constituidos al amparo del decreto ley N° 1.328 de 1976, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo inicial del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 establecido por el Artículo Primero de la presente ley, conformado por el saldo de beneficios netos pendientes de reparto y los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos al Impuesto Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos, hasta antes de la fecha de vigencia general de esta ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario vigente con anterioridad al establecido en la presente ley, imputándose con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban.

ii) el valor del patrimonio del fondo mutuo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de entrada en vigencia general de esta ley. La parte del mayor valor, obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de fondos mutuos adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, determinado hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el patrimonio total del fondo, según su valor a la fecha de vigencia de esta ley, quedará sujeto al régimen tributario vigente con anterioridad a la misma, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

iii) El Servicio de Impuestos Internos fiscalizará la correcta determinación del saldo de utilidades señalado, sin perjuicio de que será de cargo de la administradora acreditar fehacientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, dichas cantidades.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los instrumentos acogidos al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por el Artículo Tercero de la presente ley es reemplazado, que hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley, podrán en sus enajenaciones posteriores a dicha fecha, gozar de la liberación tributaria contenida en el nuevo artículo 104 con tal que el enajenante cumpla con lo dispuesto en alguna de las letras a) y b) del N° 2 del nuevo artículo 104. En todo caso, tratándose de la primera enajenación que se efectúe en forma posterior a la fecha de vigencia señalada de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado y adquiridos con anterioridad a dicha fecha, respecto de la letra a) referida, no será necesario cumplir con el requisito de antigüedad allí señalado.

Las posteriores enajenaciones de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado, se sujetarán en todo a lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 74 N° 7 que por esta ley se establece.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO.- A) El mayor valor realizado por los inversionistas institucionales extranjeros con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley en la enajenación de títulos de oferta pública representativos de deudas, emitidos, por empresas constituidas en el país, con anterioridad a la fecha de vigencia referida y que en su emisión no se hayan acogido al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, estará exento de los impuestos a la renta, con tal que cumplan con los siguientes requisitos durante el tiempo que operen en el país:

1.- Estar constituido en el extranjero y no estar domiciliado en Chile.

2.- Ser un inversionista institucional extranjero que cumpla las características que defina el reglamento, dictado mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, para cada categoría de inversionista, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Servicio de Impuestos Internos.

3.- No participar directa ni indirectamente del control de las entidades emisoras de los valores en los que se invierte ni poseer o participar directa o indirectamente en el 10% o más del capital o de las utilidades de dichos emisores.

4.- Contar con un representante o agente constituido en Chile que se haga responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5.- Los representantes o agentes a que se refiere el número anterior deberán declarar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, indicando a lo menos la individualización de las partes o intermediarios que hayan intervenido, así como los valores de emisión, colocación, compra y venta de los instrumentos, y demás que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2°, del mismo texto legal.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el banco en el cual se liquidaron las divisas destinadas a la inversión, no fue designado como agente intermediario, deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, cuando éste lo requiera, el origen y monto de las divisas liquidadas.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su realización, el inversionista, o su

administrador en su caso, quedará afecto a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, serán solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista o su administrador correspondiente o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que fundadamente se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

B) Los inversionistas institucionales que cumpliendo con los requisitos del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, derogado por la presente ley, hayan adquirido valores a que se refiere el Artículo 107 de la referida ley con anterioridad a la fecha de vigencia del Artículo Tercero de la presente ley que deroga el referido artículo 106, podrán, en la posterior enajenación de dichos valores gozar de la exención establecida en dicho artículo 106 con tal que durante su operación en el país y al momento de la enajenación cumplan con los requisitos establecidos en dicha disposición.”.

El Ejecutivo retiró la indicación N° 1) que reemplaza la letra b) del artículo 1° contenido en el artículo primero del proyecto de ley por haber sido objeto de indicación parlamentaria.

Puestos en votación los artículos 57, 80, 81, 82, 83, el acápite del Capítulo V, 84, 86, 87, 92 y 94 del artículo primero; el artículo tercero; el artículo segundo transitorio, y el actual artículo quinto transitorio, con las indicaciones precedentes fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Campos, don Cristián; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Los Diputados señores Javier Macaya y Ernesto Silva presentaron las siguientes indicaciones a los artículos 1°, 16, 33, 35, 56, 58, 61, 74, 77 y 93 contenidos en el artículo primero del proyecto de ley:

“1. Para modificar el artículo 1° letra b), quedando redactado de la siguiente manera:

“b) Fondo: patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una administradora.”.

2. Para modificar la redacción del artículo 16º, parte final, reemplazando el texto que sigue a la expresión “Sin embargo” por el siguiente texto:

“Sin embargo, cuando dicha contratación consista en la administración de cartera de todo o parte de los recursos del fondo, los gastos derivados de estas contrataciones serán de cargo de la administradora.”.

3. Para agregar en el artículo 33° inciso segundo, después del punto final, el siguiente texto:

“Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, proceso que deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el Reglamento.”.

4. Para agregar, un nuevo inciso segundo del artículo 35°, del siguiente tenor:

“No obstante lo establecido en el inciso anterior, las colocaciones de cuotas de fondos no rescatables podrán efectuarse fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, al precio que determine al efecto la administradora, en el caso de la primera emisión de cuotas, o la Asamblea de Aportantes, en el caso de las siguientes emisiones.”.

5. Para agregar al artículo 56°, un nuevo inciso segundo, con el siguiente texto:

“En todo caso, las operaciones de cambios internacionales que realicen los fondos se regirán por las disposiciones contenidas en el Párrafo Octavo, del Título III, del Artículo Primero de la Ley N° 18.840. Esta disposición se aplicará también a los Fondos Privados a que se refiere el Capítulo V de esta ley.”.

6. Para reemplazar en el artículo 58° inciso final, el actual texto por el siguiente:

“Para los efectos de este artículo y de las demás disposiciones relativas a inversiones en personas relacionadas o en instrumentos emitidos o garantizados por ella de la presente ley o del Reglamento, no se considerará como persona relacionada a la administradora, la que adquiera dicha condición como consecuencia de la inversión en ella de los recursos del fondo.”.

7. Para modificar el título del artículo 61º por el siguiente:

“Artículo 61°.- Requisitos para invertir en cuotas de fondos administrados por la misma administradora o personas relacionadas.”.

8. Para reemplazar el actual texto del artículo 74°, inciso primero letra d), que sigue al segundo punto seguido, por el siguiente:

“En caso que la disminución sea mediante una disminución del número de cuotas, una vez determinado el número de cuotas a disminuir, los aportantes podrán pactar entre sí un sistema de distribución distinto de la proporción que a cada uno le corresponda en tales cuotas, el que no podrá alterar el monto total a disminuir y deberá sujetarse a la forma que determine el Reglamento;”.

9. Para reemplazar en el título del artículo 77°, la expresión “Accionistas” por la de “Aportantes”.

10. Para agregar el siguiente inciso final al artículo 93:

“En cualquier tipo de comunicación o información que emitan administradoras de fondos privados, deberá necesariamente señalarse que se trata de fondos no regulados y no fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros.”.

La señora Celedón expresó que el Gobierno comparte la indicación número 1, ya que es una precisión de redacción a la definición de fondo.

La indicación número 2, afirmó, incorpora una precisión a la subcontratación de administración de carteras al incorporar que puede ser todo o parte, lo que en opinión del Gobierno mejora el proyecto.

En relación a la indicación número 3, sostuvo que tiene por propósito permitir que las cuotas de una serie puedan canjearse por cuotas de otra serie en los términos que se establezcan en el reglamento interno del fondo, lo que es compartido por el Ejecutivo.

La indicación número 4 propone permitir a los fondos de inversión no rescatables el que sus aportantes puedan definir precios de colocación de las cuotas diferentes del valor cuota, lo que en opinión del Ejecutivo mejora el proyecto.

Con respecto a la indicación número 5, explicó que tiene por objeto precisar que las operaciones de cambios internacionales que realicen los fondos se deberán regir por las normas cambiarias que determine el Banco Central, lo que también es compartido por el Ejecutivo.

La indicación número 6, se refiere a la posibilidad de los fondos de invertir en personas relacionadas, lo que perfecciona la redacción original del proyecto.

La indicación número 7, relativa al artículo 61, es una precisión al título que refleja mejor el contenido del artículo, puesto que lo que esta disposición permite es que los recursos de un fondo puedan ser invertidos en cuotas de fondos gestionados por la misma administradora, a condición que se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, y no la inversión en personas relacionadas en forma general.

La indicación número 8 complementa la regulación de las disminuciones de capital, especificando que esta se puede hacer por dos vías: disminuyendo el número de cuotas que tienen los aportantes o disminuyendo el valor de las mismas cuotas. En ambos casos debe ser la Asamblea de Aportantes la que adopte estos acuerdos, lo que es compartido por el Ejecutivo.

La indicación número 9 corrige el título del artículo 77, lo que mejora la redacción de esta norma.

Finalmente, la indicación número 10, constituye en opinión del Gobierno un aporte porque de alguna manera es una advertencia al mercado que se trata de fondos no fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Puestos en votación los artículos 1°, 16 y 33 contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, con las indicaciones N°s 1, 2 y 3 fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Campos, don Cristián; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Sometidos a votación los artículos 35, 56, 58, 61, 74, 77 y 93 contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, con las indicaciones N°s 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Campos, don Cristián; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Puesto en votación el resto del articulado, esto es, los artículos 2° al 15, 17 al 32, 34, 36 al 55, 59, 60, 62 al 73, 75, 76, 78, 79, 85, 88 al 91, 95 al 103 del artículo primero; el artículo segundo; el artículo cuarto; el artículo quinto; el artículo primero transitorio; el artículo tercero transitorio y el artículo cuarto transitorio fueron aprobados por 9 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los Diputados señores Campos, don Cristián; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Marinovic, don Miodrag.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN

Ninguno.

V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD

Los artículos 2° al 15, 17 al 32, 34, 36 al 55, 59, 60, 62 al 73, 75, 76, 78, 79, 85, 88 al 91, 95 al 103 del artículo primero; el artículo segundo; el artículo cuarto; el artículo quinto; el artículo primero transitorio; el artículo tercero transitorio y el artículo cuarto transitorio.

Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase la siguiente ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales.

Título I
DE LA GESTION DE FONDOS
CAPITULO I

Definiciones, alcance y fiscalización

Artículo 1°.- **Definiciones**. Para efectos de la presente ley, debe entenderse por:

a) Administradora: sociedad anónima que de conformidad a lo dispuesto por esta ley, es responsable por la administración de los recursos del fondo por cuenta y riesgo de los aportantes;

b) Fondo: patrimonio de afectación integrado por aportes realizados por partícipes destinados exclusivamente para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una administradora;

c) Fondo no rescatable: aquel fondo que no permite a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que, permitiéndolo, paga a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días;

d) Integrantes de una misma familia: quienes mantengan entre sí una relación de parentesco de hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y las entidades controladas, directa o indirectamente, por cada una de esas personas;

e) Inversionista Calificado: aquel a que se refiere la letra f) del artículo 4° bis de la ley N° 18.045;

f) Inversionista Institucional: aquel a que se refiere la letra e) del artículo 4° bis de la ley N° 18.045;

g) Normas de Carácter General: Instrucciones de general aplicación dictadas por la Superintendencia para normar aquellas materias que esta ley dispone queden contenidas en esos actos administrativos o que ésta determine como tales;

h) Partícipe o aportante: personas y entidades que, mediante sus aportes al fondo, mantienen inversiones en éste;

i) Reglamento: El decreto supremo del Ministerio de Hacienda emitido para efectos de normar aquellas materias que esta ley dispone queden contenidas en el Reglamento;

j) Reglamento interno del fondo: conjunto ordenado de reglas y normas que establece los derechos, obligaciones y políticas respecto de la administradora, el fondo y los partícipes del mismo;

k) Superintendencia: Superintendencia de Valores y Seguros;

l) Personas relacionadas: aquellas definidas en el artículo 100 de la ley N° 18.045.

m) Acuerdo de actuación conjunta: aquel definido en la ley Nº 18.045.

Artículo 2°.- **Normativa aplicable y fiscalización de la Superintendencia**. Los fondos y sus administradoras serán fiscalizados por la Superintendencia y se regirán por las disposiciones de esta ley, las del Reglamento y, en subsidio, por las que establezcan sus respectivos reglamentos internos.

La Superintendencia tendrá para esos efectos, todas las facultades que le confiere su ley orgánica y podrá examinar sin restricción alguna todos los libros, carteras y documentos mantenidos por la administradora y solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del estado y solvencia de la administradora, del desarrollo de la gestión de recursos efectuada por ésta y del estado de las inversiones del fondo, pudiendo ordenar las medidas que fueren menester, para corregir las deficiencias que encontrare.

No les serán aplicables las disposiciones de esta ley a aquellos fondos constituidos en conformidad al decreto ley N° 3.500 y las leyes N° 19.728, N° 19.882 y N° 18.591.

CAPITULO II

De la Administradora

§ 1. De la Constitución, remuneración y patrimonio

Artículo 3°.- **Sociedades administradoras**. Las administradoras deberán constituirse como sociedades anónimas especiales, cuyo objeto exclusivo será la administración de recursos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, las administradoras podrán realizar las demás actividades que les autorice la Superintendencia.

Artículo 4°.- **Reglas especiales para las administradoras**. Las administradoras estarán sujetas a las siguientes reglas especiales:

a) Se forman, existen y prueban de conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la ley N° 18.046, siéndoles aplicables los artículos 127, 128 y 129 de la misma ley;

b) Deberán incluir en su nombre la expresión “Administradora General de Fondos”;

c) Deberán mantener permanentemente un patrimonio no inferior al equivalente a 10.000 unidades de fomento, el que deberá acreditar y calcular, en la forma que determine la Superintendencia;

d) Sólo podrán iniciar sus funciones, una vez que hayan acreditado a satisfacción de la Superintendencia que cumplen los requisitos legales y que cuentan con las políticas, procedimientos y controles que ésta requiera, mediante norma de carácter general, para resguardar adecuadamente los intereses de los partícipes y recursos de los fondos;

e) Transcurrido un año desde su autorización de existencia, la administradora deberá contar con, al menos, un fondo que cumpla las condiciones relativas al patrimonio y número de partícipes establecidas en el artículo 5° siguiente, debiendo mantener permanentemente tal condición. En caso contrario, la administradora deberá disolverse, procediéndose a su liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley. El directorio de la administradora deberá comunicar este hecho a la Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes de ocurrido el mismo y tomará nota de esta circunstancia al margen de la inscripción de la sociedad y publicará por una sola vez un aviso en el Diario Oficial, informando de esta ocurrencia.

Se reserva el uso de la expresión “Administradora General de Fondos”, a aquellas sociedades a que se refiere este capítulo. En consecuencia, ninguna entidad que no se hubiere constituido o transformado en una entidad de este tipo conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora General de Fondos, podrá arrogarse la calidad de tal, o utilizar este nombre en su razón social.

Artículo 5°.- **Patrimonio mínimo y número mínimo de partícipes**. Transcurrido un año contado desde la fecha en que la administradora haya depositado el reglamento interno del fondo, éste deberá contar permanentemente con un patrimonio no menor al equivalente a 10.000 unidades de fomento y tener, a lo menos, 50 partícipes, salvo que entre éstos hubiere un inversionista institucional, en cuyo caso no regirá ese número mínimo de partícipes.

Cumplido el plazo señalado en el inciso anterior, si el monto del patrimonio o el número de partícipes fuere inferior al mínimo exigido, la administradora deberá comunicar este hecho a la Superintendencia al día hábil siguiente de ocurrido el mismo. La Superintendencia, mediante resolución fundada, podrá otorgar a la administradora un plazo máximo de un año para que ésta última cumpla con el patrimonio mínimo requerido o el número mínimo de partícipes indicado, según sea el caso. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la Superintendencia ordenará sin más trámite que se proceda con la liquidación del fondo. Si la administradora no contare a esa fecha con la administración de otros fondos, ésta se disolverá de conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 4° anterior.

Artículo 6°.- **Porcentaje máximo de cuotas por aportante**. Después de transcurrido un año contado desde el inicio de la comercialización del fondo, ningún aportante que no sea inversionista

institucional, podrá poseer, directa o indirectamente, cuotas representativas de más de un 35% del patrimonio total del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con sus personas relacionadas o con quienes mantenga un acuerdo de actuación conjunta. Para el cálculo de dicho porcentaje no deberán considerarse aquellas cuotas en las cuales personas relacionadas al aportante, aparezcan como titulares en el Registro de Aportantes sin ser éstas sus beneficiarios, porque actúan en calidad de mandatarios o custodios, y, al mismo tiempo, hayan recibido instrucciones específicas de los beneficiarios o mandantes para ejercer el derecho a voto de esas cuotas de manera determinada.

La administradora velará porque el citado porcentaje máximo no sea excedido por colocaciones de cuotas efectuadas por su cuenta y por los agentes indicados en el artículo 41. Si así ocurriera, la Superintendencia establecerá los plazos para que las personas que excedan dichos porcentajes procedan a la enajenación de sus cuotas, hasta por aquella parte que permita el cumplimiento del mismo, sin perjuicio de las sanciones que al efecto la Superintendencia pueda aplicar. Las administradoras no podrán aceptar solicitudes de traspasos que den lugar a excesos sobre dicho porcentaje.

Las cuotas representativas del exceso por sobre este porcentaje máximo, mientras éste se mantenga, no tendrán derecho a voto en las Asambleas de Aportantes, ni serán consideradas para los efectos de los quórum de constitución y adopción de acuerdos. En caso de que exista un acuerdo de actuación conjunta, el voto de cada una de las partes de dicho acuerdo se rebajará proporcionalmente, salvo que éstas acordaren distribuir el voto de manera distinta hasta alcanzar dicho porcentaje máximo.

Artículo 7°.- **Depósito del reglamento interno y comercialización del fondo**. La administradora dispondrá de un plazo máximo de 180 días contados desde el depósito del reglamento interno respectivo, para iniciar la comercialización del fondo. Si así no ocurriese, la Superintendencia podrá cancelar el reglamento en el depósito.

Artículo 8°.- **Idoneidad de los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la administradora y de demás personas que se indican**. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de la administradora, así como quienes realicen para ésta funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos, en el proceso de elección o toma de decisiones de inversión para fondos, en la realización de operaciones de fondos y gestión de riesgos en la administradora, deberán contar con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre gestión y, o comercialización de fondos. La Superintendencia mediante norma de carácter general, establecerá los parámetros y estándares dentro de los cuales se presumirá que se cumple con la idoneidad y conocimientos requeridos en este inciso, los que deberán distinguir las distintas funciones dentro de la administradora.

La Superintendencia podrá fiscalizar el cumplimiento de dichos requisitos de idoneidad. En caso que concluyere que existe incumplimiento,

deberá consignarlo en una resolución fundada, de carácter reservado, la que propondrá las medidas que permitan cumplir con dicho requisito.

En contra de dicha resolución podrán interponerse los recursos indicados en el artículo 45 y 46 del decreto ley Nº 3.538. Una vez vencidos los plazos para interponerlos, la administradora deberá adoptar las medidas conducentes a superar la falta de idoneidad detectada, dentro del plazo que para ello establezca la resolución y, en caso contrario, servirá de antecedente para determinar la responsabilidad que cupiere a la administradora, de comprobarse que existe relación con los perjuicios que se produzcan con posterioridad.

Artículo 9°.- **Remuneración de la administradora**. Por la gestión del fondo, la administradora podrá cobrar a éste aquella remuneración que establezca el reglamento interno del mismo.

La administradora podrá cobrar su remuneración directamente al fondo o a los partícipes. La remuneración que se cobre directamente a los partícipes se denominará comisión y sólo podrá cobrarse al momento de efectuar la inversión o el rescate de la misma, sobre el monto aportado o rescatado, indistintamente. La remuneración, incluida la comisión, podrán ser diferentes para los partícipes de distintas series, en su caso, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento. En los casos y forma que establezca el reglamento interno del fondo, la remuneración, o parte de ella, podrá ser enterada al fondo por la administradora, en cuyo caso dicha remuneración pasará a formar parte del patrimonio de aquél, sin incrementar el número de cuotas del mismo. La remuneración devuelta y restituida al fondo, no se considerará como remuneración o renta para la administradora, para todos los efectos legales y tributarios.

Todo beneficio que reciba la administradora producto de la inversión de los activos del fondo deberá ser enterada a éste.

Artículo 10.- **Incumplimiento del patrimonio mínimo**. Si por cualquier causa la administradora tuviere una pérdida o variación patrimonial que afectare el cumplimiento de patrimonio mínimo requerido en esta ley, aquélla deberá informar de este hecho a la Superintendencia al día siguiente hábil de producido el mismo, y estará obligada a restablecer los déficit producidos dentro del plazo que fije la Superintendencia, el cual no podrá ser superior a 90 días, prorrogables por una sola vez, por igual plazo. Si en dicho plazo no se regularizare esta situación, la Superintendencia podrá revocar la autorización de existencia de la administradora en cuestión.

Artículo 11.- **Filiales de Bancos**. Las administradoras que sean filiales de bancos no podrán invertir en aquellos activos que establezca al efecto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de manera conjunta con la Superintendencia.

§2. De la Garantía

Artículo 12.- **Garantía Mínima**. Las administradoras deberán constituir una garantía en beneficio de cada fondo para asegurar el

cumplimiento de sus obligaciones por la administración del mismo. Dicha garantía, deberá constituirse a más tardar el mismo día en que se deposite el reglamento interno del fondo respectivo, y ser mantenida hasta la total extinción de éste. La garantía será por un monto inicial de 10.000 unidades de fomento y podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o pólizas de seguro, siempre que el pago de estas dos últimas no esté sujeto a condición alguna distinta que la mera ocurrencia del siniestro o hecho respectivo. En caso que no se constituyere la garantía o no se mantuviere permanentemente vigente, la administradora y sus directores responderán solidariamente de los perjuicios que este incumplimiento causare a los partícipes.

Artículo 13.- **Actualización anual de la Garantía**. El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente, para cada fondo, de manera que dicho monto sea siempre, a lo menos, equivalente al mayor valor entre:

i) 10.000 unidades de fomento;

ii) el 1% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, o

iii) aquél porcentaje del patrimonio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización, que determine la Superintendencia en función de la calidad de la gestión de riesgos que posea la administradora en cuestión. La calidad de la gestión de riesgos será medida según una metodología estándar que considerará los riesgos de los activos y riesgos operacionales, entre otros. Dicha metodología y demás parámetros serán fijados en el Reglamento.

Con todo, el porcentaje que establezca la Superintendencia, no podrá ser superior al 5% del patrimonio promedio diario del fondo, correspondiente al trimestre calendario anterior a la fecha de su actualización.

La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, determinará la forma de cálculo del patrimonio promedio diario del fondo.

Artículo 14.- **Representante de los beneficiarios de la garantía**. Las administradoras deberán designar a un banco como representante de los beneficiarios de la garantía a que se refiere este Párrafo.

Si la garantía consistiere en depósitos de dinero, la entrega del dinero se hará al representante de los beneficiarios.

Si la garantía consistiere en boleta bancaria o póliza de seguros, el representante de los beneficiarios será el tenedor de los documentos justificativos de la misma. El banco o compañía de seguros otorgante, deberá pagar el valor exigido por tal representante a su simple requerimiento y hasta su monto garantizado.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, y sin que sea necesario acreditarlo a las entidades otorgantes, el representante de los

beneficiarios de boletas de garantía, para hacerlas efectivas, deberá ser notificado judicialmente del hecho de haberse interpuesto demanda en contra de la administradora caucionada. El dinero proveniente de la realización de la boleta bancaria quedará en prenda de pleno derecho en sustitución de esa garantía, manteniéndose en depósitos reajustables por el representante hasta que cese la obligación de mantener la garantía.

§3. Del Deber de Cuidado

Artículo 15.- **Responsabilidad de la administradora**. La responsabilidad por la función de administración es indelegable, sin perjuicio que las administradoras puedan conferir poderes especiales o celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento del giro.

Artículo 16.- **Contratación de Servicios Externos**. Cuando se trate de la contratación de servicios externos, en el reglamento interno del fondo, deberá constar la facultad de la administradora para llevar a cabo dichos contratos. Asimismo, deberá señalarse en dicho documento si los gastos derivados de las contrataciones serán de cargo de la administradora o del fondo de que se trate y, en este último caso, la forma y política de distribución de tales gastos. Sin embargo, cuando dicha contratación consista en la administración de cartera de todo o parte de los recursos del fondo, los gastos derivados de estas contrataciones serán de cargo de la administradora.

Artículo 17.- **Culpa leve y pago de indemnizaciones**. La administradora, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de los objetivos establecidos en el reglamento interno del fondo, en términos de la rentabilidad y seguridad de sus inversiones. La administración de cada fondo debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de éste y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación de activos que efectúe por cuenta del mismo, se hagan en el mejor interés del fondo.

La administradora podrá demandar a las personas que le hubieran ocasionado perjuicios al fondo, por los daños causados a éste, en juicio sumario. El procedimiento por el cual dichas indemnizaciones serán enteradas al fondo o traspasadas a sus partícipes deberá estar establecido en el reglamento interno de cada fondo.

La administradora estará obligada a indemnizar al fondo o a los partícipes por los daños y perjuicios que ella o cualquiera de sus dependientes o personas que le presten servicios le causaren al fondo, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualquiera de las actuaciones prohibidas a que se refiere los artículos 22 y 23 de la presente ley. Las personas antes mencionadas que hubieran participado en tales actuaciones serán solidariamente responsables del reembolso, que incluirá el daño emergente y el lucro cesante.

Artículo 18.- **Obligación de informar**. La administradora deberá informar en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los fondos que administra, y de las series de cuotas en su caso, y sobre cualquier hecho esencial o relevante relacionado con la administradora o los fondos que administra, según dicho concepto está definido en la ley N° 18.045. La información mínima que deberá ser difundida y la forma de comunicación utilizada, será determinada por la Superintendencia.

Artículo 19.- **Revocación por infracciones graves**. La Superintendencia podrá revocar la autorización de existencia de la administradora en los casos de infracción grave a las normas legales que rijan a los fondos y sus administradoras o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente negligente.

Artículo 20.- **Obligaciones de directores de la administradora**. Los directores de la administradora, sin perjuicio de las obligaciones señaladas en la ley N° 18.046, estarán obligados a velar para que:

a) la administradora cumpla con lo dispuesto en el reglamento interno de cada fondo;

b) la información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna;

c) las inversiones, valorizaciones u operaciones de los fondos se realicen de acuerdo con esta ley, su Reglamento, las normas que dicte la Superintendencia y lo dispuesto en el reglamento interno;

d) los partícipes de un mismo fondo, o de una misma serie, en su caso, reciban un trato no discriminatorio, y

e) las operaciones y transacciones que se efectúen, sean sólo en el mejor interés del fondo de que se trate y en beneficio exclusivo de los partícipes del mismo.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el inciso anterior, en las sesiones ordinarias de directorio, los directores deberán velar por el debido tratamiento de las materias antes descritas, debiendo dejar constancia de los acuerdos adoptados.

Artículo 21.- **Auditores externos de la administradora**. Las empresas de auditoría externa de las administradoras, en su informe anual, deberán pronunciarse acerca de los mecanismos de control interno que éstas se impongan para velar por el fiel cumplimiento de la ley, así como también sobre los sistemas de información y archivo para registrar el origen, destino y oportunidad de las transacciones que se efectúen con los recursos de cada fondo.

En su informe anual, las empresas de auditoría externa del fondo, deberán pronunciarse además sobre el cumplimiento de las políticas y normas contenidas en el reglamento interno del fondo.

§4. De las Prohibiciones

Artículo 22.- **Prohibiciones**. Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en otras leyes, son contrarias a la presente ley las siguientes actuaciones u omisiones efectuadas por las administradoras y, según corresponda en cada caso, por las personas que participen en las decisiones de inversión del fondo o que en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del fondo:

a) las operaciones realizadas con los bienes del fondo para obtener beneficios indebidos, directos o indirectos;

b) el cobro de cualquier servicio al fondo, no autorizado por ley o los reglamentos internos, o en plazos y condiciones distintas a las que en ellos se establezca;

c) el cobro al fondo de cualquier servicio prestado por personas relacionadas con la administradora del mismo, salvo que ello esté expresamente autorizado con un límite anual por el reglamento interno del fondo y que dicho cobro se efectúe a precios de mercado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.046;

d) la comunicación de información relevante relativa a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta del fondo, a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas;

e) la adquisición de activos que haga la administradora para sí, dentro de los 5 días siguientes a la enajenación de éstos, efectuada por ella por cuenta del fondo, si el precio de compra es inferior al existente antes de dicha enajenación. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días;

f) la enajenación de activos propios que haga la administradora dentro de los 5 días siguientes a la adquisición de éstos por cuenta del fondo, si el precio de venta es superior al existente antes de dicha adquisición. Tratándose de activos de baja liquidez, este plazo será de 60 días;

g) la adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo en que actúe para sí como vendedor o comprador la administradora o un fondo privado, de los del Capítulo V de esta ley, bajo su administración o de una sociedad relacionada a ella;

h) la adquisición o enajenación de bienes por cuenta del fondo a personas relacionadas con la administradora o a fondos administrados por ella o por sociedades relacionadas, salvo que se trate de las excepciones a las que se refiere el artículo siguiente, y

i) las enajenaciones o adquisiciones de activos que efectúe la administradora, si resultaren ser más ventajosas para ésta que las respectivas enajenaciones o adquisiciones de éstos, efectuadas en el

mismo día, por cuenta del fondo. Lo anterior salvo que se entregara al fondo, dentro de los dos días siguientes al de la operación, la diferencia de precio correspondiente.

Para los efectos de las operaciones a que se refiere este artículo, se entenderá por activos, todos aquéllos que sean de la misma especie, clase, tipo, serie y emisor.

Se entenderá por activos de baja liquidez aquellos que no se transen frecuentemente y en volúmenes significativos en los mercados secundarios formales, todo lo anterior de conformidad a lo determinado por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

No obstante las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan y el derecho a reclamar perjuicios, los actos o contratos realizados en contravención a las prohibiciones anteriormente señaladas, no verán afectada su validez.

Artículo 23.- **Actos prohibidos**. Las administradoras, sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y demás personas relacionadas, no podrán adquirir, enajenar o gravar directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, instrumentos, bienes o contratos, de propiedad de los fondos que administren, ni enajenar o gravar los suyos a éstos. Tampoco podrán dar en préstamo dinero u otorgar garantías a favor de dichos fondos y viceversa. Se exceptuarán de esta prohibición y de la establecida en la letra h) del artículo 22 anterior, aquellas adquisiciones y enajenaciones que se realicen sobre los activos en la forma y condiciones determinadas por la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Las transacciones de cuotas del fondo que efectúen las personas mencionadas en el inciso anterior, deberán informarse a la Superintendencia en la forma y plazos que ésta determine mediante norma de carácter general. No se considerará para efectos de este inciso como persona relacionada, al custodio cuando actúe por cuenta de terceros.

§5. De la Disolución de la Administradora y Liquidación de los Fondos

Artículo 24.- **Disolución y liquidación de la administradora**. En caso que la administradora sea disuelta, por revocación de la autorización de existencia o por cualquier otra causa, se procederá con su liquidación, de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. La liquidación de la administradora será llevada a cabo por quien determine la junta de accionistas de la misma, la que para estos efectos deberá celebrarse dentro de un plazo de 60 días contados desde la disolución. En caso de no realizarse la citada junta, o en caso que la revocación de la autorización de existencia hubiere sido resuelta por la Superintendencia por las causales señaladas en el artículo 19 de esta ley, esta liquidación será encomendada a la Superintendencia, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine.

Artículo 25.- **Quiebra de la administradora**. Declarada la quiebra de la administradora, la Superintendencia, o quien ésta designe, actuará como síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.

Artículo 26.- **Destino de los fondos cuya administradora quiebre o se disuelva**. Respecto de los fondos administrados por la administradora disuelta o declarada en quiebra, se procederá de acuerdo a lo siguiente:

a) En caso de fondos que de conformidad a esta ley deban tener asamblea de aportantes, la asamblea de aportantes de cada uno de esos fondos, que deberá ser convocada al efecto por el Comité de Vigilancia del fondo, dentro de los 10 días siguientes de producida la disolución o declaración de quiebra, deberá encomendar dicha administración y escoger a otra administradora, o bien encomendar su liquidación a la Superintendencia, o a un tercero. En caso de no realizarse la citada asamblea de aportantes o en caso que esa asamblea así lo determine, la liquidación del fondo será encomendada a la Superintendencia, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine.

b) En caso de fondos que de conformidad a esta ley no deban tener asamblea de aportantes, la Superintendencia será la encargada de la liquidación del fondo, la cual podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que ésta determine. La Superintendencia, en interés de los partícipes del fondo, podrá traspasar la administración de éste a otra administradora, en vez de proceder con su liquidación.

c) Para la liquidación de los fondos, la Superintendencia estará investida con todas las facultades necesarias para la adecuada realización de los bienes del fondo.

En caso de insolvencia de un fondo, sus acreedores podrán solicitar su quiebra. En caso de ser ésta declarada, la Superintendencia, o quien ésta designe, actuará como síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos el Libro IV del Código de Comercio, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley.

Respecto de la liquidación de los fondos en casos distintos a la disolución o quiebra de la administradora, o la quiebra del propio fondo, ésta deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno del fondo que se está liquidando.

Artículo 27.- **Costos de la liquidación**. Los costos asociados a la liquidación de un fondo serán de cargo del fondo que se liquida. Si es una administradora la que se disuelve, los costos asociados a dicho proceso serán de cargo de la propia administradora.

CAPITULO III

De los Fondos

§1. De la Denominación

Artículo 28.- **Los Fondos Mutuos**. Los fondos que permitan el rescate total y permanente de las cuotas, y que las paguen en un plazo inferior o igual a 10 días, se denominarán “Fondos Mutuos”, y deberán incluir en su nombre y publicidad, la expresión “Fondo Mutuo”.

Para estos efectos, no se considerarán las restricciones que puedan establecerse en el reglamento interno del fondo para los rescates que se realicen diariamente por montos significativos que cumplan las condiciones que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Artículo 29.- **Los Fondos de Inversión**. Los fondos que no sean Fondos Mutuos de acuerdo con lo definido en el artículo anterior, se denominarán “Fondos de Inversión” y deberán incluir en su nombre y publicidad, la expresión “Fondo de Inversión”. Si además tuvieran la calidad de fondos no rescatables, deberá incluirse en su nombre y publicidad la expresión “no rescatable”.

Artículo 30.- **Nombres que induzcan a error**. Los nombres de los fondos no podrán contener palabras o expresiones que puedan inducir a error o equívoco del público, respecto de la naturaleza, características y rentabilidad del fondo respectivo.

§2. De los Aportes y los Rescates

Artículo 31.- **Calidad de aportante**. La calidad de aportante se adquiere al momento en que el aporte quede a libre disposición de la administradora, por cuenta del fondo respectivo y, específicamente:

a) Si el aporte fuere dinero efectivo o vale vista bancario, en moneda nacional o extranjera, al momento de recibirlo la administradora.

b) Si el aporte fuese pagado mediante un cheque, en moneda nacional o extranjera, al momento en que se perciba el aporte del banco librado.

c) Si se tratare de transacciones en el mercado secundario, cuando se curse el traspaso correspondiente.

d) Tratándose de otro tipo de aportes, al momento y en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 32.- **Pago del aporte**. Los aportes al fondo podrán ser efectuados en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario, cheque o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que permita la Superintendencia, según lo establezca el reglamento interno del fondo. Los

aportes que efectúe la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán efectuarse en dinero efectivo o moneda extranjera.

Tratándose de aportes que no sean en dinero efectivo, deberán ser convertidos en cuotas a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto pueda establecer la Superintendencia.

Artículo 33.- **Las cuotas del fondo**. Los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de éstas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo y bajo las condiciones que establezca la Superintendencia.

Las cuotas de un fondo, o de la serie en su caso, deberán tener igual valor y características, y su cesión se regirá por las formalidades y procedimientos que establezca el Reglamento. Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, proceso que deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el Reglamento.

Artículo 34.- **El registro de aportantes**. El directorio de la administradora será responsable por la custodia y mantención de un Registro de aportantes, el que cumplirá con los términos y condiciones establecidas mediante norma de carácter general de la Superintendencia. En dicho Registro, que acreditará la titularidad de las cuotas del fondo respectivo, deberá constar el número de cuotas del que cada aportante es titular y la forma y oportunidad de su ingreso y salida del fondo, o de la serie en su caso. El directorio podrá delegar esta función, de lo que deberá dejarse constancia en acta.

Artículo 35.- **Precio de colocación de las cuotas**. En caso de colocaciones de cuotas efectuadas fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, el precio de colocación será el valor cuota, definido por el Reglamento. En caso de colocaciones en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, será aquél que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, las colocaciones de cuotas de fondos no rescatables podrán efectuarse fuera de los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Superintendencia, al precio que determine al efecto la administradora, en el caso de la primera emisión de cuotas, o la Asamblea de Aportantes, en el caso de las siguientes emisiones.

Artículo 36.- **Derecho preferente de suscripción de cuotas**. En caso de aumento de capital del fondo, los fondos no rescatables, deberán ofrecer las nuevas cuotas, a lo menos por una vez, preferentemente a los aportantes del fondo inscritos en el Registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la colocación de las cuotas respectivas, a prorrata de las cuotas que éstos posean a ese momento, y por el plazo que la misma Asamblea de aportantes acuerde.

Este derecho es esencialmente renunciable y transferible, en los plazos y términos que establezca el Reglamento, pudiendo además, la misma Asamblea Extraordinaria de aportantes que acordó el aumento de capital, por unanimidad de las cuotas presentes, establecer que no habrá oferta preferente alguna.

Artículo 37.- **Contrato de promesa de suscripción de cuotas**. En la colocación de cuotas de fondos no rescatables se podrán celebrar contratos de promesa de suscripción y pago de las respectivas cuotas, para ser cumplidas en un plazo posterior al del respectivo período de oferta preferente, pero dentro del plazo máximo establecido en el reglamento interno del fondo. El contrato de promesa de suscripción y pago de cuotas que celebren la administradora y el futuro aportante, deberá regirse por las normas que al respecto se establezcan en el Reglamento.

Artículo 38.- **El rescate de las cuotas**. Las cuotas del fondo podrán ser rescatadas por los partícipes, siempre que así lo establezca el reglamento interno del fondo, el cual fijara los términos, condiciones y plazos para ello.

En caso de fondos no rescatables, las cuotas del fondo deberán estar registradas en una bolsa de valores nacional, o extranjera autorizada por la Superintendencia para estos efectos, y la administradora podrá establecer mecanismos que permitan asegurar a los partícipes un adecuado y permanente mercado secundario para sus cuotas, según se establezca en el reglamento interno del fondo.

El rescate podrá ser pagado en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que permita la Superintendencia, de conformidad a lo que establezca el reglamento interno del fondo.

Los rescates que solicite la administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán pagarse en dinero efectivo o moneda extranjera.

Tratándose de rescates que no sean pagados en dinero efectivo, deberán ser valorizados a precios que no perjudiquen el mejor interés del fondo, de conformidad a las normas que al efecto podrá establecer la Superintendencia.

La administradora y los partícipes podrán acordar que la solicitud de rescate sea cursada en una fecha posterior a la de su presentación, de conformidad a lo establecido en su reglamento interno.

Artículo 39.- **Determinación del valor cuota**. Para efectos de determinar el valor a pagar a los aportantes que soliciten el rescate de cuotas del fondo, se utilizará el “valor cuota”, definido por el Reglamento.

La administradora deberá poner a disposición del público dicho valor cuota, en la forma y medios que determine la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

Artículo 40.- **Suspensión de operaciones de rescate**. La Superintendencia podrá, en caso de moratoria, conmoción pública, cierre bancario o de bolsa y otros hechos o anormalidades semejantes, así como en otras circunstancias que determine en el mejor interés y protección de los partícipes, autorizar transitoriamente que el rescate de cuotas se pague de otra forma, condiciones y plazos, o bien, suspender las operaciones de rescate, las distribuciones en efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte.

Artículo 41.- **Agentes para suscripción y rescate de cuotas**. Las colocaciones y rescates de cuotas, podrán efectuarse directamente por la administradora o por agentes que serán mandatarios de ésta para los efectos de la suscripción y rescate de cuotas u otra clase de operaciones que por su intermedio efectúen los partícipes del fondo.

Dichos agentes deberán acreditar a satisfacción de la Superintendencia que cuentan con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre comercialización de fondos. Dicha acreditación se efectuará en la forma y periodicidad que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Artículo 42.- **Adquisición de cuotas de propia emisión**. Los fondos podrán adquirir, a precios iguales o inferiores al valor cuota, y poseer cuotas de su propia emisión cuando dicha facultad esté contemplada en el reglamento interno del fondo, de acuerdo a los términos, condiciones y plazos que establezca dicho reglamento interno.

Las cuotas deberán adquirirse en una bolsa de valores o en los mercados que autorice la Superintendencia por norma de carácter general. Con todo, los fondos no podrán adquirir cuotas de propiedad de la administradora, sus personas relacionadas, sus directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, salvo que ellas se adquieran en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series y todos los partícipes o aportantes del fondo.

Artículo 43.- **Porcentaje máximo de cuotas de propia emisión**. Los fondos sólo podrán mantener en cartera cuotas de su propia emisión representativas de hasta aquel porcentaje del patrimonio total del fondo que establezca su reglamento interno, el cual no podrá ser superior al 5%.

Los excesos producidos deberán ser enajenados al cabo de 90 días contados a partir de la fecha de la adquisición que hubiere dado origen al exceso. Si así no ocurriere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de cuotas representativas del exceso por sobre este porcentaje máximo. En caso de ocurrida la disminución de pleno derecho, ésta deberá ser comunicada a los partícipes y a la Superintendencia, dentro de los 5 días hábiles siguientes.

El fondo podrá adquirir diariamente una cantidad de cuotas representativa de hasta el 1% del patrimonio del fondo, o aquel porcentaje inferior que contemple su reglamento interno, salvo que ellas se adquieran

en un proceso de oferta pública de recompra de cuotas dirigida a todas las series de cuotas y a todos los partícipes o aportantes del fondo. Sólo podrán ser adquiridas por este procedimiento cuotas del fondo que estén totalmente pagadas y libres de todo gravamen o prohibición.

Las cuotas adquiridas por el fondo deberán enajenarse en una bolsa de valores o en los mercados autorizados por la Superintendencia dentro del plazo máximo de un año a contar de su adquisición y si así no se hiciere, el capital disminuirá de pleno derecho en aquel número de cuotas adquiridas por el fondo. Para la enajenación de las cuotas deberá cumplirse con la oferta preferente de suscripción señalada en el artículo 36 de esta ley, en caso que fuere aplicable.

Artículo 44.- **Reglas adicionales**. La adquisición y posesión de cuotas de su propia emisión por parte del fondo quedará sujeta a las siguientes normas adicionales:

a) El valor de las cuotas propias en cartera no se considerará parte del patrimonio mínimo para todos los efectos legales, reglamentarios y normativos.

b) Mientras las cuotas sean de propiedad del fondo, no se computarán para la constitución del quórum en las Asambleas de Aportantes, en aquellos fondos que por ley las requieran, y no tendrán derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital.

§3. Del Reglamento Interno

Artículo 45.- **Contenido del reglamento interno**. Cada fondo deberá contar con un reglamento interno en el que se establecerán los derechos, obligaciones y políticas que regirán a la administradora, al fondo y a los partícipes del mismo.

Artículo 46.- **Depósito del reglamento interno**. Las administradoras deberán depositar el reglamento interno, y demás documentos que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general, de cada uno de los fondos que administren, o en su caso, las modificaciones respectivas. Para estos efectos, la Superintendencia llevará un “Depósito de Reglamentos Internos”, en adelante denominado el “Depósito”.

Artículo 47.- **Comercialización de las cuotas**. Las cuotas de un fondo podrán ser comercializadas a partir del día siguiente hábil del depósito que se haga del reglamento interno y demás documentos exigidos al efecto por la Superintendencia, considerándose, a partir de ese momento y para todos los efectos legales, como valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia.

La comercialización de las cuotas del fondo, deberá ajustarse a los requisitos de información que podrá establecer la Superintendencia por norma de carácter general, la que, además, podrá requerir el depósito de los

prospectos o folletos que se entreguen al público para efectos de dicha comercialización.

En la comercialización de las cuotas del fondo no podrá ofrecerse ningún beneficio al aportante o partícipe que no se encuentre asociado a la rentabilidad que se obtenga por las inversiones del mismo, a su política de inversiones u otros que determine la Superintendencia.

Artículo 48.- **Políticas del reglamento interno**. Los fondos deberán contemplar en sus reglamentos internos, al menos, las siguientes políticas:

a) Política de Inversión: serán las normas que deberá respetar la administradora en cuanto a los tipos de instrumentos, bienes y contratos en los que se invertirán los recursos del fondo, y en caso que corresponda, sus clasificaciones de riesgo, contrapartes y mercados de negociación, con los límites pertinentes y tratamiento de excesos;

b) Política de Liquidez: serán las normas que deberá observar la administradora, en lo que respecta a los requisitos que deberán cumplir las inversiones del fondo para efectos de contar con los recursos líquidos necesarios para cumplir con las obligaciones por las operaciones del fondo o el pago de rescate de cuotas;

c) Política de Endeudamiento: serán las normas que deberá acatar la administradora en lo que respecta a las obligaciones que asumirá el fondo con terceros, con los límites correspondientes;

d) Política de Diversificación: serán las normas que deberá obedecer la administradora, en relación con el grado de concentración máximo del fondo que se podrá mantener invertido en un instrumento, contrato o bien particular; en un tipo de instrumentos, contratos o bienes; en mercados específicos; o en cuanto a la relevancia relativa que cada uno de ellos podrá tener respecto del resto;

e) Política de Votación: serán las normas que regirán el actuar de la administradora en el ejercicio del derecho a voto que le confieran al fondo sus inversiones, con las prohibiciones o restricciones que se establezcan al efecto, y

f) Política de Gastos: serán las normas que establecerán aquellos gastos y cobros que serán de cargo del fondo.

Estas políticas, deberán ser consistentes y coherentes con aquellas normas que se definan en cuanto a la rescatabilidad de la cuota, al pago de la misma y al tipo de inversionistas a los que está dirigido el fondo.

Artículo 49.- **Ajuste del reglamento interno con la legislación vigente**. Los contenidos mínimos tanto de los reglamentos internos como de la demás documentación que emplee la administradora en su relación con el inversionista, serán establecidos por la Superintendencia. De igual manera, se regulará la forma en que las administradoras remitirán los antecedentes objeto de depósito.

Las administradoras serán responsables de que los contenidos de los reglamentos internos y documentación que depositen se ajusten a la legislación y normativa vigente y sean redactados en forma clara, entendible y no inductiva a error.

La Superintendencia podrá, en cualquier momento, representar fundadamente a la sociedad que sus reglamentos o contratos no se ajustan a la legislación o normativa vigente. Asimismo, mediante resolución fundada, podrá suspender la comercialización de las cuotas del fondo hasta el momento en que entren en vigencia las modificaciones que subsanan las observaciones formuladas por la Superintendencia a los reglamentos o contratos, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que sean pertinentes. En caso que la administradora continuara comercializando las cuotas o no subsanara las observaciones en el plazo que indique la Superintendencia, el que no podrá ser inferior a dos días hábiles, ésta podrá, sin más trámite, proceder a la eliminación definitiva de los reglamentos o documentos del correspondiente Depósito y ordenar la liquidación del fondo.

Artículo 50.- **Reglamento general de fondos**. En caso que la administradora gestione más de un fondo, deberá depositar, en la forma y condiciones establecidas en esta ley para los reglamentos internos, un reglamento general de fondos, el cual deberá abordar, al menos:

a) La forma de prorrateo de los gastos de administración entre los distintos fondos gestionados;

b) Los límites de inversión que se deberán respetar por la inversión conjunta de esos fondos y la forma y proporción en que se liquidarán los excesos de inversión;

c) La forma en que se resolverán los conflictos que pudieren producirse entre fondos, sus partícipes o la administración de los mismos;

d) Los beneficios especiales de los partícipes de fondos en relación al rescate de cuotas y su inmediato aporte en otro fondo administrado por la misma administradora, y

e) Cualquier otra mención que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general.

Artículo 51.- **Modificaciones a los reglamentos**. Las modificaciones que se introduzcan al reglamento interno, reglamento general de fondos, y demás documentación ya depositada, deberán ser comunicadas por la administradora a los partícipes del fondo y ser incorporadas al texto del reglamento interno, cuyo texto refundido deberá ser depositado conforme a lo dispuesto en el artículo 49. El plazo de esta comunicación, al igual que la entrada en vigencia de las modificaciones, serán establecidas en el Reglamento. La forma, formalidades y el contenido de la comunicación serán determinados por la Superintendencia por norma de carácter general.

§4. De las Operaciones de los Fondos

Artículo 52.- **Operaciones del Fondo**. Las operaciones del fondo serán efectuadas por la administradora por cuenta y riesgo del fondo, el cual será titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas y de los bienes adquiridos, los que se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por la administradora con sus recursos propios y de las operaciones de otros fondos que administre.

Artículo 53.- **Custodia de instrumentos**. La administradora deberá encargar directamente a una empresa de depósito de valores regulada por la ley N° 18.876, el depósito de aquellos instrumentos que sean susceptibles de ser custodiados por ésta. La Superintendencia establecerá mediante norma de carácter general los instrumentos no susceptibles de ser custodiados por parte de las referidas empresas y podrá autorizar, en casos calificados, que todos o un porcentaje de los instrumentos del fondo sean mantenidos en depósito en otra institución. En el caso de los instrumentos extranjeros, la Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, la forma en que deberá llevarse la custodia y el depósito.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer requisitos y obligaciones adicionales a las señaladas en este artículo, para la custodia de los bienes e instrumentos del fondo.

Artículo 54.- **Cuentas Corrientes**. Las administradoras deberán mantener el dinero en efectivo de los fondos que administren en una o más cuentas corrientes bancarias a nombre de cada fondo o de los fondos en general. Dichas cuentas deberán ser distintas de las cuentas corrientes que tenga la administradora por cuenta propia.

Artículo 55.- **Inembargabilidad**. Los dineros, instrumentos y bienes que, en conformidad a este artículo, mantengan las administradoras por cuenta del o los fondos que administren serán inembargables para todos los efectos legales, salvo que se trate de obligaciones propias del fondo o garantizadas por éste.

Artículo 56.- **Inversión de los recursos del fondo**. Sin perjuicio de las cantidades que mantengan en dinero efectivo o moneda extranjera, la inversión de los recursos del fondo podrá efectuarse en todo tipo de instrumentos, contratos o bienes, o certificados representativos de éstos, que cumplan con los requisitos generales y formales que establezca la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

En todo caso, las operaciones de cambios internacionales que realicen los fondos se regirán por las disposiciones contenidas en el Párrafo Octavo, del Título III, del artículo primero de la ley N° 18.840. Esta disposición se aplicará también a los Fondos Privados a que se refiere el Capítulo V de esta ley.

Los fondos dirigidos a inversionistas calificados, podrán invertir sus recursos en instrumentos, bienes o contratos que no cumplan con los

requisitos que establezca la Superintendencia, en la medida que contemplen esa facultad en su reglamento interno, que la inversión en ellos no esté expresamente prohibida por la Superintendencia y que su forma de valorización esté contenida en el reglamento interno, de conformidad con los términos y condiciones que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

No obstante lo señalado en los incisos precedentes, la inversión de los fondos siempre deberá efectuarse en instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en el reglamento interno del fondo y el reglamento general de fondos de la administradora.

Será responsabilidad de la administradora velar porque las inversiones del fondo le permitan cumplir a cabalidad las obligaciones que le imponen los reglamentos internos y el reglamento general de fondos, en especial las normas de rescatabilidad del fondo, siendo civilmente responsable por los perjuicios que ocasionare al fondo o a los partícipes por sus actuaciones u omisiones.

Artículo 57.- **Inversiones y Actividades Prohibidas**. Los fondos regulados en los Capítulos III y V del Título I de esta ley no podrán invertir directamente en bienes raíces corporales e incorporales, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase; ni podrán desarrollar directamente actividades industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes de cualquier tipo, de intermediación, de seguro o reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del fondo y en general de cualquier actividad desarrollada directamente por éste distinta a la de inversión.

Artículo 58.- **Inversiones en personas relacionadas**. Salvo las excepciones contenidas en la presente ley, el fondo no podrá invertir en cuotas de fondos administrados por su administradora o por una administradora de su grupo empresarial según dicho concepto es definido en la ley N° 18.045, en acciones emitidas por sociedades administradoras de fondos ni en instrumentos, contratos o bienes, emitidos, garantizados o de propiedad de personas relacionadas a la administradora.

En el evento que un determinado emisor en el cual el fondo mantiene inversiones, por razones ajenas a la administradora, pase a ser persona relacionada a la misma, dicha sociedad deberá informar al Comité de Vigilancia, si lo tuviere, y a la Superintendencia al día siguiente hábil de ocurrido el hecho. La regularización de la situación mencionada deberá efectuarse dentro del plazo de 24 meses, contado desde que ésta se produjo.

Para los efectos de este artículo y de las demás disposiciones relativas a inversiones en personas relacionadas o en instrumentos emitidos o garantizados por ella de la presente ley o del Reglamento, no se

considerará como persona relacionada a la administradora, la que adquiera dicha condición como consecuencia de la inversión en ella de los recursos del fondo.

Artículo 59.- **Límites en las inversiones**. Los fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados, en ningún caso podrán:

a) Invertir más del 50% de su activo en valores que no tengan los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Superintendencia mediante norma de carácter general;

b) Poseer más del 25% del capital suscrito y pagado o del activo de un emisor, o de la deuda del Estado de Chile o de un Estado extranjero;

c) Invertir más de un 20% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad, con la excepción de: (a) cuotas de un fondo extranjero o cuando el emisor o garante sea el Estado de Chile o un Estado extranjero con clasificación de riesgo de su deuda soberana equivalente o superior a la de Chile; y (b) cuotas de un fondo nacional o en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la ley Nº 18.045, en cuyo caso el límite máximo será de un 25%;

d) Invertir más de un 30% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial;

e) Controlar, directa o indirectamente, a un emisor de valores;

f) Invertir en instrumentos en que inviertan otros fondos administrados por la misma administradora del fondo u otra administradora de su mismo grupo empresarial y que a consecuencia de la inversión de éste, se superen, en conjunto, los porcentajes señalados en este artículo, y

g) Contraer deudas por más del 20% del patrimonio del fondo. La Superintendencia por norma de carácter general establecerá qué se considerará como deuda para efectos de este límite.

Artículo 60.- **Excesos de inversión**. Los excesos que se produjeren respecto de los límites establecidos en el artículo anterior, o en el reglamento interno del fondo respectivo, cuando se deban a causas imputables a la administradora, deberán ser subsanados en un plazo que no podrá superar los 30 días de ocurrido el exceso. Cuando dichos excesos se produjeren por causas ajenas a la administración, la Superintendencia establecerá mediante norma de carácter general las condiciones y los plazos en que deberá procederse a la regularización de las inversiones, sin que el plazo que fije pueda exceder de doce meses contados desde la fecha en que se produzca el exceso.

Artículo 61.- **Requisitos para invertir en cuotas de fondos administrados por la misma administradora o personas relacionadas**. Los recursos de un fondo podrán ser invertidos en cuotas de fondos

gestionados por la misma administradora o por una del grupo empresarial de ésta, sólo si se cumplen las siguientes condiciones copulativas:

a) el reglamento interno del fondo así lo permita expresamente;

b) la política de inversión, liquidez, diversificación y endeudamiento, normas de rescatabilidad, participación en juntas y asambleas, y demás contenidas en el reglamento de los fondos en que se efectuará la inversión es consistente con la del respectivo fondo;

c) se establezca en el reglamento interno del fondo, un porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones, como porcentaje del activo del mismo, que podrá ser cargado a éste por la gestión e inversión directa e indirecta de sus recursos en tales fondos;

d) Si el fondo no es dirigido a inversionistas calificados, que la inversión sea en fondos fiscalizados por la Superintendencia, y

e) No se trate de inversiones recíprocas entre ellos.

Artículo 62.- **Inversiones en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora**. Los recursos de un fondo podrán ser invertidos en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la administradora, sólo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) Sean acciones inscritas en bolsas nacionales o extranjeras, que cumplan con los requisitos de liquidez que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general;

b) Sean títulos de deuda con clasificación de riesgo equivalente o superior a aquélla que determine fundadamente la Superintendencia mediante norma de carácter general, o

c) Que el fondo esté dirigido a inversionistas calificados y el reglamento interno del mismo contemple expresamente esa posibilidad, con sus límites correspondientes.

Artículo 63.- **Inversión de recursos mínimos para el funcionamiento del fondo**. En caso que para el normal funcionamiento y cumplimiento del objetivo del fondo se requiera de la captación o mantención de una cantidad mínima de recursos, la administradora deberá velar porque la inversión de los recursos que se aporten a éste, mientras no se alcance ese mínimo, sean invertidos en instrumentos, bienes y contratos cuyas características y condiciones resguarden debidamente los intereses de los partícipes del fondo frente a la necesidad de liquidarlo ante la imposibilidad de lograr recursos suficientes.

Artículo 64.- **Constitución de sociedades**. Para el cumplimiento de sus objetivos de inversión, los fondos podrán concurrir a la constitución de sociedades.

Artículo 65.- **Concurrencia a Juntas de Accionistas**. Cuando así lo establezca la política de votación contenida en el reglamento interno del fondo, las administradoras, deberán concurrir a las Juntas de Accionistas, Asambleas de Aportantes o Juntas de Tenedores de Bonos de las entidades emisoras de los instrumentos que hayan sido adquiridos con recursos del fondo respectivo, representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, no pudiendo los gerentes ni los mandatarios especiales actuar con poderes distintos de aquellos que la administradora les confiera.

Artículo 66.- **Activos no afectos a gravámenes**. Los bienes y valores que integren el activo del fondo no podrán garantizar obligaciones de terceros ni estar afectos a gravámenes, prohibiciones, limitaciones al dominio o modalidades, salvo que sean para garantizar obligaciones propias del fondo. Sólo los fondos que cuenten con Asambleas de Aportantes podrán garantizar deudas de sociedades en las que tengan participación, siempre y cuando así lo acuerde la respectiva asamblea para cada caso y se ajuste a los límites que al efecto se establezcan en el reglamento interno.

Artículo 67.- **Fusión y división de fondos**. En caso que la presente ley no exija la participación de los aportantes para estos efectos, las administradoras podrán llevar a cabo la fusión o división de los fondos que administren o de sus series, conforme a los requisitos y procedimientos que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

§5. Del Comité de Vigilancia

Artículo 68.- **Comité de Vigilancia**. Los fondos no rescatables deberán contar con un Comité de Vigilancia.

Artículo 69.- **Composición y funcionamiento**. El Comité de Vigilancia estará compuesto por un número impar de representantes de los aportantes del fondo, los que serán elegidos en asamblea ordinaria y durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, y remunerados con cargo al fondo, según se determine en el reglamento interno. Dichos representantes no podrán ser personas relacionadas a la sociedad administradora del fondo.

Iniciada la operación de un fondo, la administradora procederá a designar un Comité de Vigilancia provisorio, que durará en sus funciones hasta la primera asamblea ordinaria de aportantes.

Artículo 70.- **Atribuciones**. Las atribuciones del Comité de Vigilancia serán:

a) Comprobar que la administradora cumpla lo dispuesto en el reglamento interno del fondo;

b) Verificar que la información para los aportantes sea veraz, suficiente y oportuna;

c) Constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del fondo se realicen de acuerdo con esta ley, al Reglamento y al reglamento interno del fondo. En caso que la mayoría de los miembros del Comité de Vigilancia determine que la administradora ha actuado en contravención a dichas normas, éste deberá solicitar, en un plazo no mayor a 15 días contados desde la fecha del acuerdo, se cite a una asamblea extraordinaria de aportantes, en la cual se informará de esta situación;

d) Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

e) Proponer a la asamblea extraordinaria de aportantes la sustitución de la administradora del fondo;

f) Requerir de la administradora la información respecto de la gestión de emisores en los cuales el fondo tiene el control, y

g) Las demás que establezca el reglamento interno.

Artículo 71.- **Deber de reserva**. Los miembros del Comité de Vigilancia están obligados a guardar reserva respecto de los negocios y de la información del fondo a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada por la administradora.

§6. De la Asamblea de Aportantes

Artículo 72.- **Asambleas de aportantes**. Los fondos no rescatables, deberán someter a asambleas ordinarias o extraordinarias, las materias señaladas en este Párrafo.

Las asambleas ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los primeros cinco meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento, sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación.

Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades del fondo, para pronunciarse respecto de cualquier materia que la ley o el reglamento interno del fondo entreguen al conocimiento de las asambleas de aportantes y siempre que tales materias se señalen en la citación.

Los acuerdos adoptados en asambleas de aportantes, así como los asistentes a éstas, deberán constar en actas. El contenido mínimo, formalidades y medios en que se llevarán las actas, serán definidos por el Reglamento.

Artículo 73.- **Materias de las Asambleas Ordinarias**. Son materias de la asamblea ordinaria de aportantes, las siguientes:

a) Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la sociedad administradora, relativa a la gestión y administración del fondo, y a los estados financieros correspondientes;

b) Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia;

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;

d) Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia, si correspondiere;

e) Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a las empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleva la Superintendencia, para que dictaminen sobre el fondo;

f) Designar al o los peritos o valorizadores independientes que de acuerdo con la reglamentación se requieran para valorizar las inversiones del Fondo, y

g) En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria.

Artículo 74.- **Materias de las Asambleas Extraordinarias**. Son materias de la asamblea extraordinaria de aportantes, las siguientes:

a) Aprobar las modificaciones que proponga la administradora al reglamento interno del fondo;

b) Acordar la sustitución de la administradora;

c) Tomar conocimiento de cualquier situación que pueda afectar los intereses de los aportantes;

d) Acordar los aumentos y disminuciones de capital, en aquellos casos en que el reglamento interno requiera que esta materia deba ser aprobada por asamblea y salvo en aquellos casos en que esta ley contemple que ellos se producen automáticamente y de pleno derecho. En todo caso, las disminuciones de capital deberán realizarse a prorrata, según la participación que cada aportante tenga en el fondo. En caso que la disminución sea mediante una disminución del número de cuotas, una vez determinado el número de cuotas a disminuir, los aportantes podrán pactar entre sí un sistema de distribución distinto de la proporción que a cada uno le corresponda en tales cuotas, el que no podrá alterar el monto total a disminuir y deberá sujetarse a la forma que determine el Reglamento;

e) Acordar la división y fusión con otros fondos o series;

f) Acordar la disolución anticipada del fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones deberes y remuneraciones, y aprobar la cuenta final al término de la liquidación;

g) Aprobar la creación de series de cuotas así como las modificaciones a las características de las ya existentes, y

h) Los demás asuntos que, por el Reglamento o por el reglamento interno del fondo, corresponden a su conocimiento.

En los casos señalados en las letras b) y f) anteriores y cuando el reemplazo o liquidación no hayan provenido de causas imputables a la administradora, el reglamento interno podrá establecer el pago de una indemnización a la administradora por los perjuicios irrogados a ésta, por un monto o porcentaje preestablecido.

Artículo 75.- **Convocatoria**. Las asambleas extraordinarias serán convocadas por la administradora cuando lo estime conveniente o cuando así lo solicite el Comité de Vigilancia o los aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las cuotas emitidas con derecho a voto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia podrá convocar directamente, o a través de la administradora, a asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes, según sea el caso.

Las asambleas convocadas en virtud de la solicitud de aportantes, del Comité de Vigilancia o de la Superintendencia, deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.

En todo caso, podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas asambleas de aportantes a las que concurran la totalidad de las cuotas suscritas con derecho a voto, aun cuando no se hubieran cumplido las formalidades requeridas para su citación.

Artículo 76.- **Quórums de constitución y acuerdo**. Las asambleas se constituirán, en primera citación, salvo que la ley o el reglamento interno establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las cuotas emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número.

Los acuerdos relativos a las materias de las asambleas ordinarias o extraordinarias de aportantes requerirán del voto conforme de la mayoría absoluta de las cuotas presentes o representadas con derecho a voto, salvo en aquellas materias indicadas en las letras b), e) y f) del artículo 74, las que requerirán el voto conforme de las dos terceras partes de las cuotas emitidas con derecho a voto.

No podrán someterse a votación materias que no hayan sido expresamente señaladas en la citación a asamblea extraordinaria de

aportantes, salvo que así lo acordare la unanimidad de las cuotas emitidas con derecho a voto.

Artículo 77.- **Aportantes que pueden participar en las Asambleas**. En las asambleas podrán participar los aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva asamblea. Cada cuota dará derecho a voto en forma proporcional a los derechos sobre el patrimonio del fondo que cada una representa. No podrán existir series de cuotas preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado.

Artículo 78.- **Citación a Asambleas**. La citación a asamblea de aportantes se efectuará en la forma, oportunidad y por los medios que al efecto establezca la Superintendencia, mediante norma de carácter general.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior no afectará la validez de la citación, pero los directores de la sociedad administradora responderán de los perjuicios que causaren a los aportantes, no obstante las sanciones administrativas que la Superintendencia pueda aplicarles.

Artículo 79.- **Representación y votación en Asambleas**. Los aportantes podrán hacerse representar en las asambleas por medio de otra persona, aunque ésta no sea aportante. El Reglamento establecerá las formalidades que cumplirá el poder para la representación de cuotas en las asambleas y las normas para la calificación.

Las administradoras de fondos autorizadas por ley, para concurrir por los fondos que administren a las asambleas de aportantes, deberán estar representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, no pudiendo los gerentes o mandatarios actuar con poderes distintos a los conferidos por su respectiva entidad.

La Superintendencia podrá autorizar que las administradoras de fondos adopten, para fines de votación en las asambleas de aportantes, mecanismos de votación a distancia que permitan comprobar la identidad de la persona que participa en la asamblea.

CAPITULO IV

De los Dividendos, Beneficios y de la Tributación

Artículo 80.- **Dividendos**. Los fondos de inversión distribuirán anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, debiendo quedar establecidas en el reglamento interno las demás características de sus políticas al respecto. Cualquier disposición del reglamento interno o acuerdo de la Asamblea de Aportantes que sean contrarios a lo dispuesto en este inciso, no producirán efecto alguno, debiendo la sociedad administradora cumplir en todo caso con el referido deber de distribución. Cuando el reglamento interno establezca el deber de distribuir dividendos por un

porcentaje superior al fijado en este artículo, la sociedad administradora deberá distribuirlos de acuerdo a dicho porcentaje superior.

Para estos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual, ello sin perjuicio que el fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a tales resultados, cuando ello se encuentre autorizado por el reglamento interno. En este último caso, el reglamento interno podrá autorizar que en caso que el monto de los dividendos provisorios exceda el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, puedan imputarse a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

Los dividendos devengados que la sociedad administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los aportantes, dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo y devengará intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la sociedad administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de dicha ley.

Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el Registro de Aportantes que deberá llevar la administradora. Los dividendos deberán pagarse en dinero, salvo que el reglamento interno establezca la opción a los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo fondo, ello representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18 inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Artículo 81.- **Tratamiento tributario para Fondos**.

1.- Fondos de inversión:

a) Los fondos de inversión y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidas por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo de inversión que administre, a llevar el registro del Fondo de Utilidades

Tributables y del Fondo de Utilidades no Tributables, para los efectos señalados en la letra f) siguiente.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo de inversión, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo de inversión, los rescates y enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo, y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos de inversión que administre. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

d) Será aplicable al fondo de inversión el tratamiento tributario previsto en el inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, únicamente sobre los siguientes desembolsos, operaciones o cantidades representativas de éstos:

(i) aquellos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley permite efectuar al fondo de inversión;

(ii) los préstamos que los fondos de inversión efectúen a sus aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional;

(iii) el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que beneficie a uno o más aportantes, contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, su cónyuge o hijos no emancipados legalmente de éstos, de los bienes del activo del fondo de inversión;

(iv) la entrega de bienes del fondo de inversión en garantía de obligaciones, directas o indirectas, de los aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, y

(v) las diferencias de valor que se determinen por aplicación de la facultad de tasación ejercida conforme a la letra e) literal (i) de este artículo.

Tratándose de los desembolsos referidos en los numerales i) y v) anteriores, el pago del impuesto establecido en el inciso anterior será de responsabilidad de la administradora, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el fondo de inversión respectivo.

Por su parte, cuando los desembolsos u operaciones señaladas en los literales (ii), (iii) y (iv) anteriores, hayan beneficiado a uno o más aportantes contribuyentes del impuesto global complementario o adicional, se aplicará sólo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo tales aportantes los responsables del pago del impuesto y

no la administradora. Se entenderá que han beneficiado a un aportante, cuando hayan beneficiado a su cónyuge, a sus hijos no emancipados legalmente o a cualquier otra persona o entidad relacionada con aquél. Cuando dichas cantidades beneficien a dos o más aportantes en forma simultánea y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos, se afectarán con la tributación indicada, en proporción al valor de las cuotas que poseen cada uno de ellos. Tratándose de las cantidades señaladas en el literal (i) y (iv), éstas se rebajarán del Fondo de Utilidades Tributables respectivo en el ejercicio en que ocurra el desembolso, o bien, la ejecución de la garantía, según corresponda.

e) El Servicio de Impuestos Internos podrá fundadamente ejercer la facultad de tasación establecida en los artículos 17, número 8, inciso 5° de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en las siguientes operaciones cuando resulten notoriamente superiores o inferiores, según corresponda, al valor corriente en plaza o de los que se cobren normalmente en convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación: (i) enajenación de activos del fondo de inversión efectuada a sus aportantes o a terceros y distribución de cantidades a sus aportantes efectuada en especie, con ocasión del rescate de las cuotas de un fondo de inversión, la disminución de su capital o en pago de dividendos, y (ii) aportes en especie efectuados a fondos de inversión o enajenación de bienes o activos a dichos fondos, en cuyo caso las diferencias de valor determinadas al aportante o enajenante se afectarán con los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resulten aplicables a la operación respectiva.

No procederá la facultad de tasar en los casos de división o fusión de fondos de inversión y se mantendrá para efectos tributarios el valor de los activos y pasivos existentes en forma previa a dichas operaciones en los fondos de inversión fusionados o divididos. En los casos de fusión o transformación de fondos de inversión, los beneficios netos y las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables y No Tributables se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o el resultante, debiéndose mantener tal registro, aun cuando éste sea un fondo mutuo. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de inversión como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos de inversión, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo de inversión dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

f) En el Fondo de Utilidades Tributables referido en la letra b) anterior, se anotarán todas las rentas o cantidades recibidas de terceros por el fondo de inversión producto de las inversiones que este haya realizado, ya sea a título de participaciones sociales, dividendos u otras cantidades que se perciban, con indicación del Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a dichas sumas, para los efectos de asignar posteriormente el

crédito que corresponda. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

Separadamente, en el Fondo de Utilidades No Tributables también referido en la letra b) anterior, se anotarán las cantidades recibidas de terceros que, conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del Impuesto Global Complementario.

2.- Fondos mutuos:

a) Los fondos mutuos y sus administradoras, estarán sujetos únicamente al régimen tributario establecido en esta ley, respecto de los beneficios, rentas y cantidades obtenidos por las inversiones del fondo.

b) La administradora estará obligada, respecto de cada fondo mutuo que administre, a mantener un registro de los dividendos recibidos por éstos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos a los Impuestos Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos. Las anotaciones se efectuarán conforme al orden cronológico de percepción de dichas cantidades.

c) La administradora será responsable de practicar y enterar las retenciones de impuestos que correspondan por las operaciones del fondo mutuo, en conformidad a los artículos 74 y 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, la administradora deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste establezca mediante resolución, los siguientes antecedentes: (i) individualización de los aportantes, con indicación de su nombre o razón social y Rol Único Tributario, el monto de sus aportes, el número de cuotas y porcentaje de participación que les corresponden en el patrimonio del fondo mutuo, los rescates las enajenaciones de cuotas que efectúen en el ejercicio respectivo, y (ii) las distribuciones que efectúen, y los créditos asociados a éstas, así como las retenciones de impuesto que practique, por cada uno de los fondos mutuos que administre. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97° Nº1 del Código Tributario.

En los casos de fusión o transformación de fondos mutuos, los beneficios netos y las cantidades registradas conforme a la letra b) anterior se entenderán reinvertidas en el fondo absorbente, que nace con motivo de la fusión o resultante de la transformación, aun cuando éste sea un fondo de inversión, debiéndose mantener tal registro. El posterior reparto de dichas cantidades, comenzando por las más antiguas anotadas en los registros contables respectivos y considerándose para estos efectos que las recibidas con ocasión de la fusión se perciben en el momento de la fusión, se afectarán con la tributación aplicable a los aportantes de los fondos de mutuos como si la fusión o transformación no se hubiere efectuado. Tratándose de la división de fondos mutuos, dichas cantidades y los créditos respectivos, se asignarán conforme se distribuya el patrimonio del fondo mutuo dividido, debiéndose mantener el registro en cada fondo.

En lo no previsto en este artículo se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que se deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.
.

Artículo 82.- **Tratamiento tributario para los aportantes**. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los aportantes de fondos regidos por esta ley se sujetarán únicamente al tratamiento tributario indicado a continuación:

1.- De un fondo de inversión:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile

i) Dividendos distribuidos por el fondo de inversión. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión, se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituida en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, observándose para efectos de su imputación, lo dispuesto en el artículo 14 A), número 3, letra d) de la Ley sobre Impuestos a la Renta; con derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría a que se refieren los artículos 56, número 3) ó 63, de la misma ley, únicamente respecto de las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión y con tal que ellas se hayan afectado con el referido tributo. No constituirá renta, la parte de los dividendos que provenga de ingresos recibidos de terceros por el fondo de inversión y que tengan dicha calidad conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, las rentas recibidas de terceros por el fondo de inversión que constituyan rentas exentas del impuesto global complementario conforme a las definiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conservarán en su distribución dicho carácter y se aplicará lo dispuesto en el número 3, del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

En los casos del inciso anterior, será obligación de la administradora determinar si los beneficios distribuidos corresponden a cantidades tributables, no tributables o exentas según corresponda y asimismo tratándose de la devolución de capital o rescate en su caso, así como el crédito por impuesto de Primera Categoría a que se tenga derecho conforme

a las reglas anteriores, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo de inversión. Las cuotas de participación de los fondos de inversión y su enajenación o rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, e incluyendo el rescate en que parte de las cuotas son adquiridas por el mismo fondo con ocasión de una disminución de capital, tendrán el mismo tratamiento tributario que contempla la Ley sobre Impuesto a la Renta para la enajenación de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo de inversión, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Los contribuyentes que no se encuentren obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad, se encontrarán exentos del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sobre el mayor valor que obtengan en la enajenación o rescate de las cuotas del fondo de inversión. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) La remesa, distribución, pago, abono en cuenta o puesta disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo de inversión a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho al crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro respectivo. No obstante lo anterior, tratándose de la distribución de dividendos, cuando éstos correspondan a ingresos no constitutivos de renta o rentas exentas del impuesto adicional recibidos de terceros por el fondo de inversión y sujetos al orden de imputación establecido en el artículo 14 letra A) número 3 letra d) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, quedarán liberados de la referida tributación. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo de inversión y sus reajustes, o su rescate con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, no se afectarán con la referida tributación y dichas operaciones se sujetarán al orden de imputación establecido en el artículo 17 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Tratándose de la enajenación de las cuotas del fondo de inversión o su rescate, cuando éste no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único del literal i) anterior y dicho mayor valor corresponderá a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. Para los efectos de

este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

Cuando se trate de cantidades distribuidas por el fondo de inversión o del mayor valor en el rescate de las cuotas del mismo, el impuesto único señalado precedentemente será retenido por la sociedad administradora cuando dichas cantidades sean remesadas al exterior, se distribuyan, se paguen, se abonen en cuenta o se pongan a disposición. Cuando se trate de la enajenación de las cuotas del fondo, el adquirente deberá retener este impuesto en la misma oportunidad señalada, retención que se practicará con una tasa provisional de 5% sobre el precio de enajenación sin deducción alguna, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto al impuesto único de esta letra, en cuyo caso, dicha retención se practicará con la tasa del 10%.

Las retenciones practicadas conforme a esta letra se enterarán en arcas fiscales en el plazo establecido en la primera parte del artículo 79 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Procederá además lo dispuesto en el artículo 83 y en lo que fuere aplicable el artículo 74 N° 4 de la misma ley.

iii) Sin perjuicio de su registro en el Fondo de Utilidades Tributables según se indica en el inciso siguiente, no se gravará con el impuesto único de esta letra la distribución de los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumple con las siguientes condiciones copulativas a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile:

a) que en el año comercial respectivo, al menos durante 300 días, continuos o discontinuos, el 80% de la cartera del fondo de inversión esté conformada por la inversión en:

1.- instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero por personas sin domicilio ni residencia en Chile o en certificados que sean representativos de tales instrumentos, títulos o valores;

2.- bienes situados en el extranjero o en instrumentos, títulos, valores o certificados que sean representativos de tales bienes;

3.- contratos de derivados y otros de similar naturaleza que cumplan los requisitos que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Tratándose de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos a que se refieren los números 1 y 3 anteriores, ellos no podrán tener como activos subyacentes o referirse a bienes situados o a actividades desarrolladas en Chile, ni ser representativos de títulos o valores emitidos en el país, y

b) que la política de inversión fijada en su reglamento interno sea coherente con la letra a) de este literal.

Los beneficios netos que se determinen durante el año comercial en que el fondo de inversión cumpla con las condiciones copulativas señaladas, se anotarán separadamente en el Fondo de Utilidades Tributables y se sujetarán al orden de imputación establecido en el literal i) anterior, pero el crédito establecido en el artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en la parte que corresponda a la distribución de beneficios no gravados conforme a este literal a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, no dará derecho a su imputación contra impuesto alguno, ni a su devolución, debiendo rebajarse, en dicha proporción, del registro establecido en el artículo 14 del referido texto legal.

Para los efectos de este literal, se entenderá que se efectúa una distribución de beneficios netos, en los mismos casos y bajo las mismas condiciones descritas en el literal i) anterior.

Cuando el fondo no diera cumplimiento durante el año comercial respectivo a las condiciones copulativas señaladas, la distribución de los beneficios netos determinados en dicho año al fondo de inversión, sea que se distribuyan en tal período o en otros posteriores, quedará sujeto a la tributación establecida en el literal i) anterior cuando sea distribuida a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

Tampoco se gravará con el impuesto único de esta letra, el mayor valor obtenido por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile en la enajenación de cuotas o su rescate, salvo que éstas se efectuaren con ocasión de la liquidación del fondo de inversión, siempre y cuando éstos cumplan los requisitos copulativos señalados, en el año comercial en que ocurre la enajenación y en los 2 años comerciales inmediatamente anteriores a éste. En caso que el fondo tuviera una existencia inferior a dicho plazo, deberá cumplir con los requisitos copulativos durante cada año comercial en que haya existido, salvo que corresponda al mayor valor de cuotas de un fondo nacido con ocasión de la división de otro fondo o que provengan de la fusión de dos o más de ellos, en cuyo caso será necesario además que el fondo dividido o el o los fondos fusionados en su caso, cumplan con los requisitos copulativos señalados, de forma tal que en el año de la enajenación y en los dos años comerciales inmediatamente anteriores se cumpla con las condiciones copulativas señaladas, siempre que los fondos divididos o fusionados hayan tenido existencia durante esos dos años. Cuando el fondo no diera cumplimiento durante los años comerciales respectivos a las condiciones copulativas señaladas, el mayor valor se sujetará a la tributación establecida en el literal i) anterior.

Tratándose de contribuyentes sin residencia ni domicilio en el país que no fueren personas naturales, no podrán gozar del tratamiento tributario establecido en esta letra, en caso que dichos contribuyentes tengan, en forma directa o indirecta, como socio, accionista, titular o beneficiario de su capital o de sus utilidades, a algún residente o domiciliado en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades del mismo. En este caso, dichos contribuyentes se gravarán con el Impuesto Adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta con derecho a deducir el crédito establecido en el artículo 63 de la referida ley, conforme a las reglas contenidas en la letra A) anterior, literales i) y ii) y por las rentas allí

indicadas, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago de dicho impuesto contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La administradora deberá presentar anualmente una declaración al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste establezca mediante resolución, en la cual deberá individualizar a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, declarando que no cuentan con socios, accionistas, titulares o beneficiarios en Chile, con el porcentaje señalado precedentemente, declaración sin la cual se presumirá que no cumplen con el requisito señalado, no pudiendo, por tanto, gozar de la liberación referida.

Las administradoras de fondos de inversión deberán anualmente informar al Servicio de Impuestos Internos, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, en la forma y plazo que fije dicho Servicio mediante resolución. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº 1 del Código Tributario.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

2.- De un fondo mutuo:

A) Contribuyentes con domicilio o residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. El reparto de toda cantidad proveniente de las inversiones de un fondo mutuo se considerará como un dividendo de acciones de sociedades anónimas constituidas en el país, afecto al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, el cual se imputará en primer término a los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas anotados en el registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley, según su antigüedad y comenzando por las más antiguas, otorgándose el crédito establecido en los artículos 56 N° 3 o 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que haya afectado a los citados dividendos. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectarán con la referida tributación, pero éste se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.

Será obligación de la administradora informar el crédito a que tengan derecho, poniendo a disposición de los aportantes los certificados que correspondan dentro de los plazos que permitan por parte de éstos el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Conforme a lo señalado en el inciso primero de este artículo, las cuotas de participación de

los fondos mutuos y su enajenación o rescate, se sujetarán al tratamiento tributario establecido en los artículos 57, 57 bis, 107, 108 y 109 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda. El mayor valor que se obtenga en la enajenación o rescate señalado de las cuotas del fondo mutuo, corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de la cuota y el valor de enajenación o rescate de la misma, determinado conforme a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, según corresponda, considerándose como una renta del N° 2, del artículo 20 de la referida ley. Para los efectos de este literal, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

B) Contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

i) Dividendos distribuidos por el fondo mutuo. La remesa, distribución, pago, abono en cuenta, o puesta a disposición de toda cantidad proveniente de las inversiones del fondo mutuo a estos contribuyentes, estará afecta a un impuesto único a la renta del 10%, sin derecho a crédito por Impuesto de Primera Categoría, el cual, sin embargo, igualmente se rebajará del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 de esta ley. Se imputarán en primer término al registro establecido, según la antigüedad en que tales cantidades hayan sido percibidas, comenzando por las más antiguas. Tratándose de la devolución total o parcial del capital aportado al fondo mutuo y sus reajustes, no se afectará con la referida tributación y dicho capital se entenderá repartido sólo una vez que se haya distribuido el total de beneficios netos del fondo mutuo, según se define en el artículo 80 de esta ley.

Para estos efectos se considerarán como utilidades financieras los beneficios netos que se determinen de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 80 de esta ley.

ii) Enajenación o rescate de cuotas del fondo mutuo. Tratándose de la enajenación de las cuotas de participación de fondos mutuos o su rescate, el mayor valor obtenido estará también afecto al impuesto único señalado en el literal i) anterior, siendo aplicable las normas de determinación de dicho mayor valor contenidas en el literal ii) de la letra B) del número 1.- de este artículo y, asimismo, las normas del inciso segundo y tercero de dicho literal, respecto de la responsabilidad de retención del impuesto único por la administradora. Se aplicará también para los efectos de este literal, lo dispuesto en el inciso final del artículo 80 de esta ley.

iii) Será también aplicable a los contribuyentes sin domicilio y residencia en Chile aportantes en fondos mutuos, la liberación a los dividendos y mayor valor del impuesto único, establecida en el literal iii), letra B) del número 1.- de este artículo, siendo aplicable los mismos requisitos y reglas allí establecidos para los fondos de inversión, esto es, incisos primero a tercero e inciso quinto de dicho literal iii). Asimismo, son aplicables las reglas de tributación contenidas en el inciso cuarto de dicho literal referidas al caso en que se dejen de cumplir por el fondo los requisitos copulativos señalados y también, los incisos sexto y séptimos, referidos a la prohibición de gozar de la liberación del impuesto único, aplicable a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, que no sean personas naturales, en los

cuales participan directa o indirectamente en un 5% o más algún residente o domiciliado en Chile.

En lo no previsto en este artículo, se aplicarán todas las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y del Código Tributario, que se relacionan con la determinación, declaración y pago del impuesto, así como con las sanciones por la no declaración o pago oportuno de los impuestos que corresponden o por la no presentación de las declaraciones juradas o informes que deban presentar, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del Código Tributario.

Artículo 83.- **Remuneraciones de la administradora**. Las remuneraciones que las sociedades administradoras cobren por la gestión de los recursos aportados al amparo de la ley Nº 19.281, estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado contenido en el decreto ley Nº 825, de 1974.

Por su parte, las remuneraciones por los servicios de administración que las sociedades administradoras cobren por la gestión del respectivo fondo, en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile sea o no que pertenezcan a una serie que las identifique como tales, estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado establecido en el decreto ley Nº 825, de 1974. No obstante, en este caso, la administradora conservará su derecho al uso como crédito fiscal del referido impuesto soportado o pagado en las adquisiciones de bienes o servicios utilizados para llevar a cabo dicha gestión, sin que resulten aplicables las disposiciones de esa ley o de su reglamento que obligan a la determinación de un crédito fiscal proporcional cuando existan operaciones exentas o no gravadas.

Para aquellos períodos mensuales en que aportantes con y sin domicilio o residencia en Chile posean cuotas de una misma serie, la administradora cobrará su remuneración para esa serie afectándola con Impuesto al Valor Agregado con respecto a la totalidad de los activos administrados en ésta. Aquella parte del Impuesto al Valor Agregado enterado respecto a la remuneración exenta de dicho impuesto conforme a lo señalado en el inciso anterior, constituirá para la administradora crédito fiscal de dicho impuesto correspondiente al periodo en que hubiere efectivamente restituido dicha suma a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile. Para determinar el monto exento del Impuesto al Valor Agregado, la remuneración total cobrada por la administradora en el período respectivo, deberá expresarse en su valor equivalente a la remuneración diaria y multiplicarse por el número de días en que los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile poseyeron las cuotas del fondo que se enajenan, en la proporción que tales cuotas tienen en el total del patrimonio administrado durante dicho periodo.

El período dentro del cual la administradora deberá restituir el Impuesto al Valor Agregado recargado a los aportantes sin domicilio ni residencia en Chile, será hasta el mes de enero del año siguiente al cual corresponda la remuneración en que dicho impuesto fue recargado. En caso

de no restituir dentro del plazo señalado, perderá la administradora el derecho al crédito fiscal establecido en el inciso anterior.

La administradora deberá presentar, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, una declaración anual informando el monto y cálculo de la remuneración exenta, individualización del beneficiario del servicio, período que comprende el cobro de la remuneración respecto de los servicios exentos de conformidad a este artículo. El retardo o la omisión de la entrega de la información señalada, será sancionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 97°, Nº1 del Código Tributario, aplicándose al efecto el procedimiento de reclamación contemplado en el artículo 165 del mismo Código.

CAPITULO V

De los Fondos de Inversión Privados

Artículo 84.- **Definición**. Los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia, no quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia y se entenderán para los efectos de esta ley como fondos privados.

Artículo 85.- **Normativa aplicable**. Salvo disposición expresa en contrario, los fondos privados se regirán exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos internos y por las normas de este Capítulo, no quedando sujetos a las normas de los Capítulos precedentes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 57 y 80. Asimismo, estos fondos privados no podrán invertir en aquellos activos que el Reglamento haya expresamente prohibido para la inversión de los recursos de este tipo de fondos.

Artículo 86.- **Tratamiento tributario**.

A) Tratamiento tributario para fondos de inversión privados. Se les aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 81 de esta ley para fondos de inversión, debiendo, además, la administradora solicitar la incorporación en el Rol Único Tributario a cada fondo que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de ellos.

Los intereses percibidos o devengados por el fondo, originados en préstamos efectuados con todo o parte de sus recursos a personas relacionadas con alguno de sus aportantes, en la parte que excedan de lo pactado en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, se gravarán, sin deducción alguna, con la tasa del Impuesto de Primera Categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, impuesto que será de cargo de la administradora del fondo, sin perjuicio de su derecho a repetir contra éste. El Servicio de Impuestos Internos deberá determinar en forma fundada la parte excesiva del interés pactado, no pudiendo ejercer dicha facultad si la tasa de de interés convenida es igual o inferior a la tasa de interés corriente

vigente en el período y al tipo de operación de que se trate, aumentada un 10%.

B) Tratamiento tributario para los aportantes. Sean éstos domiciliados o residentes en el país o en el extranjero, tributarán conforme a las reglas contenidas en la letra A), N° 1.- del artículo 82 de esta ley, respecto de las rentas allí señaladas. Tratándose de los aportantes sin domicilio ni residencia en el país, se gravarán con el impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta, considerándose como contribuyentes del N° 2, del artículo 58 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aplicándose las normas sobre retención, declaración y pago del impuesto referido contenidas en los artículos 74 número 4, 79 y 83 de dicha ley, aplicando al efecto el crédito por impuesto de primera categoría establecido en el artículo 63 de la misma ley, cuando corresponda.

Artículo 87.- **Auditoría**. Los fondos serán auditados anualmente por empresas de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la Superintendencia.

Artículo 88.- **Operaciones con otros fondos**. Los fondos a que se refiere este Título, no podrán realizar transacciones u operaciones con aquellos regulados por los Títulos anteriores, salvo que sean administrados por sociedades que no sean relacionadas entre sí.

Artículo 89.- **Aplicabilidad de normas, adecuación del reglamento y estatutos**. Cuando dejen de cumplir la condición establecida en el artículo 84 anterior, los fondos privados y sus administradoras quedarán sujetos a todas las disposiciones contenidas en la presente ley aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la Superintendencia, debiendo comunicar este hecho a dicha entidad al día siguiente hábil de ocurrido éste.

El reglamento interno del fondo deberá adecuarse dentro de los 60 días contados desde ocurrida dicha circunstancia. En el mismo plazo indicado y cuando el fondo fuese administrado por una sociedad anónima cerrada, ésta deberá ajustar sus estatutos para efectos de transformarse en una sociedad anónima especial y solicitar a la Superintendencia la autorización de existencia señalada en los artículos 3° y 4° del ARTÍCULO PRIMERO de la presente ley.

Artículo 90.- **La administradora**. Los fondos privados podrán ser administrados por las administradoras de fondos fiscalizados por la Superintendencia a que se refiere esta ley, o por sociedades anónimas cerradas.

En el nombre de esas sociedades anónimas cerradas y en cualquier documentación que emitan, no podrán utilizar la expresión “administradora general de fondos”.

Artículo 91.- **Máximo de cuotas en manos de la administradora**. Después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo privado, ni la administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más de un 25% del patrimonio del fondo privado por ella administrado.

Artículo 92.- **Mínimo de aportantes**. Después de transcurrido un año contado desde la creación del fondo, éste deberá tener al menos dos aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos tener menos de un 10% de las cuotas suscritas del fondo privado. Esta última restricción del 10% no aplicará en caso que el fondo privado tenga 5 o más aportantes no relacionados entre sí.

En caso de que el Servicio de Impuestos Internos detectare que un fondo de inversión privado infringe lo dispuesto en el artículo 91 y lo señalado en el inciso precedente, notificará del hecho a la administradora del fondo en cuestión, en cuyo caso ésta dispondrá de un plazo de 6 meses contado desde la respectiva notificación para regularizar su situación. Si ello no ocurriere, el fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes como accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del 1° de enero del año siguiente a aquel en que venza el plazo de seis meses señalado, tributando el respectivo fondo de inversión privado, en consecuencia, en la misma forma y oportunidad que establece la ley respecto de esas sociedades.

Artículo 93.- **No Oferta Pública**. No podrá hacerse oferta pública de las cuotas de fondos privados ni se podrá hacer publicidad o promocionar públicamente el servicio de administración de fondos privados. Tampoco se podrá promocionar públicamente información respecto de la rentabilidad o inversiones que se obtengan o realicen este tipo de fondos.

En cualquier tipo de comunicación o información que emitan administradoras de fondos privados, deberá necesariamente señalarse que se trata de fondos no regulados y no fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Artículo 94.- **Información a la Superintendencia**. La administradora deberá presentar a la Superintendencia, en la forma y plazos que ésta determine, la siguiente información referida a los fondos de inversión privados que administre:

a) Identificación del fondo y de los partícipes de éste;

b) Monto de los aportes, y

c) Valor de los activos.

La Superintendencia podrá requerir toda la demás información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a ésta.

Título II

DE LA GESTION INDIVIDUAL DE RECURSOS

Artículo 95.- **La administración de cartera**. La administración de recursos de personas y entidades para su inversión en contratos, instrumentos o productos financieros, que se realice de manera habitual para 50 o más entidades que no sean integrantes de una misma familia, en adelante “administración de cartera”, se regirá por lo dispuesto en este Título y por las cláusulas contenidas en el contrato de administración, en adelante “el mandato”, que deberán suscribir el administrador de los recursos, en adelante “el mandatario”, y el propietario de los recursos que serán gestionados, en adelante “el mandante”.

Artículo 96.- **Normativa aplicable**. En aquellas materias no contenidas expresamente en esta ley o delegadas por ésta a la Superintendencia, serán aplicables a la administración de carteras las reglas generales que rigen el mandato comercial.

Artículo 97.- **Mandatarios sujetos a fiscalización**. Quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia, las personas o entidades que se dediquen habitualmente a la administración de carteras de terceros, en la medida que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

a) el número de mandantes cuyas carteras están siendo administradas sean más de 500;

b) el mandatario que administre 50 o más carteras de terceros que no sean integrantes de una misma familia, por un monto total superior a 10.000 unidades de fomento.

Para efectos de la fiscalización de mandatarios y de las carteras administradas, la Superintendencia dispondrá de todas las facultades que le confiere su ley orgánica.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas contenidas en el presente título, respecto de los bancos e instituciones financieras cuando actúen como mandatarios, adoptando las normas que al efecto emita la Superintendencia.

Artículo 98.- **Administradoras de Carteras, su registro y requisitos mínimos**. Sólo podrán administrar carteras de terceros, de aquellas sometidas a la fiscalización de la Superintendencia, las administradoras generales de fondos a que se refiere el Título I de esta ley, y las personas y entidades que se inscriban en el Registro de Administradoras de Carteras que mantendrá la Superintendencia, en adelante, “el Registro”. Con excepción de la obligación de inscripción en el Registro, las administradoras generales de fondos deberán cumplir las demás disposiciones requeridas por el presente Título para administrar carteras individuales.

Sus socios, directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales deberán contar con la idoneidad y los conocimientos suficientes sobre gestión individual de recursos. La Superintendencia mediante norma de carácter general, establecerá los parámetros y estándares dentro de los cuales se presumirá que se cumple con tal requisito de idoneidad y conocimientos, los que deberán distinguir las distintas funciones dentro del mandatario.

La Superintendencia podrá fiscalizar el cumplimiento de dichos requisitos de idoneidad. En caso que concluyere que existe incumplimiento, deberá consignarlo en una resolución fundada, de carácter reservado, la que propondrá las medidas que permitan cumplir con dicho requisito.

En contra de dicha resolución podrán interponerse los recursos indicados en los artículos 45 y 46 del decreto ley Nº 3.538. Una vez vencidos los plazos para interponerlos, el mandatario deberá adoptar las medidas conducentes a superar la falta de idoneidad detectada, dentro del plazo que para ello establezca la resolución, y en caso contrario, servirá de antecedente para determinar la responsabilidad que cupiere al mandatario, de comprobarse que existe relación con los perjuicios que se produzcan con posterioridad.

Para poder actuar como administradores de cartera, las personas y entidades inscritas en el Registro deberán acreditar a satisfacción de la Superintendencia, de acuerdo a lo que ésta establezca por norma de carácter general, que permanentemente cuentan con un patrimonio de al menos 10.000 unidades de fomento y con garantías, constituidas en la forma que establezca la Superintendencia, en favor de los mandantes.

Artículo 99.- **Garantía**. El monto de la garantía que deban constituir los mandatarios será determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 13.

Artículo 100.- **Registro y contabilización de activos**. Los recursos de terceros mantenidos por el mandatario en dinero y moneda extranjera, y los instrumentos, bienes y contratos de propiedad de terceros que estén a nombre del mandatario, se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones realizadas por éste con sus recursos propios y de las operaciones de otros mandantes, con la individualización completa de el o los mandantes correspondientes. Ese registro acreditará la propiedad de esos recursos, instrumentos, bienes y contratos, y no podrán decretarse embargos y medidas precautorias sobre todo o parte de aquellos de propiedad de terceros, salvo por obligaciones personales del mandante respectivo y sólo sobre los de la propiedad de éste.

Para efectos del ejercicio del derecho a voto por los instrumentos de terceros mantenidos a nombre propio por el mandatario, se estará a lo establecido en el artículo 179 de la ley N° 18.045.

Artículo 101.- **El Mandato**. El mandato de administración de cartera, deberá constar por escrito y en soporte papel y ser debidamente suscrito por las partes, o en documento electrónico que cumpla con formalidades

equivalentes, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Cuando se trate de administración de cartera sujeta a la fiscalización de la Superintendencia, será ésta la que determine el contenido mínimo del contrato de administración.

Artículo 102.- **Responsabilidad del mandatario**. El mandatario deberá efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, para cautelar la obtención de una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones de cada mandante, de acuerdo a las instrucciones específicas entregadas en el mandato, el cual podrá permitir un manejo discrecional de la cartera entregada en administración. La administración de cartera, debe realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de cada mandante y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y enajenación que efectúe por cuenta del mismo, se haga en el mejor interés de éste.

Será deber del mandatario, explicitar, en el momento que ocurran, los conflictos de interés que surjan en el ejercicio del mandato y de resolverlos siempre en el mejor beneficio de cada mandante.

El mandatario será siempre responsable de los perjuicios que ocasione a los mandantes por sus actuaciones u omisiones negligentes o dolosas.

Artículo 103.- **Infracciones a esta ley**. Son contrarias a la presente ley, las siguientes actuaciones u omisiones de parte del mandatario:

a) el cobro de cualquier costo no señalado expresamente en el mandato;

b) el cobro de cualquier servicio prestado por personas relacionadas al mandatario, sin el consentimiento expreso del mandante;

c) la compra de instrumentos, bienes y contratos de mandantes para la cuenta del mandatario, a menos que así lo autorice expresamente el mandante, y

d) la venta de instrumentos, bienes y contratos de propiedad del mandatario para la cuenta de mandantes, a menos que así lo autorice expresamente el mandante.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Introdúcense en la ley N° 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el inciso final del artículo 1°, por el siguiente:

“Estas cuentas se denominarán Cuentas de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, en adelante ‘las

cuentas', y los recursos depositados en ellas deberán ser mantenidos de manera separada e independiente del patrimonio de las instituciones, e invertidos en cuotas de fondos fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta ley. En el evento que los fondos en que se invirtió dejen de cumplir tales requisitos, la institución deberá enajenar o rescatar las cuotas respectivas y reinvertir los recursos en otros fondos que cumplan esos requisitos en un plazo no superior a 30 días de sucedido tal dicho evento. Dichas cuotas tendrán el carácter de inembargables, salvo para lo señalado en el artículo 10 con relación al cese de la inembargabilidad.".

b) Reemplázase el artículo 3°, por el siguiente:

"Artículo 3°.- Con cargo a los recursos aportados mensualmente en la cuenta, las instituciones pagarán la renta de arrendamiento al arrendador promitente vendedor y descontarán la comisión a que se refiere el artículo 5°. El saldo de dicho aporte formará parte de los recursos disponibles para el pago del precio de la compraventa prometida celebrar.

Las instituciones deberán llevar un registro en el cual se indicará el número de cuotas de participación en los fondos mencionados en el inciso anterior, que le corresponde a cada uno de los titulares de las cuentas, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.

En caso de disolución de la institución que mantenga las cuentas, sea por revocación de su autorización de existencia o por cualquier otra causa, el liquidador deberá traspasar las cuentas a otra institución de las mencionadas en el artículo 1°. El traspaso comprenderá los recursos aportados y los contratos de ahorro metódico.".

c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 5°, por el siguiente:

"La comisión será establecida libremente por cada institución. Estas comisiones estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y deberán ser informadas al público y al organismo fiscalizador que tenga la institución, en la forma que señale el reglamento. Las modificaciones de esta comisión podrán efectuarse dos veces en el año y regirán 90 días después de comunicadas al respectivo organismo fiscalizador, plazo dentro del cual el titular de la cuenta podrá cambiarse de institución o requerir el cambio del o los fondos en que está invertido el aporte, cambios que no se computarán para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2º.".

d) Reemplázase el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- La sociedad inmobiliaria sólo podrá enajenar la vivienda arrendada con promesa de compraventa, siempre que ceda conjuntamente el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, a otra sociedad del mismo tipo, a un fondo fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros, a una sociedad securitizadora del Título XVIII de la ley Nº 18.045, o a las personas que esa Superintendencia haya declarado por norma de carácter general que pueden adquirirlos. El adquirente a cualquier título de la vivienda, como cesionario del contrato de

arrendamiento con promesa de compraventa, tendrá iguales obligaciones, derechos y facultades que el cedente y estará obligado a cumplir el contrato de arrendamiento con promesa de compraventa en la forma pactada. Las partes podrán convenir que la administración del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa la mantenga el cedente.

Los fondos fiscalizados por la Superintendencia y las sociedades securitizadoras, para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 17 de esta ley, estarán facultados para adquirir los activos a que se refiere este artículo. La Superintendencia de Valores y Seguros reglamentará, mediante circulares, las condiciones que deberán cumplirse en estas ventas y cesiones.

La cesión de los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, por parte del arrendador promitente vendedor, como, asimismo, la cesión, por el arrendatario promitente comprador, de sus derechos derivados del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa, se efectuarán mediante endoso. Este se colocará a continuación, al margen o al dorso del título, con indicación del nombre del cedente y del cesionario, debiendo las firmas de las partes estar autorizadas por notario y anotarse la respectiva cesión al margen de la inscripción del contrato de arrendamiento con promesa de compraventa.”.

e) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 44, por el siguiente:

“Los recursos de este fondo se depositarán en la cuenta a que se refiere el artículo 1º y se invertirán en los fondos fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros a que se refiere el artículo 1º, e integrarán los recursos disponibles a que alude el inciso primero del artículo 3º.”.

f) Sustitúyese el Título VI y su articulado, por el siguiente:

“TITULO VI

De los Requisitos de los Fondos

Artículo 54.- Los recursos aportados y disponibles señalados en el inciso final del artículo 1° e inciso primero del artículo 3°, respectivamente, y el fondo de garantía del artículo 44, podrán ser invertidos en cuotas de fondos mutuos y en cuotas de fondos de inversión, en este último caso, en la medida que los fondos estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo del Título XI del decreto ley N° 3.500, de 1980 y que permita el rescate total y permanente de sus cuotas, y que éstas sean pagadas en un plazo inferior o igual a 30 días.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974, las siguientes modificaciones:

1) Elimínanse del inciso tercero del artículo 11 las expresiones: “, las cuotas de fondos de inversión, regidos por la ley Nº 18.815, y” y la palabra “ambos”.

2) Elimínase en el inciso sexto, del número 8, del artículo 17, la frase “Se entenderá que tienen presencia bursátil aquellas acciones que cumplan con las normas para ser objeto de inversión de los fondos mutuos, de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976.”.

3) En el artículo 20 introdúcense las siguientes modificaciones:

a) En el número 2, reemplácese el inciso tercero, por el siguiente: "Los intereses a que se refiere la letra g), se considerarán devengados en cada ejercicio, a partir de la fecha que corresponda a su colocación y así sucesivamente hasta su pago. El impuesto se aplicará a los titulares de los referidos instrumentos, y gravará los intereses que hayan devengado en el año calendario o comercial respectivo, desde la fecha de su colocación o adquisición hasta el día de su enajenación o rescate, ambas inclusive. El interés devengado se determinará de la siguiente forma: (i) multiplicando la tasa de interés fiscal anual del instrumento determinada conforme al artículo 104, por el capital del mismo, a su valor nominal o par; (ii) el resultado obtenido conforme al literal anterior se divide por 365, y (iii) finalmente, se multiplicará tal resultado por el número de días del año calendario o comercial en que el título haya estado en poder del contribuyente titular.", y

b) Elimínase en el número 3° del artículo 20 la palabra “mutuos”.

4) En el artículo 21 inciso segundo, elimínase las expresiones “el impuesto del número 3, del artículo 104,”.

5) Reemplázase en el artículo 59, inciso cuarto, número 1, letra b), la expresión “el artículo 18 bis de esta ley y su reglamento”, por la expresión “la letra B), del Artículo Noveno Transitorio, de la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”.

6) En el artículo 74, inciso primero, reemplázase el número 7, por el siguiente:

“7.- Los representantes, custodios, intermediarios, depósitos de valores u otras personas domiciliadas o constituidas en el país que hayan sido designadas o contratadas por contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104, con una tasa de 4% sobre los intereses devengados durante el ejercicio respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, número 2°, letra g). Esta retención reemplazará a la que establece el número 4º de este artículo respecto de los mismos intereses, pagados o abonados en cuenta a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Las personas señaladas precedentemente deberán informar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, sobre los antecedentes de las retenciones que hayan debido efectuar conforme a este número. La no presentación de esta declaración o su presentación extemporánea, incompleta o errónea, será sancionada con

la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, la que se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165 del mismo texto legal.”.”.

7) Reemplázase el artículo 104, por el siguiente:

“Artículo 104.- No obstante lo dispuesto en el artículo 17, número 8, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos indicados en los siguientes números 1.- y 2.-:

1.- Instrumentos beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los instrumentos que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Que se trate de instrumentos de deuda de oferta pública previamente inscritos en el Registro de Valores conforme a la ley N° 18.045;

b) Que hayan sido emitidos en Chile;

c) Que se establezca, en la respectiva escritura de emisión, que los instrumentos se acogerán a lo dispuesto en este artículo y que, además de la tasa de cupón o de carátula, se determine, para cada colocación y después de cada una de ellas, una tasa de interés fiscal para efectos del cálculo de los intereses devengados conforme al inciso tercero, del número 2, del artículo 20.

c.1) Tasa de interés fiscal.

La tasa de interés fiscal aludida en c), corresponderá a la tasa de colocación anual del instrumento, la que se expresa en porcentaje y que en la fórmula que se describe a continuación, se identifica como “TF”. Esta tasa corresponderá al número positivo que permita cumplir la siguiente igualdad:

$$\text{Precio de transacción} = \sum_{t=fc}^{N} F_t * \frac{1}{(1+TF)^{\frac{t-fc}{365}}}$$

La fórmula precedente es una identidad que indica que el precio del instrumento colocado corresponde a la suma del valor presente de cada flujo de caja “F” que el emisor del instrumento se compromete a pagar en cada fecha “t” y hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

El valor presente de cada flujo de caja F que el instrumento se compromete a pagar en una determinada fecha t corresponde al flujo de caja F, multiplicado por un factor de descuento que corresponde al inverso de la suma de 1 más la tasa anual de colocación del instrumento “TF” elevada al número que resulte de dividir los días transcurridos entre la fecha en que ocurre el flujo respectivo y la fecha de colocación “fc” (t-fc), por 365.

De acuerdo a lo anterior, las variables intervinientes en la ecuación indicada anteriormente se definen de la siguiente manera:

TF = Tasa fiscal por determinar y corresponde a la tasa de colocación del instrumento. Esta tasa se expresa en porcentaje.

$\sum_{t=fc}^{N}$ = Sumatoria desde la fecha de colocación del instrumento, fecha que definimos como “fc”, hasta el vencimiento del instrumento en la fecha “N”.

Ft = Flujo de caja (que incluye cupón y/o amortización de capital) que promete pagar el instrumento al tenedor de éste en una fecha “t”, según la tabla de desarrollo del instrumento, expresados como porcentaje del valor nominal.

t = Fecha de ocurrencia de un flujo de caja.

Precio de transacción = Relación expresada en porcentaje, entre la suma de dinero desembolsada por el o los inversionistas para adquirir el monto colocado por el emisor respecto a su valor nominal.

No obstante lo anterior, una o varias colocaciones de la misma emisión, posteriores a la primera, tendrán la misma tasa de interés fiscal que aquella, sólo si su respectiva tasa de colocación es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la primera colocación, en cuyo caso se aplicará la tasa de interés fiscal correspondiente a la colocación inicial, siempre que, previo a la respectiva colocación, el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores y Seguros, en la forma que ésta determine mediante Norma de Carácter General, que acogerá dicha colocación a lo dispuesto en este inciso. En todo caso, dicha Norma de Carácter General deberá incluir la forma de identificar las colocaciones que tengan tasa fiscal distinta de una misma emisión.

En caso de aumentar el monto emitido de una misma serie de títulos que cumplan copulativamente los requisitos señalados en las letras a), b) y c) precedentes, a través de una reapertura, de la cual se deje constancia en la escritura de emisión, el nuevo monto emitido y sus respectivas colocaciones, tendrán la misma tasa de interés fiscal de la primera colocación, sólo si la tasa de colocación de cada una de ellas es menor o igual a la tasa de interés fiscal de la primera colocación de la emisión de la serie original, y siempre que el emisor haya informado a la Superintendencia de Valores o Seguros, en la forma que esta determine mediante Norma de Carácter General, que acogerá dicha emisión a lo dispuesto en este inciso. En este caso podrá aplicarse lo dispuesto en el inciso precedente, cumpliéndose los requisitos que allí se establecen, respecto de las sucesivas colocaciones de la misma reapertura.

La tasa de interés fiscal será informada después de cada colocación, dentro del mismo día, por el emisor de los títulos a la Superintendencia de Valores y Seguros, quien mantendrá un registro público de dichas tasas.

2.- Contribuyentes beneficiados.

Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo, los contribuyentes que enajenen los instrumentos indicados en este artículo cumpliendo con lo señalado en las letras a) o b) siguientes:

a) Que entre la fecha de adquisición y enajenación de los instrumentos haya transcurrido a lo menos un año, o bien, el plazo inferior que se fije mediante uno o varios decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” por el Ministerio de Hacienda, requisito éste último que regirá durante el tiempo que cada uno de dichos decretos determine. En el caso de la primera dictación, de la modificación o reemplazo del señalado el decreto, el plazo de permanencia que regirá para aquellos tenedores de bonos que hayan adquirido los títulos con anterioridad a su entrada en vigencia, será el mínimo plazo entre el que falte por completar para cumplir con el que establece la ley o, en su caso, el que señala el decreto vigente al momento de la compra, y el plazo que señale el nuevo decreto que se dicte.

b) Que hayan adquirido y enajenado los instrumentos en una Bolsa local, en un procedimiento de subasta continua, que contemple un plazo de cierre de las transacciones que permita la activa participación de todos los intereses de compra y de venta, el que, para efectos de este artículo, deberá ser previamente autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución conjunta. Además, que hayan adquirido y enajenado los instrumentos por intermedio de un corredor de bolsa o agente de valores registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto en el caso de los bancos, en cuanto actúen de acuerdo a sus facultades legales.

Tratándose de contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país, deberán contratar o designar un representante, custodio, intermediario, depósito de valores u otra persona domiciliada o constituida en el país, que sea responsable de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectarlos.

3.- Disposiciones especiales relativas a los pagos anticipados.

En el caso del pago anticipado o rescate por el emisor del todo o parte de los instrumentos de deuda a que se refiere este artículo, se considerarán intereses todas aquellas sumas pagadas por sobre el saldo del capital adeudado, además de los intereses referidos en el artículo 20, número 2, inciso tercero. Para los efectos de esta ley, los intereses a que se refiere este número se entenderán devengados en el ejercicio en que se produzca el pago anticipado o rescate.

4.- Los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo aunque no cumplan con uno o más de los requisitos señalados en el número 1 y 2 anteriores, siempre que los respectivos títulos se encuentren incluidos en la nómina de instrumentos elegibles que, para estos efectos, establecerá el Ministro de Hacienda mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", y que cumplan

con las características y condiciones que en el mismo se definan, incluyendo la tasa de interés fiscal. Tratándose de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile, su inclusión en dicha nómina de instrumentos elegibles deberá ser previamente solicitada por dicho organismo.

Respecto de los instrumentos a que se refiere este número, el requisito dispuesto en la letra b) del número 2 se entenderán cumplidos cuando la adquisición o enajenación tenga lugar en alguno de los sistemas establecidos por el Banco Central de Chile o por el Ministerio de Hacienda, según corresponda, para operar con las instituciones o agentes que forman parte del mercado primario de dichos instrumentos de deuda. Asimismo, tales requisitos se entenderán cumplidos cuando se trate de adquisiciones o enajenaciones de instrumentos elegibles que correspondan a operaciones de compra de títulos con pacto de retroventa que efectúe el Banco Central de Chile con las empresas bancarias.

5.- Disposiciones relativas a deberes de información, sanciones y normas complementarias

El emisor de los instrumentos a que se refiere este artículo, los depósitos de valores donde tales instrumentos estén depositados, las bolsas de valores del país que los acepten a cotización, los representantes de los tenedores de tales instrumentos, los custodios, intermediarios u otras personas responsables de cumplir con las obligaciones tributarias que pudiesen afectar a los contribuyentes tenedores, u otras personas que hayan participado en estas operaciones, deberán declarar al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, individualizando a las partes e intermediarios que hayan intervenido, los valores de emisión y colocación de los instrumentos y las demás materias que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2°, del mismo texto legal.

La emisión o utilización de declaraciones maliciosamente falsas, se sancionará en la forma prevista en el inciso primero, del número 4°, del artículo 97 del Código Tributario.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su realización, el inversionista o su administrador quedarán afectos a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo serán solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que

se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista o su administrador correspondiente o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios. La multa de este inciso se aplicará conforme al procedimiento del artículo 165, número 2° del Código Tributario.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en artículo 17 N° 8 inciso quinto de la Ley sobre Impuesto a la Renta y en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al inciso primero del artículo 21 de esta ley.

6.- Tratamiento de las pérdidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo.

Las pérdidas obtenidas en la enajenación de los instrumentos a que se refiere este artículo, solamente serán deducibles de los ingresos no constitutivos de renta del contribuyente.”.

8) Derógase el artículo 106.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 107:

a) Elimínese en el inciso segundo del número 1.- la expresión “ y 106,”;

b) Agréguese en la parte final, del inciso primero, del número 2), antes del punto aparte, la siguiente expresión: “y dicho fondo, al menos una vez al año, distribuya a sus aportantes la totalidad de los dividendos percibidos de las sociedades cuyas acciones tienen presencia bursátil.”.

c) Reemplácese el inciso segundo de ese número 2) por el siguiente “Se tendrá por incumplido el requisito establecido en la segunda parte del inciso anterior, si las inversiones del fondo respectivo en tales instrumentos resultasen inferiores a dicho porcentaje por un período continuo o discontinuo de 30 o más días en un año calendario. Las administradoras de los fondos deberán certificar anualmente al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste lo requiera mediante resolución, el cumplimiento de este requisito. La emisión de certificados maliciosamente falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario.”;

d) Elimínase el inciso primero del número 4).

10) En el inciso primero del artículo 108, reemplácese la expresión “los artículos 106 y” por “el artículo”.

11) Sustitúyese el artículo 109 por el siguiente:

“Artículo 109.- El mayor o menor valor en el aporte y rescate de valores en fondos cuyo reglamento interno contemple ese tipo de aportes y

rescates, se determinará para efectos tributarios, conforme a las siguientes reglas:

1) Adquisición de cuotas mediante el aporte de valores.

a) El valor de adquisición de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que efectúen aportes en valores, se determinará conforme al valor cuota, definido por el Reglamento de la Ley que regule la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

b) El precio de enajenación de los valores que se aportan corresponderá al valor al que esos títulos o instrumentos fueron valorizados por la administradora del fondo correspondiente al convertir el aporte en cuotas de ese fondo, el cual deberá estar contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

2) Rescate de cuotas mediante la adquisición de valores.

a) El valor de rescate de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que lo efectúen mediante la adquisición de valores que formen parte de la cartera del fondo, se determinará en la misma forma señalada en la letra a) del número precedente, el cual deberá ser contenido en un certificado que al efecto emitirá la administradora del fondo.

b) El valor de adquisición de los títulos o instrumentos mediante los cuales se efectúa el rescate a que se refiere el literal anterior, será aquél empleado por la administradora del fondo respectivo para pagar el rescate en esos valores. Del mismo modo, el valor de tales títulos o instrumentos deberá constar en el certificado que al efecto emitirá la administradora.

ARTÍCULO CUARTO.- Deróganse los siguientes cuerpos legales:

a) Los Títulos XX y XXVII de la ley N°18.045;

b) El decreto ley N° 1.328, de 1976, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto supremo de Hacienda N° 1.019, de 1979, publicado en el Diario Oficial de 19 de diciembre de 1979;

c) La ley N° 18.657, y

d) La ley N° 18.815.

Para todos los efectos legales, debe entenderse que cualquier referencia que en el ordenamiento jurídico se haga a los cuerpos legales derogados por el inciso anterior, debe entenderse efectuada a la presente ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Sustitúyese el Artículo Primero Transitorio de la ley N° 20.190 por el siguiente:

“ARTICULO PRIMERO.- Establécense las siguientes normas para incentivar la inversión en capital de riesgo:

1.- Norma para los fondos de inversión.

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, se considerarán ingresos no constitutivos de renta los ingresos percibidos por los aportantes de fondos de inversión que cumplan los requisitos de este número, originados en el mayor valor obtenido por el fondo de inversión respectivo en la enajenación de las acciones que se indican, en aquella parte que exceda del producto de multiplicar el valor de adquisición reajustado de las respectivas acciones, por el factor resultante de elevar 1,0003 a una potencia igual al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición de las acciones y la de su enajenación.

Sólo podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que cumplan con los siguientes requisitos:

(i) Su enajenación se verifique después de transcurridos a lo menos veinticuatro meses de haberlas adquirido;

(ii) al momento de efectuar la enajenación, el monto invertido por el fondo de inversión en la sociedad cuyas acciones se enajenan no supere el 40% del total de aportes pagados por los aportantes al fondo;

(iii) el adquirente de las acciones y sus socios o accionistas, en el caso de ser sociedades, o sus partícipes, en el caso de ser un fondo, no se encuentren relacionados, en los términos del artículo 100 de la ley N°18.045, con el fondo de inversión enajenante, sus aportantes o su sociedad administradora, ni con los accionistas de ésta.

Para calificar a esta franquicia, los fondos de inversión deberán incorporar en su reglamento interno, los requerimientos y obligaciones establecidas en este número.

La totalidad de los activos del fondo de inversión, sin considerar las reservas de liquidez de corto plazo que se inviertan en los instrumentos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma de carácter general, se destinarán exclusivamente a la inversión en sociedades que, al momento de la inversión por parte del fondo:

(i) sean sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que no coticen sus acciones en Bolsa;

(ii) no hayan alcanzado un volumen anual de ingresos por ventas o servicios, excluido el Impuesto al Valor Agregado que hubiere afectado dichas operaciones, que supere en cualquier ejercicio comercial las 400.000 unidades de fomento, según su valor al término del año respectivo;

(iii) no tengan utilidades tributables retenidas que, debidamente reajustadas, excedan del equivalente a 20% del monto de su capital pagado, también reajustado, y

(iv) no formen parte de ningún grupo empresarial incluido en la nómina publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a lo dispuesto en el Título XV de la ley N°18.045, y

En todo momento las sociedades en que estén invertidos los fondos no podrán tener como giro principal: (a) inmobiliarias o de casinos; (b) de concesiones de obras públicas o servicios sujetos a tarificación; (c) de importación de bienes o servicios; (d) de inversión, sea en capitales mobiliarios o en otras empresas; (e) de servicios financieros o de corretaje, ni (f) de servicios profesionales.

Además de dar cumplimiento a su reglamento interno, para la procedencia de esta franquicia los fondos de inversión deberán cumplir los siguientes requisitos:

(i) el monto de la inversión máxima a realizar por el fondo de inversión en una misma sociedad no podrá superar, al momento de efectuar cada inversión, el cuarenta por ciento del total de aportes pagados por los aportantes al fondo, debiéndose regularizar cualquier exceso de inversión que se produzca, sea por la vía de aumentar el capital pagado o de reducir el monto invertido, dentro del plazo máximo de 24 meses, salvo el caso de la primera inversión que realice el fondo de inversión, que podrá regularizarse hasta en 36 meses;

(ii) transcurrido un año de la primera inversión realizada por el fondo, ningún partícipe podrá poseer más de un 20% del total de cuotas del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con otras personas con las cuales mantenga un acuerdo de actuación conjunta, según dicho concepto está definido en la ley Nº18.045, salvo que se trate de un aportante que califique como inversionista institucional de acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 4ºbis de la ley Nº18.045, y

(iii) ser un fondo fiscalizado por la Superintendencia.

El resultado obtenido por el fondo de inversión en aquellas inversiones distintas a las permitidas en este artículo, no podrá acogerse a la franquicia prevista en este número, pero podrán considerarse en el cálculo de los límites de inversión requeridos para que el resultado obtenido por el fondo de inversión en sus restantes inversiones, pueda beneficiarse del tratamiento tributario previsto en este artículo.

2.- Norma para los demás inversionistas.

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, los accionistas de aquellas sociedades susceptibles de ser objeto de las inversiones a que se refiere el numeral anterior y en que los fondos de inversión descritos en dicho numeral hayan adquirido a lo menos un 25% del capital accionario, calculado al momento de la respectiva inversión por parte

de los fondos, podrán considerar como costo de adquisición de sus acciones, para efectos de determinar el mayor valor gravado por impuesto a la renta resultante de una enajenación de tales acciones, el más alto valor de adquisición pagado por uno de tales fondos de inversión en la más reciente colocación de acciones de primera emisión de la respectiva sociedad, de la misma serie, y en que las acciones adquiridas por el fondo representen a lo menos un 10% del capital accionario, ocurrida con anterioridad a la enajenación de las acciones.

Para que proceda lo dispuesto en este número será necesario que:

(i) las acciones que se transfieren hayan sido adquiridas y pagadas con a lo menos cien días de anticipación a la fecha de incorporación del primer fondo a la sociedad respectiva, cualquiera sea su participación;

(ii) la enajenación de las acciones se verifique después de transcurridos a lo menos doce meses de haberlas adquirido, y

(iii) el adquirente de las acciones y sus socios o accionistas, en el caso de ser sociedad, o sus partícipes, en el caso de ser un fondo, no se encuentren relacionados con el enajenante, o su controlador, en los términos del artículo 100 de la ley N°18.045.

3.- Vigencia.

Lo dispuesto en el N° 1 de este artículo se aplicará respecto del mayor valor generado en la enajenación de acciones que se adquieran por los fondos de inversión que cumplan los requisitos de ese numeral, a contar de la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Lo dispuesto en el N° 2 de este artículo se aplicará respecto de las acciones adquiridas en cualquier momento previo al vencimiento del plazo antes indicado.

ARTÍCULO SEXTO.- Increméntase la dotación máxima de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del año de entrada en vigencia de la presente ley, en 5.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Salvo lo dispuesto en el Artículo Quinto, que regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial, la presente ley comenzará a regir el primer día del mes subsiguiente al de dictación del decreto supremo del Ministerio de Hacienda que reemplace a los actuales decretos supremos N° 1.179, de 2010 y N° 864, de 1989, ambos del Ministerio de Hacienda, el que deberá ser emitido a más tardar seis meses después de la publicación de esta ley. A contar de la fecha de publicación de ese decreto supremo, se traspasarán automáticamente, y por el solo ministerio de esta ley, los reglamentos internos de fondos mutuos

registrados en el antiguo “Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos y Contratos de Suscripción de Cuotas de Fondos Mutuos”, al nuevo “Depósito de Reglamentos Internos”.

En igual plazo deberá dictarse el decreto supremo del Ministerio de Hacienda que modifique el actual decreto supremo N° 1.334, de 1995, del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Las sociedades administradoras de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos para la vivienda y generales de fondos deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones establecidas en esta ley, así como cumplir las exigencias contempladas en este cuerpo legal, en el plazo de un año contado desde la publicación del decreto supremo a que hace referencia el artículo sexto.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.- Las administradoras tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero del artículo primero transitorio, para depositar los reglamentos internos y demás documentación requerida por la Superintendencia de los fondos de inversión que administran, que hayan sido aprobados por la Superintendencia con anterioridad a esa fecha. Las cuotas de esos fondos podrán ser comercializadas sin que sea necesario el depósito respectivo, en tanto sus reglamentos internos o la referida documentación no sean modificados. Las modificaciones de esos reglamentos internos deberán cumplir las disposiciones introducidas por la presente ley y, en caso de tratarse de adecuaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley, éstas deberán ser efectuadas dentro del mismo plazo.

En tanto los reglamentos internos de fondos mutuos no hayan sido depositados, seguirán rigiendo aquellas exigencias contenidas en los artículos 7°, 11 y 12 A del decreto ley N° 1.328, de 1976, y 226 y 227 de la ley N° 18.045, cuyo plazo para su cumplimiento comenzó a regir desde la fecha en que la administradora estuvo en condiciones de comercializar las cuotas del fondo respectivo, o a partir del funcionamiento de ese fondo según corresponda, y hasta que se cumplan los plazos establecidos en esta ley para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que están condicionadas al depósito del reglamento interno en el “Depósito de Reglamentos Internos”.

Mientras los reglamentos internos de fondos de inversión no hayan sido depositados, seguirán rigiendo aquellas exigencias contenidas en los artículos 1°, 3°A y 18 de la ley N° 18.815, y 226 y 227 de la ley N° 18.045, cuyo plazo para su cumplimiento comenzó a regir desde la fecha en que la Superintendencia aprobó el reglamento interno del fondo respectivo, o a partir del funcionamiento de ese fondo según corresponda, y hasta que se cumplan los plazos establecidos en esta ley para el cumplimiento de las nuevas obligaciones que están condicionadas al depósito del reglamento interno en el “Depósito de Reglamentos Internos”.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO.- Las sociedades que administren fondos para la vivienda tendrán el plazo de un año, contado

desde la fecha de publicación del decreto supremo a que hace referencia el inciso segundo del artículo primero transitorio, para depositar los reglamentos internos de los fondos que administran ajustados a las disposiciones establecidas en esta ley, cuyos contratos de administración hubieren sido inscritos por la Superintendencia en el registro que lleva para esos efectos, con anterioridad a esa fecha. Las cuotas de esos fondos podrán ser comercializadas a personas distintas de la institución con quien tenía suscrito tal contrato una vez efectuado el depósito respectivo.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO.- Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N°18.657, derogada en el Artículo Cuarto de la presente ley, podrán continuar con sus operaciones en el país, conservando la garantía de invariabilidad establecida en el inciso tercero del artículo 15 de la ley N° 18.657 respecto de las inversiones que se hayan efectuado o que estén previamente autorizadas en este tipo de fondos de inversión, todo en conformidad a un contrato de inversión extranjera suscrito de acuerdo al decreto ley N° 600, de 1974. Conservarán, asimismo, el régimen de tributación establecido en dicha ley, incluyendo la posibilidad de distribuir rentas del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que también es derogado por la presente ley. Estos fondos de inversión no podrán transformarse en o fusionarse con algunos de los fondos creados por la presente ley.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO.- Las administradoras de fondos de inversión de los referidos en los N° 1 y 3 del actual artículo 1° transitorio de la ley N° 20.190, tendrán el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para adecuar los reglamentos internos de dichos fondos a lo establecido en el N° 1 del nuevo artículo 1° transitorio de la citada ley, introducido a través del artículo quinto. En cualquier caso, las inversiones que tales fondos hayan efectuado con anterioridad a la entrada de vigencia de la presente ley mantendrán el régimen tributario establecido en el actual artículo 1° transitorio de la ley N° 20.190, en la medida que se dé cumplimiento de los demás requisitos allí establecidos.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO.- Lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 86 del Artículo Primero de la presente ley y las modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta mediante el Artículo Tercero de la presente ley, regirán a contar de la fecha de vigencia general de la presente ley establecida en el Artículo Primero Transitorio, respecto de los hechos acaecidos a contar de dicha fecha.

a) Los fondos de inversión constituidos al amparo de la ley N° 18.815, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso anterior, presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo de beneficios acumulados en el respectivo fondo, así como el saldo que registre el Fondo de Utilidades Tributables y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a las cantidades allí

registradas, así como el saldo del Fondo de Utilidades No Tributables por los ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas que el fondo haya percibido de terceros. Los saldos y monto del crédito referidos deberán informarse según sus montos a la fecha de vigencia general de la presente ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario establecido en la ley N° 18.815, imputándose en el Fondo de Utilidades Tributable o no Tributables, según corresponda, con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban y comenzando por las cantidades registradas en el Fondo de Utilidades Tributables, luego en el Fondo de Utilidades No Tributables y, finalmente, los demás beneficios netos que se repartan. En caso de que dichos fondos hayan dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los beneficios netos referidos, podrán ser distribuidos conforme al tratamiento tributario establecido en dicha disposición a los partícipes sin residencia ni domicilio en Chile existentes en dichos fondos con anterioridad a la vigencia general de la presente ley.

ii) el valor del patrimonio del fondo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de vigencia general de esta ley. La parte del mayor valor obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de los referidos fondos de inversión que fueron adquiridas con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, y que se determine hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el total del patrimonio del fondo, según su valor a la fecha de vigencia señalada, quedará sujeto al régimen tributario contenido en la ley N° 18.815, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

b) El remanente de crédito fiscal por Impuesto al Valor Agregado que los fondos de inversión mantengan a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, podrá ser utilizado como tal por la administradora e imputarse al débito fiscal de dicho impuesto generado en su operación propia, sin perjuicio del derecho a repetición. Los fondos referidos y sus administradoras deberán, para estos efectos, cumplir con lo establecido por el Artículo Segundo Transitorio y presentar una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, en la que declare el remanente de Impuesto al Valor Agregado existente a la referida fecha.

c) Los fondos de inversión, los fondos mutuos y las administradoras de ambos tipos de fondos, conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de esta ley adecúen los estatutos de los fondos que administran a las disposiciones de la presente ley, deberán dentro del mismo plazo establecido en dicha disposición, cumplir con las obligaciones administrativas tributarias establecidas en los artículos 81 y 86, según corresponda, ambos del Artículo Primero de la presente ley.

d) Los fondos mutuos constituidos al amparo del decreto ley N° 1.328, de 1976, que la presente ley deroga, deberán, al 30 de abril del año siguiente a la fecha de vigencia establecida en el inciso primero, presentar

una declaración ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que determine mediante resolución, en la que declare:

i) el saldo inicial del registro establecido en la letra b), del N° 2, del artículo 81 establecido por el Artículo Primero de la presente ley, conformado por el saldo de beneficios netos pendientes de reparto y los dividendos recibidos de sociedades anónimas abiertas chilenas, afectos al Impuesto Global Complementario, y del crédito establecido en el artículo 56 N° 3 y 63 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por el Impuesto de Primera Categoría que haya afectado a los citados dividendos, hasta antes de la fecha de vigencia general de esta ley. Dichas cantidades, se afectarán en su posterior reparto o distribución, con el régimen tributario vigente con anterioridad al establecido en la presente ley, imputándose con preferencia a los nuevos beneficios o dividendos que se perciban.

ii) el valor del patrimonio del fondo mutuo, y el número de cuotas en poder de cada participe, con individualización de cada uno de ellos, a la fecha de entrada en vigencia general de esta ley. La parte del mayor valor, obtenido en la enajenación o el rescate de cuotas de fondos mutuos adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley y que se efectúe con posterioridad a dicha fecha, determinado hasta el valor proporcional que representan las cuotas enajenadas sobre el patrimonio total del fondo, según su valor a la fecha de vigencia de esta ley, quedará sujeto al régimen tributario vigente con anterioridad a la misma, mientras que la parte restante de dicho mayor valor, se sujetará al nuevo régimen tributario establecido en la presente ley.

iii) El Servicio de Impuestos Internos fiscalizará la correcta determinación del saldo de utilidades señalado, sin perjuicio de que será de cargo de la administradora acreditar fehacientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario, dichas cantidades.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los instrumentos acogidos al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por el Artículo Tercero de la presente ley es reemplazado, que hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia general de la presente ley, podrán en sus enajenaciones posteriores a dicha fecha, gozar de la liberación tributaria contenida en el nuevo artículo 104 con tal que el enajenante cumpla con lo dispuesto en alguna de las letras a) y b) del N° 2 del nuevo artículo 104. En todo caso, tratándose de la primera enajenación que se efectúe en forma posterior a la fecha de vigencia señalada de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado y adquiridos con anterioridad a dicha fecha, respecto de la letra a) referida, no será necesario cumplir con el requisito de antigüedad allí señalado.

Las posteriores enajenaciones de instrumentos acogidos al artículo 104 reemplazado, se sujetarán en todo a lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 74 N° 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que por esta ley se establece.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO.- A) El mayor valor realizado por los inversionistas institucionales extranjeros con posterioridad a la entrada en

vigencia de esta ley en la enajenación de títulos de oferta pública representativos de deudas, emitidos por empresas constituidas en el país, con anterioridad a la fecha de vigencia referida y que en su emisión no se hayan acogido al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, estará exento de los impuestos a la renta, con tal que cumplan con los siguientes requisitos durante el tiempo que operen en el país:

1.- Estar constituido en el extranjero y no estar domiciliado en Chile.

2.- Ser un inversionista institucional extranjero que cumpla las características que defina el reglamento, dictado mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, para cada categoría de inversionista, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Servicio de Impuestos Internos.

3.- No participar directa ni indirectamente del control de las entidades emisoras de los valores en los que se invierte ni poseer o participar directa o indirectamente en el 10% o más del capital o de las utilidades de dichos emisores.

4.- Contar con un representante o agente constituido en Chile que se haga responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

5.- Los representantes o agentes a que se refiere el número anterior deberán declarar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución, las características de dichas operaciones, indicando a lo menos la individualización de las partes o intermediarios que hayan intervenido, así como los valores de emisión, colocación, compra y venta de los instrumentos, y demás que establezca dicho Servicio. La no presentación de esta declaración o su presentación tardía, incompleta o errónea, será sancionada con la multa establecida en el número 6º, del artículo 97, del Código Tributario, conforme al procedimiento del artículo 165, número 2°, del mismo texto legal.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el banco en el cual se liquidaron las divisas destinadas a la inversión, no fue designado como agente intermediario, deberá informar al Servicio de Impuestos Internos, cuando éste lo requiera, el origen y monto de las divisas liquidadas.

En caso que la información que se suministre conforme al presente número resultare ser falsa, o cuando la enajenación no se hubiere adecuado a las condiciones de mercado al tiempo de su realización, el inversionista, o su administrador en su caso, quedará afecto a una multa de hasta el 20% del monto de las inversiones realizadas en el país, no pudiendo, en todo caso, dicha multa ser inferior al equivalente a 20 unidades tributarias anuales, la que podrá hacerse efectiva sobre el patrimonio del inversionista, sin perjuicio del derecho de éste contra el administrador. Las personas que hayan sido contratadas para los efectos de cumplir con las obligaciones tributarias provenientes de la tenencia o enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere este artículo, serán solidariamente responsables de esta multa, salvo que, cuando se haya aplicado con motivo de la entrega de información falsa, acrediten que las declaraciones de que

se trate se fundaron en documentos proporcionados por el inversionista o su administrador correspondiente o que no tuvo incidencia en la inadecuación de la operación a las condiciones de mercado, y que el representante o intermediario no estuvo en condiciones de verificar en el giro ordinario de sus negocios.

El Servicio podrá aplicar, respecto de las operaciones que establece este artículo, lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, en cuyo caso, la diferencia que fundadamente se determine entre el precio o valor de la operación y el de la tasación se gravará conforme al artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

B) Los inversionistas institucionales que cumpliendo con los requisitos del artículo 106 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, derogado por la presente ley, hayan adquirido valores a que se refiere el artículo 107 de la referida ley con anterioridad a la fecha de vigencia del Artículo Tercero de la presente ley que deroga el referido artículo 106, podrán, en la posterior enajenación de dichos valores gozar de la exención establecida en dicho artículo 106 con tal que durante su operación en el país y al momento de la enajenación cumplan con los requisitos establecidos en dicha disposición.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 21 de diciembre de 2011, 11 de enero, 28 de agosto, 11 de diciembre de 2012, 7 y 8 de enero, 5 y 13 de marzo de 2013, con la asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín y Silva, don Ernesto (Presidente); Auth, don Pepe; Girardi, señora Cristina; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en las actas respectivas.

SALA DE LA COMISIÓN, a 26 de marzo de 2013.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión

ANEXOS

- Presentaciones de los invitados a exponer su opinión sobre el proyecto y el debate respectivo

El señor **Fernando Tisné, Presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI)**, hizo presente que la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, ACAFI, es una asociación gremial que reúne a la industria de administradores de fondos de inversión en Chile. Nacida en 2003, representa hoy a 27 administradoras socias, de los cuales el 75% no están vinculados a grandes empresas. Sus objetivos son potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para la Región; entregar al mercado

nuevas alternativas e instrumentos de ahorro, ampliando sus oportunidades de inversión; fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de empresas y proyectos no tradicionales y cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile. Los dos primeros objetivos de la ACAFI, que son los más relevantes, coinciden con los objetivos del proyecto en análisis.

Agregó que el marco regulatorio de los fondos de inversión es bastante rígido: están regulados por la ley N° 18.815 y supervisados por la SVS. Adicionalmente, los administrados por sociedades independientes también son fiscalizados por la SVS. Los fondos deben publicar Estados Financieros Trimestrales, son auditados y tienen clasificaciones de riesgo; poseen Comités de Vigilancia de 3 miembros que son nombrados por los propios aportantes, cuyo objetivo es velar de que la administradora en la administración del fondo cumpla con el reglamento interno y con la ley, y sus cuotas son valores de oferta pública que se transan en las bolsas de valores.

En cuanto a la industria de los fondos de inversión públicos expresó que a diciembre de 2010 operaban 77 fondos, que administraban activos por US $ 9.970 millones principalmente en las categorías de fondos accionarios, de renta fija, inmobiliarios y de capital de riesgo. Los aportantes se dividen en fondos de pensiones (54%), compañías de seguros (19%) y otros inversionistas (27%), compuesto principalmente por inversionistas privados chilenos. Manifestó que no se ha tenido éxito en atraer a inversionistas extranjeros, principalmente, por algunas rigideces del actual marco normativo que precisamente este proyecto propone modificar y corregir.

Respecto de la evolución de esta industria, indicó que en los últimos 10 años los fondos de inversión pasaron de 29 a 77, el stock de inversión de privados se incrementó de US $226 millones a US $1.313 millones y los montos transados en bolsa, aumentaron de 26 a 1.230 millones de dólares, es decir, se incrementó la liquidez de las cuotas de los fondos de inversión en la bolsa.

Desglosando el incremento de esta industria por tipo de fondo, los accionarios subieron de MM US$917 el 2004 a 4.962 el 2010, los de renta fija de MM US$245 a 1.809 y los inmobiliarios de MM US$821 a 1.643 en ese período de tiempo y en total se incrementaron de MM US$2.422 a 9.970.

Dentro del mercado de capitales, donde intervienen los ahorrantes, las empresas que requieren el capital y los intermediarios se encuentran los fondos de inversión. Los principales intermediarios son los bancos con MM US$ 231.264 a diciembre de 2010, los fondos de pensiones con MM US$ 148.437, las compañías de seguros con MM US$ 40.959, los fondos mutuos con MM US$ 38.242 y luego vienen los fondos de inversión con MM US$ 9.970.

Estos fondos, agregó, proveen capital a segmentos no cubiertos por los grandes actores del mercado de capitales, y tienen en su portafolio un mayor porcentaje de renta fija a largo plazo internacional, acciones locales de pequeñas y medianas empresas, inversión en el sector inmobiliario y en

capital de riesgo. Estos instrumentos proveen liquidez a un segmento del mercado no cubierto por los fondos de pensiones, fondos mutuos y ETF. En la industria de fondos inmobiliarios, se han desarrollado Fondos de Desarrollo que participan en la construcción de proyectos inmobiliarios. A diciembre de 2009 han participado en el desarrollo de 36.062 viviendas en 184 proyectos, donde el 65% de las viviendas construidas se encuentran en el segmento de menos de 2 mil UF. En la industria de capital de riesgo, los fondos han invertido en tecnología, agroindustria y forestal, infraestructura y minería, mediante el Fondo Fénix.

Con respecto al proyecto de ley expresó la plena concordancia entre los objetivos de éste y de la ACAFI en el sentido de transformar a Chile en plataforma regional para la administración de activos financieros, de manera que fondos creados en el país puedan ser vendidos a inversionistas de cualquier parte del mundo y de desarrollar el mercado de capitales, entregando al mercado nuevas alternativas e instrumentos de ahorro, ampliando sus oportunidades de inversión y mejorando la liquidez de los fondos de inversión.

El objetivo a lograr es que en el año 2020 se llegue a los MM US$ 25 mil, de los cuales el 40% corresponda a inversionistas extranjeros. Hoy en el país casi no se administra inversión extranjera por el alto costo que implica. En los últimos años, añadió, se ha construido una base sólida para hacer de Chile una plataforma para exportar servicios financieros para la Región.

Consideró que, con las propuestas que el proyecto contempla en materia tributaria, será posible lograr dichos objetivos, ya que por un lado se nivelan las condiciones tributarias de Chile con la de los otros países, eximiendo de impuesto a la renta a los extranjeros que inviertan en fondos que tengan más del 80% de sus activos fuera del país y, por el otro, se establecen mecanismos de devolución del IVA por las comisiones a inversionistas extranjeros.

Expresó su acuerdo con las siguientes propuestas:

1. Recompra de cuotas, lo que permitirá a los Fondos de Inversión recomprar sus propias cuotas en el mercado secundario formal.
2. Permitir los rescates de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno.
3. Permitir que los Fondos de Inversión puedan establecer en sus reglamentos internos distintos mecanismos de distribución de sus dividendos.
4. Permitir distintas series de cuotas para un mismo fondo.
5. Agilizar los trámites de Fondos de Inversión en la SVS.

Finalmente, manifestó sus reparos en torno a dos materias que la iniciativa contempla:

- En materia de inversión inmobiliaria, como por ejemplo, la compra de un edificio para renta, no queda claro en la redacción de la norma si es factible

o no realizarlo. La opinión de la ACAFI es que se permita invertir directamente en bienes raíces.
- Establecer mecanismos de devoluciones del IVA a los fondos de pensiones y a las cuotas representativas de ahorro previsional voluntario.

La señora **Mónica Cavallini, Gerente General de la AAFM**, expresó que la industria de fondos mutuos tiene 1.600.000 partícipes, con US $35 mil millones de patrimonio bajo administración, representando el 18% del PIB. Existen 19 administradoras de fondos mutuos, con más de 2.000 series de fondos y 500 alternativas de ahorro previsional voluntario.

La participación de esta industria en el PIB se ha incrementado desde el 7% el 2000 al 18% el año 2010, con niveles similares a los de España, pero muy por debajo de los niveles de Estados Unidos o Brasil, países en los que los fondos de pensiones invierten en fondos mutuos, lo que ocurre muy poco en Chile.

Hizo presente que las crisis internacionales del año 2008 y 2011, si bien golpearon la industria de fondos mutuos, reduciendo el patrimonio bajo administración, fue en menor medida que en otros países, con una recuperación bastante rápida y sin que se generaran pérdidas en el número de partícipes.

Desde que se autorizó a otros actores a participar en el mercado del ahorro previsional voluntario (APV), los fondos mutuos han incrementado su participación en ese mercado, teniendo el año pasado más de 500 alternativas y USD $ 1.400 millones bajo administración, con 149.547 partícipes, lo que representa el 9,41% de la industria del APV.

Sostuvo que algunos hitos que han aportado al crecimiento de la industria de los fondos mutuos en el país son los siguientes:

1. Ley de Mercado de Capitales I, que incorpora el artículo 18 ter que incrementa el patrimonio bajo administración de los fondos mutuos y que permite el ingreso al mercado del APV.

2. Ley de Mercado de Capitales II, que permitió la transferencia de fondos no sólo de un fondo a otro de una misma administradora, sino que también entre administradoras diferentes, difiriendo el impuesto. Además, esta ley eliminó el IVA a las remuneraciones del APV, eliminando asimetrías con la industria de los fondos de pensiones.

3. Ley de Mercado de Capitales III, que autorizó el depósito de los reglamentos internos, lo que entregó flexibilización y acceso a oportunidades de mercado en el mundo.

La señora Cavallini señaló que en el caso de los beneficios tributarios para los inversionistas extranjeros, el Fisco no pierde nada porque hoy no está recaudando por este concepto. Con esas normas se está alentando a que inversionistas extranjeros vengan al país a invertir con todos los beneficios que ello genera para el país.

El señor Tisné añadió que desarrollar el mercado de capitales permite que lleguen recursos a sectores a los cuales hoy no llegan, lo que es tremendamente beneficioso para el país. Agregó que sin pecar de optimista, en unos 10 años más la industria de administración de fondos de terceros puede ser tan exitosa como lo es hoy la industria de exportación de frutas o la industria del vino. Por otro lado, si bien en el informe financiero se ha estimado en $ 400 millones anuales la menor recaudación por concepto de impuesto adicional, de lograrse lo proyectado por la ACAFI de que al año 2025 los inversionistas extranjeros tengan en el país US $ 10 mil millones invertidos en fondos de inversión, ingresará al Fisco por concepto de impuesto de 1° categoría entre US $15 a 20 millones. Además, muchas industrias llamadas “satélites” también se verían beneficiadas con el desarrollo de la industria de capitales como estudios de abogados, empresas auditoras, hotelería, turismo, etcétera, lo que se suma a la creación de numerosos puestos de trabajo altamente especializados. Por todo ello, concluyó, el proyecto es altamente beneficioso para el país.

La señora **María Paz Hidalgo, Directora de la AAFM**, se refirió a las mejoras que a juicio de la AAFM se requieren para asegurar la aplicación de los beneficios tributarios. En este sentido es necesario perfeccionar los artículos 104, 106 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, incorporando ajustes, de forma de asegurar la aplicabilidad de dichos beneficios.

Con respecto al artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se propone incluir a los instrumentos de renta fija en esta exención al impuesto a la renta. Sin embargo, hay ciertos mecanismos y definiciones en esta disposición que la hacen hoy poco aplicable y dificultan que las personas puedan hacer uso de este beneficio tributario.

Por su parte, el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta que establece la exención al mayor valor de la enajenación o rescate, según corresponda, de acciones con presencia bursátil, cuotas de Fondos de Inversión y cuotas de Fondos Mutuos, siempre que se cumplan con las exigencias prescritas en dicha disposición, establece una serie de exigencias cuando se trata de Fondos Mutuos que dificultan en la práctica la operatividad de esta norma. Por ejemplo, tratándose de cuotas con presencia bursátil de fondos mutuos, cuando se invierte en valores de oferta pública emitidos en el extranjero, la ley exige que estos valores deben generar y distribuir rentas al menos una vez al año, lo que obstaculizan en la práctica la aplicación de esta exención. Otro caso que genera dificultad tiene lugar cuando se deben distribuir intereses devengados, ya que esta obligación que impone la ley no reconoce la estructura de los fondos mutuos, debiendo, tal como ocurre con las acciones con presencia bursátil, distribuirse intereses en función de los intereses percibidos.

El señor **Axel Christensen, Vicepresidente del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda**, expresó la necesidad de contar con una industria de administración de fondos competitiva, toda vez que Chile presenta oportunidades interesantes para convertirse en un centro de servicios financieros, particularmente en la gestión de activos, objetivo al cual apunta el proyecto en discusión.

Sostuvo que la industria financiera es una industria en constante movimiento, que requiere mantenerse al día, para lo cual no sólo se debe reparar en la evolución de los distintos instrumentos financieros, sino que también en el estado de los otros países que tienen pretensiones similares.

En este contexto, Chile debe aprovechar las bondades que presenta, como su desempeño económico, su solidez financiera, y otras características que el proyecto busca profundizar para que esta industria sea más competitiva.

Hizo presente que la industria de gestión de fondos hoy administra cerca de US $ 40 mil millones. Su evolución se debe por un lado, al desarrollo y crecimiento económico del país, que genera un crecimiento del capital financiero que requiere de un servicio profesional de gestión y, al desarrollo particular de los fondos de pensiones, los que dentro de este capital financiero constituyen un cuerpo importante a administrar, que en estos 30 años han ido creando una expertise en el país en la gestión de activos.

Chile tiene, por tanto, un sitial de ventaja en relación al resto de los países de latinoamérica, lo que se traduce en que empresas nacionales con apoyo de profesionales como abogados y contadores chilenos están ofreciendo sus servicios financieros al resto del mundo, ya que no sólo tienen experiencia en la gestión de activos que se invierten en el país, sino que también en la gestión de activos que se invierten en toda la región.

De manera que Chile tiene las condiciones necesarias que nos distinguen de otros países para cumplir la aspiración de convertirnos en un centro financiero internacional.

En relación al proyecto de ley, afirmó que hay algunos elementos que permiten que el país se iguale con otras plazas que nos están disputando el sitial de centro financiero.

A modo de ejemplo señaló que Larraín Vial, que es uno de los administradores de fondos más importantes del país, tomó la decisión de exportar sus servicios financieros y ofrecer sus fondos al resto del mundo, pero como se percataron que Chile no ofrece necesariamente las mejores condiciones, optaron por irse a Luxemburgo.

Para evitar que estas situaciones continúen el proyecto propone modificaciones tendientes a mejorar las condiciones tributarias de los inversionistas extranjeros y unificar los cuerpos legales que regulan la administración de los distintos fondos, lo que permitirá terminar con las asimetrías entre los distintos instrumentos financieros.

El señor **Alberto Etchegaray, Integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Hacienda**, argumentó que las razones por las cuales permanentemente se están modificando y mejorando las normas que regulan el mercado de capitales son fundamentalmente dos:

1. El carácter dinámico y activo de este mercado. Si el mercado ve que no hay condiciones suficientemente interesantes, atractivas y competitivas para invertir en un determinado lugar, esa inversión se va a destinar a otros lugares. Hoy la información fluye de manera muy rápida, de manera que los inversionistas tienen muchos antecedentes para tomar sus decisiones de inversión. Además, existe mucha competencia, ya que numerosos países, incluidos algunos latinoamericanos, están realizando modificaciones legales para tener marcos jurídicos competitivos con incentivos tributarios para atraer inversión.

2. Los mecanismos de regulación del mercado de capitales son bastante detallados, lo que es una consecuencia de la crisis de 1982. A diferencia de la legislación anglosajona que se basa más en principios, la norma chilena es muy explícita, lo que ha generado una serie de cuerpos legales diversos para los distintos vehículos de inversión, con asimetrías que no tienen hoy fundamento. Por tanto, el carácter normativo de este mercado requiere permanentes modificaciones a objeto de igualar los incentivos que tienen otras partes del mundo.

Destacó que el país ya cuenta con lo más difícil en materia de mercado financiero que es la existencia de un Estado de Derecho, cuentas macroeconómicas ordenadas y la capacidad de hacer exigibles los contratos. Por tanto, lo que falta son ajustes que si buen son menores desde el punto de vista operacional son sustanciales al momento que las empresas toman sus decisiones de inversión. Hoy los inversionistas extranjeros están consultando qué ofrece el mercado chileno que pueda diferenciarlo del mercado colombiano, peruano o brasilero, cuáles son sus ventajas comparativas.

En relación al proyecto de ley, mencionó que esta iniciativa vuelve a establecer principios generales y elimina asimetrías regulatorias entre los distintos vehículos legales de inversión.

Por tanto, concluyó, de aprobarse este proyecto se estaría dando a los inversionistas extranjeros la señal de que están las condiciones en Chile para invertir de manera correcta.

El señor **Patricio Arrau, Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás**, recordó que al inicio del Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos el entonces Ministro de Economía, José de Gregorio, impulsó la modificación de la ley N° 18.815 para promover la industria de capital de riesgo, agregando el acápite privado, lo que es indispensable para invertir en proyectos y promover a los emprendedores.

En ese entonces, se entregó al Servicio de Impuestos Internos la facultad de poder requerir información para los efectos de administración, elusión e incluso evasión tributaria.

La industria de capital de riesgo, añadió, se afianza en los 90 y particularmente en los cinco primeros años de la década del 2000, básicamente impulsada por Corfo, que entrega recursos públicos en la medida que se cumplan determinadas condiciones como la presencia de 4

aportantes no relacionados, que la administradora debe ser una empresa informante de la SVS, etcétera. Con estas exigencias Corfo se preocupa de proteger los recursos públicos que están acompañando a los privados para promover el capital de riesgo. Esta estructura, explicó, se basa en un fondo administrado por terceros profesionales independientes que no es contribuyente porque es un vehículo de formación de capital. Una vez que el capital se forma deben pagar los impuestos que correspondan.

A partir del año 2009, el SII solicita a todos los administradores de fondos privados 3 declaraciones juradas muy detalladas que no sólo contienen la información que el proyecto propone en el artículo 94, ya que exigen un verdadero Fut del fondo, además de información detallada de distribución de dividendos, información de todas las transacciones de cuotas de fondos, etcétera. Las circulares del SII que exigen toda esta información son las N°s 1.804, 1.838 y 1.837.

En relación al número mínimo de aportantes del fondo, que el proyecto establece en dos en el artículo 92, estimó mejor la exigencia de Corfo de un mínimo de 4 aportantes, puesto que a su juicio 2 aportantes son pocos en una estructura privada de administración de terceros independientes con aportantes privados, donde la experiencia es fundamental.

En su experiencia profesional, de más de 12 años en esta área, lo que se requiere hoy es que, efectivamente, el SII con la información que posee evite que los fondos de inversión privados se utilicen para un objetivo distinto que el de generar riqueza a cuenta de terceros y de forma independiente, como utilizar este vehículo para administrar una menor carga tributaria del patrimonio propio o bien para realizar transacciones circunstanciales. Hoy se cuenta con la regulación y las herramientas de fiscalización necesarias para evitar este tipo de situaciones, lo que de aprobarse el proyecto tendrá un sustento legal.

El Diputado señor Montes manifestó la necesidad de conocer la evaluación global de los diversos cuerpos legales que se han dictado para modernizar el mercado de capitales. Asimismo, saber qué parte del crecimiento del país obedece al desarrollo de este sector.

A su juicio, este proyecto en una perspectiva de conjunto no genera un aporte significativo.

Se ha dicho en las exposiciones, especialmente por el señor Etchegaray, que a mejores condiciones tributarias mayor atracción de capital y mejor crecimiento del sector financiero. Sin embargo, también puede decirse que con buenos instrumentos financieros que se adelantan al mercado se puede dar saltos importantes como ocurrió con la letra de cambio para fomentar el mercado de la vivienda.

Una cosa, añadió, es que se quiera desarrollar el mercado financiero porque se quiere generar más puestos de trabajo, obtener utilidades, asumir un rol internacional, pero no siempre el desarrollo del sector financiero está vinculado al desarrollo de determinados sectores reales del país. Consultó, ¿hasta qué punto este proyecto está concebido para potenciar ventajas

comparativas?, ¿qué vínculo tiene con energía solar, capacitación laboral, modernización de las pymes, innovación, etcétera?

Tampoco tiene claridad del impacto de estas leyes en el costo del financiamiento de las empresas y del Estado. Cree que la liquidez si bien depende de este factor también depende de elementos más macro de la economía.

El señor Christensen constató que hay utilidades un tanto decrecientes en las sucesivas reformas al mercado de capitales, observándose que el impacto de MKI fue mucho mayor en el desarrollo de este sector que las leyes posteriores que se han dictado para este mercado. No obstante ello, es necesario llevar a cabo los perfeccionamientos que requiere este mercado, ya que si bien son menores en cuanto al impacto global son indispensables para que este sector sea más competitivo.

Los economistas Vittorio Corbo y Klaus Schmidt- Hebbel elaboraron hace un par de años un trabajo que da cuenta del beneficio que ha tenido el desarrollo de la gestión de activos por parte de los fondos de pensiones. En su opinión, los beneficios del desarrollo de este mercado son innegables y tangibles.

Finalmente, expresó que Chile debe decidir en qué áreas tiene ventajas competitivas.

El señor Etchegaray manifestó que las constantes modificaciones tanto a la ley de sociedades anónimas como a la ley de mercado de valores obedecen, además, del carácter dinámico y competitivo del mercado de capitales, a la realidad del marco jurídico estipulado en el año 1982, que exige una regulación muy detallada y específica de las distintas actuaciones, de manera que cualquier modificación que se quiera generar debe ser también por ley. Como el gran cambio en materia de mercado de capitales ya se produjo con MKI, las leyes posteriores han tenido un impacto menor, lo que obliga a discutir y debatir la conveniencia de que la ley sea tan detallada, en circunstancias que podría ser una normativa basada más en principios, como acontece en la mayoría de los países desarrollados, entregándole a la autoridad regulatoria de turno mayores atribuciones regulatorias. Sin embargo, en Chile existen muchas suspicacias de otorgarle tanto a la SVS como al SII mayores atribuciones regulatorias, porque en definitiva se estaría sujeto a la discrecionalidad de la autoridad política de turno. Ese temor, agregó, se aquieta convirtiendo a la SVS en una comisión de valores colegiada.

Pero mientras no se entregue a un ente regulador la atribución para definir los detalles de la normativa del mercado de capitales, lamentablemente será necesario seguir realizando estas modificaciones.

Respecto del vínculo entre el mercado de capitales y el sector real, expresó que para financiar buenas ideas debe haber inversionistas interesados, contar con un marco jurídico conocido e incluso tener incentivos tributarios para desarrollar ciertos tipos de proyectos, etcétera.

Reconoció que es necesario un análisis más profundo tanto del real impacto de las diversas leyes que se han dictado en torno al mercado de capitales como un estudio en profundidad de las diversas aristas entre este mercado y otros sectores de la economía del país.

Por último, en relación a los FIP indicó que si bien el SII tiene atribuciones para realizar fiscalizaciones, es indispensable que cualquier consideración que en el futuro pueda tener la fiscalización de estos fondos debería considerar la dictación de normas conjuntas entre la SVS y el SII, ya que no basta la mera coordinación entre estos órganos fiscalizadores.

El señor Arrau explicó que se requiere más mercado de capitales porque básicamente existen dos formas de intermediar financieramente: la banca y el mercado de capitales, que es el sector que permite ir creando instrumentos de financiamiento nuevos.

La vinculación de este mercado con sectores concretos de la realidad es más fácil de advertirla a nivel de grandes empresas, porque a nivel de pymes por ejemplo no tienen la alternativa de participar en este mercado, siendo su única opción de financiamiento los bancos. No obstante ello, los fondos de inversión están tratando de incentivar las sociedades de garantía recíproca y de desarrollar una industria de factoring.

Por último, recalcó que este proyecto también mejora las condiciones de las administradoras de fondos públicos.

El señor Briones, en relación a la vinculación entre crecimiento y desarrollo financiero, señaló que teóricamente se saben dos cosas con certeza: que la causalidad es bastante difícil y que hay evidencia que muestra que desarrollo financiero lleva a desarrollo económico. En el trabajo citado de los economistas Corbo y Schmidt- Hebbel se indica que el desarrollo del mercado de capitales en Chile en los 90 y principios del 2000 explicaría el 2,5 %del crecimiento del país.

- <u>Comparado</u>

ÍNDICE

	Páginas
1. Constancias reglamentarias previas	1
2. Antecedentes generales	2
3. Antecedentes presupuestarios y financieros	8
4. Discusión general del proyecto	12
5. Discusión particular del proyecto	22
6. Texto aprobado por la Comisión	48
7. Tratado y acordado	109

8. Intervenciones de los invitados 111

- Señor Fernando Tisné 111
- Señora Mónica Cavallini 113
- Señora María Paz Hidalgo 114
- Señor Axel Christensen 115
- Señor Alberto Etchegaray 116
- Señor Patricio Arrau 117

9. Comparado